



Leviatán

REVISTA DE HECHOS E IDEAS

Primavera 1988

31

II Epoca

EL 31 CONGRESO
DEL PSOE

Ramón Vargas-Machuca

EL IMPULSO FEDERAL
DEL SOCIALISMO

Antoni Castells

CATALUÑA Y LOS CAMINOS
DE LA IZQUIERDA

Pascual Maragall

FIDELIDAD NACIONAL
Y FIDELIDAD ESTATAL

José Ramón Recalde

POLITICA ECONOMICA
DE LOS SOCIALISTAS

Julio Rodríguez

SOCIALISMO Y FEMINISMO:
RELACION ABIERTA

M.^a Dolors Renau

LA IZQUIERDA
Y EL NACIONALISMO

Andrés de Blas

EL ESPECTRO
DEL NACIONALISMO

Luciano Pellicani



Leviatán

Revista de hechos e ideas



ACTUALIDAD

De la mala conciencia a la conciencia posible: el 31º Congreso del PSOE. <i>Ramón Vargas-Machuca</i>	5
La ponencia económica del 31.º Congreso del PSOE. <i>Julio Rodríguez</i>	19
El socialismo español, en la senda del federalismo. <i>Antoni Castells</i>	29
Socialismo y feminismo: una relación abierta. <i>M.ª Dolors Renau</i>	35
El futuro de Cataluña y los caminos de la izquierda. <i>Pascual Maragall</i>	43
Cooperación frente a empobrecimiento. <i>Stuart Holland</i>	53
Hacia una estrategia de la socialdemocracia en Argentina. <i>Torcuato S. Di Tella</i>	59

ANÁLISIS Y DEBATE

La izquierda española y el nacionalismo. El caso de la transición. <i>Andrés de Blas Guerrero</i>	71
Fidelidad nacional y fidelidad estatal. <i>José Ramón Recalde</i>	87
El espectro del nacionalismo. <i>Luciano Pellicani</i>	103
La Europa del Este y central, la izquierda europeo-occidental y la cuestión alemana. <i>Tilman Fichter</i>	111

ENTREVISTA

Entrevista con Hans-Jochen Vogel. <i>Manuel Moral</i>	119
--	-----

LIBROS

<i>Miguel Porta, Antonio Santesmases, Arnoldo Liberman</i>	127
--	-----

Leviatán

REVISTA DE HECHOS E IDEAS

Fundada en 1934 por Luis Araquistain

Director:

Salvador Clotas

Coordinador:

Manuel Ortuño Armas

Comité de Dirección:

Antonio G. Santesmases

Ludolfo Paramio

M. Reyes Mate

Ramón Vargas-Machuca

Julio R. Aramberry

Santiago Roldán

Miguel Satrustegui

Comité Asesor:

Pedro Altares

Joaquín Arango

Carlos Barral

Carlota Bustelo

J. María Castellet

Fernando Claudín

Elías Díaz

M.A. Fernández Ordóñez

X. Rubert de Ventós

F. Fernández Santos

Salvador Giner

Enrique Gomáriz

J.A. González Casanova

E. Haro Tecglen

Francisco Laporta

Marta Mata

J. Martínez Reverte

Secretaría de Redacción:

Mary Carbone

Editada por la Fundación Pablo Iglesias.

Las ideas vertidas en cada artículo son responsabilidad de sus autores. LEVIATAN no se identifica necesariamente con sus contenidos. LEVIATAN no se compromete a devolver los artículos que no hayan sido solicitados, ni a mantener correspondencia sobre los mismos.

Redacción y Administración: Monte Esquinza, 30.

28010 Madrid. Tel.: 410 46 96.

D. Legal: SE. 466-1978. I.S.S.N.: 0210-6337.

Distribuye: Siglo XXI de España, S.A. - C/. Plaza, 5 - 28043 Madrid.

Realización Gráfica: Carácter, S.A. - C/. Fernández de la Hoz, 60 - 28010 Madrid.

Esta Revista es miembro de ASEI.



ACTUALIDAD

1

DE LA MALA CONCIENCIA, A LA CONCIENCIA POSIBLE El 31.º Congreso del PSOE

Ramón VARGAS-MACHUCA

Los congresos son, por definición, un momento importante en la vida de los partidos. En ellos se confirman, o se transforman, los programas y los idearios. En los congresos se consolida, o modifica, una determinada distribución del poder interno en el seno de la organización. A pesar de ello, no parece que la opinión pública esté muy convencida de que las decisiones que puedan tomarse en los mismos vayan a tener una incidencia trascendental en la vida de los ciudadanos. Estos, incluso los que simpatizan con el partido en cuestión, se toman sus distancias en relación con lo que pueda ocurrir en el transcurso de un congreso de partido.

Atribuir este desinterés al recelo secular de una buena parte de los ciudadanos por la acción política, no me resulta del todo convincente. En este caso

sucede, más bien, que los propios congresos suelen transmitir a la opinión pública un aire de liturgia particular, de ajuste de cuentas interno, de rito para iniciados, que

***El partido socialista ha
tenido que desprenderse
a marchas forzadas de
ciertas creencias
y determinados prejuicios
si quería acercarse a la
realidad.***

hace que la gente tome sus distancias, o den la espalda a las deliberaciones y resoluciones de aquéllos.

En los congresos reaparecen los mitos propios, se reafirma la lealtad a los orígenes y, sobre todo, se hace gala de una jerga, y de un rutinario academicismo, que no hace sino mostrar el desgaste de cierta cultura política y su lenguaje. En particular, los congresos de los partidos de izquierda suelen brindar la oportunidad para que en ellos aflore la mala conciencia, para que se ponga de manifiesto, con todo su dramatismo, el malestar que provoca la percepción de la distancia o el abismo entre lo que diariamente se va consiguiendo y lo que se esperaba, entre los resultados de un programa de acción y el ideal representado en la doctrina.

Un aire distinto

Por eso, si algo hay que agradecer, de entrada, al 31.º Congreso del PSOE, es el esfuerzo realizado en el mismo por alejarse de esa liturgia congresual, por huir de una retórica que busca consuelo al *impasse* del presente y a las incógnitas del futuro, sólo mirando hacia atrás o hacia sí mismo. Y tiene el PSOE motivos más que sobrados para alejarse del modelo habitual. En primer lugar, no pocos han sido los disgustos que le ha supuesto mirarse en el espejo de sus congresos. Ahí encuentra

propuestas, algunas imposibles de cumplir, otras contradictorias y, sobre todo, la sensación de que el universo de realidades, pronósticos y objetivos que allí se representaban poco tenían que ver con lo que, más allá de las puertas del congreso estaba ocurriendo. En segundo lugar, cuando se dispone del poder del Estado para intentar cumplir los compromisos políticos contraídos, toda apuesta política no representa para los intereses y expectativas de los ciudadanos un brindis al sol ni una piadosa declaración de intenciones, por el contrario, su cumplimiento se transforma en un reto ineludible e inaplazable.

Hasta hace muy poco, la cultura política del socialismo se componía de un conjunto diverso de tradiciones, descripciones de la realidad y proposiciones de futuro, que no estaban pensadas para la sociedad española de nuestros días, ni para ponerlas en práctica sirviéndose del poder del Estado —y de un Estado tan particular como el español—. Eran ideas pensadas más allá de un horizonte de poder. Es más, representaban, en relación al poder, su propia impotencia o, en todo caso, un *ethos* de resistencia. El Partido Socialista ha tenido que desprenderse, a marchas forzadas, de ciertas creencias y determinados prejuicios si quería acercarse con un mínimo de acierto a la realidad. Ese esfuerzo, que ha sido fruto más bien de la necesidad y no tanto una virtud procurada, le ha permitido al PSOE presentarse ante este Congreso desembarazado de los «tics» con los que cualquier partido de izquierda suele acudir a sus congresos. Este, por lo tanto, no ha sido el Congreso de la mala conciencia, sino, al menos, el de la conciencia de la realidad que le rodea. Los textos del Congreso huyen de toda mistificación, expresan una evaluación razonable de los objetivos políticos alcanzados en diez años de democracia, advierten de las insuficiencias y errores que se han producido, reconocen el calado de las transformaciones sociales que están ocu-

riendo en nuestro contexto civilizatorio. Y, aunque el Congreso asume con sus silencios y ambigüedades la cuota de perplejidad que dichos cambios obliga a pagar, también el socialismo democrático, sin embargo, sigue apelando a la vigencia de su memoria ética, como razón que justifica el diseño de una oferta programática, posible y progresista para los próximos años.

Que la izquierda menos arcaica abandone definitivamente los predios del dogmatismo, es una buena noticia. Este Congreso no ha desaprovechado la ocasión para adherirse a ese talante intelectual que recela de las respuestas completas y definitivas a problemas cuya novedad y complejidad no resiste la contestación de pronuntario por todo remedio. Así, la ponencia, el debate y, finalmente, las resoluciones, no han terminado cerrando las cuestiones pendientes, más bien han favorecido que el partido, huyendo de todo espejismo, termine reconociendo cuáles son los verdaderos problemas y los grandes desafíos de la sociedad contemporánea, y cuál el alcance y los límites, en las actuales circunstancias, de nuestras respuestas posibles. Es, en este sentido, que éste ha sido un Congreso distinto.

Luces y sombras de un balance

Comienzan las resoluciones del Congreso haciendo un reconocimiento de los logros políticos alcanzados en España en los diez últimos años, y de la contribución socialista a que eso fuera así: «Hemos dejado atrás —dice el preámbulo— definitivamente problemas e incertidumbres históricas de nuestro destino colectivo. Este nuevo período de nuestra historia ha sido construido por todos los ciudadanos; los socialistas podemos sentirnos orgullosos de nuestra contribución a la tarea colectiva de edificar una democracia donde han arraigado las libertades y los derechos de

*En un país como el
nuestro los gestos y las
imágenes son un
elemento importantísimo
de pedagogía política.*

los ciudadanos y de los pueblos, una sociedad moderna, inserta en Europa, con un futuro en el que los problemas no oscurecen la esperanza, ni la voluntad de los socialistas de continuar siendo el instrumento aglutinador de todas las fuerzas del progreso.»

Que en España exista una democracia consolidada, que los desajustes básicos de la economía estén siendo corregidos razonablemente, y que este país sea mucho más respetado en el mundo, no deja de ser, por sabido, un éxito extraordinariamente singular para quien conoce la historia de España y, por tanto, algo de lo que, partidos como el socialista, tienen todo el derecho a poner en su haber, de un modo no exclusivo, pero sí preeminente. Pero, afortunadamente, el Congreso no se ha instalado simplemente en el auto-bombo, sino que, a renglón seguido, ha abordado, en primer lugar, el examen de las deficiencias que, durante los últimos años, se han acumulado en el debe del partido y, en segundo lugar, ha advertido que, una vez cubiertos satisfactoriamente aquellos objetivos que podrían denominarse «nacionales», ha llegado la hora de aportar soluciones propias y nuevas para una sociedad con retos similares a los de los países desarrollados.

Del análisis de las deficiencias y dificultades, así como de sus causas, se puede concluir que el PSOE reconoce un cierto

*La izquierda se debate
entre la fidelidad al
pasado, el vértigo del
futuro y la incertidumbre
ante los quehaceres del
presente.*

declive de su credibilidad. Eso se achaca a diversas causas, pero quiero detenerme en la alusión del Congreso a dos de ellas: la pérdida de la capacidad de comunicación y ciertos comportamientos contrarios al estilo moral que se supone a los socialistas. ¿A qué se debe, a fin de cuentas, la pérdida de la capacidad de persuasión del partido y del Gobierno? En primer lugar, a que se han cegado circuitos privilegiados de intermediación con la sociedad. Así, aquella inicial luna de miel entre el Gobierno socialista y los sectores más dinámicos que, se quiera o no, en una sociedad desarrollada, actúan como promotores de legitimación social, se ha ido transformando en recelo e incomunicación. Esto, obviamente, ha impedido trasladar con nitidez a la opinión pública el alcance de muchas iniciativas del Gobierno, tampoco ha favorecido el asentamiento de un sentido de solidaridad frente a la inercia del impulso corporativo y, por último, ha privado al partido y al Gobierno de información y de opiniones eficaces que permitieran dar con las respuestas que armonizaran, de la mejor manera posible, intereses muy diversos, concitando así el menor rechazo social posible.

En segundo lugar, y así lo reconoce el Congreso, la pérdida de credibilidad y de confianza va unida, también, a que no se ha ejercido la suficiente firmeza a la hora de erradicar determinadas prácticas políticas, y evitar actitudes personales que re-

pugnaban con la tradición de austeridad y de moralismo de la que ha hecho gala el PSOE desde su fundación. En ocasiones, por ejemplo, se ha visto cómo los destellos del poder de siempre, los símbolos de sus convenciones más reaccionarias han deslumbrado a más de un gobernante de izquierdas, que se ha dejado raptar por la quincalla del viejo estilo de vida. Advierte, asimismo, el Congreso, de las consecuencias que se derivarían para el partido si no se acaba de una vez con los casos de clientelismo, patrimonialización u oligarquización del partido, que no son sino formas de apropiación privada y de enajenación ilegítima de los intereses públicos. Me parece bien que el Congreso llame la atención sobre estas conductas, aunque constituyan fenómenos aislados, por lo siguiente: en un país como el nuestro, con tan escasa cultura política, con tan poco aprecio por la acción política, que tiene tras de sí una larga historia de fracasos de cuantos procesos de reforma se han intentado en su historia a través de lo público y estatal, los gestos y las imágenes son un elemento importantísimo de pedagogía política, y contribuyen a fortalecer la credibilidad en los fines de las grandes decisiones programáticas de los gobiernos y de los partidos.

**Una realidad en profundo cambio,
y una izquierda perpleja**

Decía más arriba que los textos del Congreso denotaban una cierta frescura intelectual, lo que favorecía una aproximación más ajustada a la realidad. Y si algo distingue, principalmente, a la que nos rodea, es la envergadura de las transformaciones sociales que se están produciendo en nuestras sociedades. Aludir a las transformaciones científico-técnicas y a su trascendencia, constituye, hoy en día, por reiterado, una alusión trivial; pero lo cierto es que los procesos de transnacionalización han puesto en cuestión, por ejemplo, mu-

chas de nuestras apelaciones al poder del Estado, que los cambios productivos y de la sociedad laboral arremeten contra nuestras creencias en la solidaridad de clase y la centralidad obrera, favorecen la segmentalización de intereses y la aparición de pseudoclasas.

Igualmente, los desarrollos de las tecnologías de la información y la comunicación, su poder transformador de los comportamientos culturales, producen en las ideologías políticas, sobre todo, desconcierto y desasosiego. Pues bien, es de agradecer que la aproximación del partido a los problemas del desarrollo tecnológico no sea para reproducir toda una literatura de recelos, sospechas y lamentaciones; por el contrario, toma nota de la naturaleza ambivalente de este proceso, que puede acarrear consecuencias liberadoras o destructoras para la humanidad, que puede incrementar la información y el poder de los individuos, o transformarse en un instrumento de manipulación de los mismos. Sólo el conocimiento de su capacidad de mutación de las condiciones de vida y de innovación cultural, y sólo las decisiones políticas que, a partir de ese conocimiento, se adopten, determinarán que dichas transformaciones terminen siendo emancipadoras o destructoras.

En cualquier caso, bueno es que desde el principio tengamos claro cuál es la situación de partida ante la que nos sitúan los desafíos del presente, y reconozcamos que el dinamismo social va por delante de la capacidad de respuesta de la política. La izquierda ha estado confiada en su poder para pronosticar el futuro y transformar el presente, pero lo cierto es que las grandes transformaciones de la contemporaneidad han sido, a la postre, más consecuencia del desarrollo social y científico-técnico que de las intervenciones políticas, y hoy el pensamiento progresista se siente a remolque de este proceso de cambio. En un clima de desconcierto, de cierto descre-

dito de las creencias ilustradas y del auge de las inclinaciones irracionalistas, la izquierda política ha extraviado su hegemonía cultural. De este vacío se ha aprovechado la derecha para enarbolar con éxito las viejas banderas; mientras tanto, la izquierda se debate entre la fidelidad al pasado, el vértigo del futuro y la incertidumbre ante los quehaceres del presente. Por eso, el reto de la izquierda europea es si será capaz de dirigir un proceso de cambio de estas características.

Razones y programas

Ante una situación como ésta, se pregunta el Congreso: ¿Con qué contamos? En primer lugar, con las razones propias, que son las que dan sentido a un proyecto político y lo diferencian de otro. Sin un horizonte de ideas con las que contrastar las decisiones, toda opción política acaba siendo una opción no sólo inmoral, sino, también, irracional. Por eso, el Congreso reafirma su identificación con la tradición progresista, la vigencia de sus valores emancipatorios en una formulación más acorde con el desarrollo actual de la cultura moral. De ahí que el socialismo democrático reivindique la libertad en cualesquiera de sus dimensiones, bien como la capacidad de intervención y de decisión de los individuos en la organización de lo comunitario (lo que se conoce como «libertad de los antiguos»), bien la libertad

***La concertación es un fin
en sí misma, en tanto
que posibilita la
concreción histórica del
ideal de la democracia
participativa.***

entendida como ausencia de restricciones («libertad de los modernos»). Por otra parte, la apuesta por la igualdad no es la postulación de un igualitarismo nivelador, sino la lucha contra toda explotación, contra la desigualdad de poder que aquélla consagra. Que en este contexto el Congreso haya subrayado la naturaleza fundamental de la lucha contra la desigualdad por razones de sexo es, a todas luces, un síntoma de progreso intelectual. Por último, frente a la oleada de egoísmo corporativo, de reclusión en lo privado, apelar a la solidaridad como expresión contemporánea de la fraternidad es alimentar una de las tradiciones morales más acreditadas por la cultura política de izquierdas.

Y para ir ajustando la vida social a estos valores no hay otra forma política que la democracia, entendida como procedimiento de decisión colectiva y como virtud cívica, cuyo ejercicio y profundización favorecen al enraizamiento social de la libertad, la igualdad y la solidaridad. Con esto, el Congreso continúa la costumbre de definir al socialismo democrático como profundización de la democracia, y sintoniza con aquella cultura moral que considera la democracia, el consenso, la comunicación dialógica, el autogobierno, como la expresión más adecuada de ideal progresista de la libertad igualitaria.

Para una tradición política como la de izquierdas, acostumbrada a hacer uso de

***Racionalismo,
individualismo solidario,
libertad igualitaria, son
los valores de la tradición
política que debe
recuperar para sí la
izquierda europea.***

un repertorio muy completo de respuestas, las proposiciones ideológicas del Congreso pueden parecer insuficientes. A mi juicio, el Partido Socialista ha hecho un esfuerzo interesante en los últimos años, que en este Congreso ha ratificado, para desembarazarse de una pereza ideológica que sólo conduce a la esterilidad. Pero, a la vez, esto ha producido una explicable satisfacción e inquietud al descubrirse carencias e incertidumbres que, hoy por hoy, aquejan al pensamiento político progresista ante una situación como la presente. Así las cosas, hay quienes, desde las filas del socialismo incluso, pretenden acabar de una vez con esta zozobra, actuando ya como si diesen por agotados todo estímulo ideológico proveniente de la izquierda, instalándose cínicamente en el mimetismo de la derecha, con la coartada del anuncio de la defunción de todo lo ideológico. Pero cabe, sin embargo, otra actitud de mayor lealtad intelectual como es la de abrir, sin exclusiones ni hipotecas, un debate sobre las señas de identidad y el diseño estratégico del socialismo democrático, atendiendo a las demandas de una sociedad en transformación cuyos derroteros ni sospechábamos hace unos años. El Congreso ha apostado por esta solución asumiendo la iniciativa del Programa 2.000, que invita a la discusión a cuantas personas, de dentro y fuera del partido, estén interesadas por el porvenir del socialismo. Es bueno que la dirección del partido dé cumplimiento a este sentir del Congreso: que no recele de la discusión de las ideas, y convoque a quienes sientan la necesidad o el deseo de aportar sus razones a este empeño. Puede ser un diálogo sin precedentes en nuestro contexto, y una ocasión única, cuyas consecuencias serán, sin duda, estimulantes para la sociedad española y para el socialismo europeo.

Pero un partido político, y menos un partido como el socialista, con importantes responsabilidades de gobierno, no es un instituto de análisis y prospectiva, ni

simplemente una fundación ideológica, sino que debe promover políticas concretas como respuesta de actualidad a las demandas del momento. ¿Qué pueden esperar los ciudadanos para los años próximos de la acción política de los socialistas? El Congreso ha formulado así sus objetivos para el futuro inmediato: hacer que los españoles obtengan unos servicios, una calidad de vida y unas oportunidades similares a las que están al alcance de la media de los europeos. Ahora bien, ése no debe ser un logro al precio de acrecentar las desigualdades y dejar en la marginación, o en el camino, a aquella parte de la sociedad peor situada al inicio de la travesía. En realidad, detrás de las políticas concretas y de las iniciativas sectoriales por las que abogan las resoluciones del Congreso hay tres objetivos básicos: crecimiento solidario, fortalecimiento de un Estado democrático, eficaz y redistributivo y, por último, avanzar hacia la democracia participativa. Con ello se conseguirá incrementar el bienestar de los españoles y disminuir las desigualdades de su sociedad. La convicción del Congreso es que para hacer triunfar un programa de esta naturaleza, que procure, en definitiva, eficacia y justicia, que apueste por la racionalidad y la solidaridad, se requiere el concurso de dos elementos básicos: ganar la apuesta de la reforma en profundidad del Estado y corresponsabilizar con el proyecto a una buena parte, al menos, de la representación social de los intereses.

El Congreso, al definir sus propósitos en relación con el Estado, expresa una voluntad muy precisa: mejorar los servicios públicos de carácter universal, como la educación, la sanidad y la justicia, y lograr una administración a la vez descentralizada e integrada, democrática y eficaz. El Congreso apuesta, pues, por un Estado fuerte, en tanto que capaz de cumplir sus funciones, eficaz, transparente y participativo. El Estado así ideado es, desde la concepción del socialismo democrático, un instru-

***El partido socialista
transita paulatinamente
hacia una nueva cultura
política que se está
formando al ritmo de las
mutaciones sociales.***

mento y un espacio idóneos para la promoción y consolidación de programas de naturaleza progresista. Ahora bien, acortar las distancias entre ese ideal y el Estado concreto que padecemos sigue constituyendo uno de los desafíos más urgente y pendiente para los socialistas españoles.

En una sociedad como la española que, a pesar de ser cada vez más abierta, pluralista y desarrollada, sigue arrastrando inercias corporativas y de disgregación, y que recela de todo proyecto universalizador, de cualquier apelación al interés general, no resulta fácil hacer triunfar un programa de objetivos como el propuesto por el Congreso para los próximos años. Al fin y al cabo, se exige asumir un conjunto de renuncias y beneficios en el convencimiento de que ese esfuerzo de adaptación y renovación terminará garantizando a la inmensa mayoría el resultado más ventajoso posible. En mi opinión, el éxito del programa y el cumplimiento de los objetivos depende, en buena medida, de que los interlocutores y receptores sociales del mismo lo asuman como propio, conscientes de que de su rechazo sólo se derivarían consecuencias inevitablemente más negativas que de su aceptación. Pero, para corresponsabilizar a los agentes sociales más relevantes con el desarrollo de estas políticas previstas en el Congreso, hace falta que se ofrezcan, a su vez, mayores posibilidades de participación a la hora de las decisiones. De ahí que el Congreso, al

Europa resulta el espacio propio para las propuestas e iniciativas que brotan de las tradiciones del socialismo democrático.

impulsar como objetivo la profundización de la democracia, mayor redistribución del poder, promoción de nuevos espacios de participación democrática como productores, consumidores y ciudadanos en general, no esté haciendo un brindis al sol, sino que de alguna manera está vinculando muy seriamente el éxito de sus políticas a la concertación, primero, y al desarrollo de la democracia participativa, después. La concertación —y esto no lo afirma expresamente el Congreso, pero muy difícilmente puede no sobreentenderse— no es sólo un medio que haría más fácil la consecución de los objetivos previstos, en tanto que la paz social puede considerarse, hoy en día, fuerza productiva, sino que, desde la concepción del socialismo democrático, es un fin en sí mismo en la medida en que la práctica de la concertación favorece el consenso, el autogobierno, la extensión de la democracia al universo social y económico, en fin, posibilita la concreción histórica del ideal de la democracia participativa.

No quería pasar por alto, en este repaso de las políticas concretas recomendadas por el Congreso, la dimensión europea que debe tener el horizonte de objetivos comentados. No es pensable, y muy particularmente en nuestro caso, debido a la fragilidad de nuestro proceso histórico de modernización, que fueran los límites de lo nacional el ámbito autosuficiente para llevar a cabo una tarea como la que aquí se

propone. Las dificultades del Estado moderno para dar cumplimiento a las funciones para las que es requerido y la transnacionalización, como fenómeno social contemporáneo, empujan a concebir escenarios más amplios a la hora de encontrar una respuesta razonable a los grandes desafíos del momento. Europa resulta, a juicio del Congreso, el espacio propio para ir poniendo en práctica las propuestas e iniciativas de futuro que brotan de las tradiciones del socialismo democrático.

Peter Glotz ha venido glosando, de un modo atractivo en los últimos tiempos, la identidad y la actualidad europea de ese socialismo democrático. El viejo continente posee la experiencia suficiente para impulsar desde nuevas bases los valores de la modernidad y de la tradición ilustrada. En un mundo en el que las amenazas son tan grandes como las posibilidades de transformación liberadora, existen más que nunca motivos para apostar por una reconstrucción de aquella cultura, aunque no falten los que continuamente vocean su agotamiento. Como dice Habermas, no hay más cura para las heridas de la Ilustración que la propia Ilustración radicalizada. Racionalismo, individualismo solidario, libertad igualitaria, resolución no violenta de los problemas, son los valores de la tradición política que debe recuperar para sí la izquierda europea, con ambición y con toda razón histórica. Esa será una opción infinitamente más fértil que alimentar su desconcierto con el miedo al apocalipsis o con la meditación oriental.

Transición a una nueva cultura de izquierda

No quería, por último, dejar pasar la ocasión sin llamar la atención sobre lo que, a mi juicio, y más allá de los acuerdos del Congreso, constituye lo más singular del mismo. Este ha sido un Congreso, sin

duda, de transición: no porque el contexto político general o la vida orgánica del partido expresen un especial aire de provisionalidad, sino porque las discusiones, las proposiciones, el Congreso en sí, revelan bien a las claras que el partido transita paulatinamente de una cultura política, en la que la inmensa mayoría de nosotros hemos forjado nuestras razones y opciones políticas, hacia una nueva cultura política que se está formando al ritmo de las mutaciones sociales.

La izquierda, en España, ha vivido durante años instalada en una abigarrada constelación de creencias, unas de origen marxista, otras libertarias, algunas laicas y racionalistas, y no pocas religiosas. Era una cultura política de resistencia y para la resistencia, que se definía, generalmente, como negación; era, por antonomasia, «anti»: antifranquista, anticapitalista, antireformista, antiyanki, antiestatalista. Pero, cuando la resistencia fue ya sólo un relato del pasado —al menos para el sentido común de la inmensa mayoría de los españoles—, y cuando muchos de los mitos ideológicos que le acompañaron han perdido su vigencia, se quedaron sin las razones que le daban consistencia y sin capacidad para resolver cualesquiera de los problemas del presente, la izquierda comenzó a sentir que todo se movía bajo sus pies y cunde el desconcierto. Ante esta situación hay, sin embargo, quien prefiere mantenerse fiel a lo de siempre, consolando su desencanto con el expediente fácil de llamar a quien cambia arrepentido o renegado. Hay, también, quien en esta circunstancia considera que la única actitud elogiada es, ante todo, salvar la coherencia moral de sus opciones, instalándose por principio en la disidencia, dado que todo compromiso terminará resultando insatisfactorio y distorsionador a la luz de cualquier trascendental moral. Pero la apelación a las declaraciones de principios, el recurso a las viejas recetas o la disidencia, todas ellas opciones moralmente

***Una nueva izquierda
debería recuperar para sí
aquel sentimiento
ilustrado en favor del
individuo como fin
y nunca como medio.***

respetables y alguna de ellas, en muchos casos, más que respetables, necesarias, no suelen contribuir a resolver la incógnita diaria de cuál de las opciones posibles en presencia es la más racional y la más ventajosa desde la perspectiva de los fines que se persiguen. Así, pues, mientras determinados discursos sobre lo ético invitan a decir no o a abstenerse, la acción política por su propia naturaleza exige decidir por uno u otro plan de acción concreto.

Así, por ejemplo, la complejidad de los problemas con los que se enfrenta una política económica no encuentran respuesta satisfactoria con el recuerdo de la maldad esencial del capitalismo y del mercado, sino en programas, cuyo éxito suponga tanto una disminución progresiva de las condiciones de explotación y de las desigualdades de poder, como el incremento del bienestar de aquellas sociedades a las que dichos programas están dirigidas. Los socialistas llevan años insistiendo en que la prioridad suprema de la política económica del Gobierno es la creación de empleo, pero sabemos que para conseguir dicho objetivo es una condición necesaria tener éxito en la resolución de otros desajustes, también importantes, de la economía española, aunque éstos puedan ser considerados, desde el punto de vista moral o político, instrumentales o secundarios, pero sin cuyo concurso difícilmente se podría conseguir la prioridad de las prioridades. Así, decimos

***El Congreso del PSOE
no ha sido el Congreso de
la mala conciencia, sino
el de la conciencia
posible.***

que hay que crecer, aumentar la inversión, el excedente de explotación de las empresas, controlar la inflación, promover el ahorro, moderar los salarios, reducir el déficit público... Claro que lograr todo esto supone articular un conjunto de acciones sectoriales cuyas consecuencias inmediatas, al menos, no se compadecen mucho con lo que desde la izquierda por lo común se había entendido como políticas económicas del socialismo. Este razonamiento constituye, hoy en día, un lugar común, una obviedad que ningún político de izquierdas mínimamente responsable se atrevería a minusvalorar públicamente, aunque, justo es decirlo, hace cinco años no era algo tan claro, ni siquiera para quienes se disponían a asumir entonces las responsabilidades de Gobierno en el país.

Se ha destacado en el Congreso la prueba que supuso para el partido afrontar el referéndum de la OTAN. A mi juicio, las dificultades que aquello representaba no encuentran su explicación más importante en el hecho de que hubiera que desdecirse, o en la existencia de una opinión pública desfavorable, sino en que allí se estaba librando un duro enfrentamiento entre nuestra conciencia anterior —la cultura de resistencia—, la que nosotros mismos habíamos alimentado como lo más plausible de nuestro propio pasado como izquierda, y la necesidad de reconocerse en una forma nueva de afrontar la acción política desde la izquierda. Los ciudada-

nos asistieron perplejos a este ajuste de cuentas de la izquierda consigo misma, entre aquella parte de la izquierda, y de nosotros mismos, que se sentía comprometida con los estímulos y exigencias de su cultura de siempre, y aquella otra a quien la responsabilidad o la necesidad hacían ver que sus planes de acción y las prioridades ineludibles, determinadas por las exigencias de la realidad, poco podían esperar de los compromisos y los discursos de ayer. Es la mayoría de la sociedad española, instalada en otro horizonte de expectativas y demandas, la que, más allá de nuestras propias incongruencias y desconciertos como izquierda, termina optando por lo que, según su institución, mejor parecía responder a sus intereses y sospechaba le acarrearía consecuencias menos perjudiciales. En un clima de incertidumbre, la mayoría apostó por el principio del mínimo riesgo, eligió la regla «maximin», que diría Rawls, es decir, aquella alternativa cuyo peor resultado sea superior al peor de los resultados de las otras alternativas. El resultado del referéndum, más que una victoria del PSOE fue, ciertamente, una advertencia, pero también toda una lección y una invitación a renovarse para toda la izquierda española.

Por todo eso hay que saludar positivamente que este Congreso haya supuesto explorar una nueva sensibilidad, transitar por los caminos, ciertamente no muy definidos, de las nuevas formas de ser de izquierdas, y que se haya desembarazado de una respetable, pero ya anacrónica conciencia, que identificaba acción política de izquierda con el fundamentalismo, la reiteración de los principios y el desinterés por los medios y procedimientos.

En un contexto democrático, las decisiones políticas y las expectativas que en dicho contexto pueden generarse no se circunscriben, por lo común, a la práctica de la disidencia como criterio. Más bien, la acción política se orienta a la promoción

de planes de acción y a la definición de estrategias, que tienen que ver mucho más con las exigencias del procedimiento democrático y la lógica de la acción racional que con cualquier metafísica de la historia o cualquier forma de dogmatismo moral o epistemológico. Además, la relevancia y plausibilidad de dichos planes de acción vendrán, a la postre, definidas por su mayor o menor viabilidad, es decir, en función de sus posibilidades de éxito y fracaso. La acción política así concebida conlleva tomar decisiones en un escenario de incertidumbre, sabiendo que esas decisiones deben ajustarse a criterios de racionalidad —definir objetivos, disponer de unos medios para alcanzar aquéllos y realizar el uso de esos mismos de forma adecuada a los objetivos— y ser, al mismo tiempo, compatibles y coherentes con los valores que se intentan incorporar a la vida social y con los objetivos generales que dan consistencia propia al proyecto político de que se trate. Las opciones políticas se diferencian por la forma en que cada una intenta, en sociedades realmente existentes, aplicar esos criterios y conectar a su manera los objetivos de carácter general con programas concretos de acción. En consecuencia, un elemento esencial de la nueva cultura de izquierdas es la recuperación de una concepción de la acción política como modo particular de la acción racional.

Si, como dijimos más arriba, las acciones políticas en un contexto democrático deben ser respetuosas con el procedimiento democrático de decisión, ello representa, desde una perspectiva de izquierdas, apostar por el reformismo, es decir, la aceptación de las reglas del juego, de la democracia como fin, del individualismo ético, del pluralismo y la tolerancia, de la resolución de los problemas por procedimientos pacíficos; la aceptación, en fin, del gradualismo y la provisionalidad de los cambios entendidos como un proceso siempre inacabado, que no reconoce ni fines predeterminados ni tampoco lími-

tes. Así, pues, la racionalidad, la democracia y el reformismo son componentes de la nueva cultura de izquierda, y es de agradecer que los mismos hayan empezado a manifestarse de una manera no vergonzante en las resoluciones del 31.º Congreso del PSOE.

Apostar por una concepción de la política de esta naturaleza no significa en absoluto ni una abdicación de los principios ni un desinterés por los valores. El que los viejos mitos no sean ya de recibo en nuestro contexto cultural, o el que los objetivos de nuestra acción no estén definitivamente —dogmáticamente— justificados, ni avala el desinterés intelectual o la desconsideración moral por los planes de acción específicamente políticos, ni supone tampoco renunciar a un horizonte de referencias éticas en la acción política. Instalarse en ese prejuicio maniqueo que agranda el abismo entre fines éticos y medios políticos, entre acción moralmente orientada y acción estratégica, no conduce a otra cosa que a una progresiva deslegitimación de los programas y a una cada vez mayor idealización de los discursos morales sobre la política. Así, es fácil llegar a una situación en la que la moral encuentre autocomplacencia en un «discurso de vacaciones» y la política se atrinchere en una apelación al pragmatismo, en la pérdida creciente de toda perspectiva moral y racional.

La nueva cultura de izquierdas recupera una concepción de la acción política como modo particular de la acción racional.

Orientarse, pues, hacia una nueva cultura de izquierdas es esforzarse por recomponer una concepción de la acción política que no pase por la reducción de aquélla a la simple formulación de contenidos éticos, ni tampoco por la pretendida autonomía de la política respecto a la ética. Pues bien, me atrevería a señalar que el 31.º Congreso quiere huir de esos dos extremos, ya que se expresa en el mismo, como he puesto de manifiesto con anterioridad, una apuesta por determinados valores. Estos intervienen en la política como marco de referencias, fuente de inspiración y punto de apoyo para la crítica de la realidad social; contribuyen, en una palabra, a definir la propia razonabilidad de las decisiones políticas. Es más, la moralidad es algo interno, consustancial a la naturaleza de toda actividad política, porque la justificación de ésta no se reduce a la consideración de su racionalidad instrumental, sino que está vinculada a instancias de legitimación, o sea, a la promoción de determinados valores, a la coherencia de sus programas con ese marco de referencias valorativas. Racionalidad y moralidad son elementos interdependientes de la acción política, de tal manera que un programa político puede definirse como un proyecto de legitimación moral para un conjunto de acciones o medidas de gobierno con pretensión de racionalidad.

Pero es obvio que los programas políti-

***La acción política no tiene
como fin propio la
reconstrucción de un
discurso sobre
lo moralmente plausible.***

cos no pueden reducirse a simple tautología, reiteración, paráfrasis o reconstrucción de un ideario político-moral, teniendo así siempre asegurada la coherencia o la identificación entre iniciativa política y objetivos últimos. La acción política no tiene como fin propio la reconstrucción de un discurso sobre lo moralmente plausible, sino la determinación de estrategias y planes de acción que demuestren ser los más capaces a la hora de aproximar a las realidades concretas los valores proclamados en el ideario del proyecto político en cuestión. La política no es el reino de los fines, sino de los medios que son la prefiguración y la realización histórica del fin en la medida que su misión es la de ir ganando nuevos ámbitos de la vida social para la implantación progresiva de los valores que dan sentido al programa. Sin que se diga expresamente, es fácil intuir que la intención del Congreso y de sus resoluciones es la de adentrarse por una concepción de las relaciones entre ética y política de esta naturaleza.

Por último, quiero referirme a otro síntoma de la aproximación del Congreso hacia nuevas formas de manifestarse hoy la identidad de izquierda. Hasta hace muy poco, las proposiciones de los congresos de los partidos de izquierdas, y del PSOE en particular, han tenido como destinatario permanente y muy privilegiado a un «sujeto» idealizado: la clase obrera, en los términos en los que, sin modificación, venía siendo concebida desde hacía más de un siglo, con sus demandas definidas de una vez por todas, su destino y unidad esencial, su condición históricamente privilegiada... Hoy en día, las transformaciones sociales han impuesto una realidad tan distinta que poco se resolvería con un discurso cuyo destinatario fuera un «sujeto» ya bastante escindido y una tropa diezmada. De ahí que una nueva izquierda, en un mundo propenso a aturdir, manipular, e incluso capaz de aniquilar a las personas, debería recuperar para sí aquel senti-

miento ilustrado en favor del individuo como fin y nunca como medio, rescatar de las manos de la derecha la apuesta por un individualismo ético y socialmente responsable y, en fin, ofrecer un proyecto de liberación, no tanto a la nación, a un grupo o a una clase, sino a los individuos concretos, especialmente a quienes soportan, en la actualidad, las condiciones de mayor explotación.

Solamente desde esta perspectiva intelectual es como resulta posible encontrarse en la actualidad con aquellos sectores sociales que más prioritariamente reclaman un programa de lucha contra las desigualdades. El hecho de que el Congreso haya considerado destinatarios prioritarios de su interés programático a los jóvenes y a las mujeres es un síntoma de renovación y de sentido de la realidad. La mayoría de los jóvenes contempla cómo la organización social que han recibido se desarrolla al precio de marginarlos forzosamente del sistema. Por tanto, en los jóvenes puede despertar expectativas un proyecto de igualdad y solidaridad que promueva medidas orientadas a la incorporación de aquéllos a la vida de la comunidad, a mejores posibilidades de educación y cultural, al sistema productivo, a unas condiciones de ocio creativas y no alienantes. La apuesta por los jóvenes hecha por el Congreso constituye un desafío considerable que pondrá a prueba no sólo nuestra creatividad e imaginación, sino, ante todo, la credibilidad futura de nuestros compromisos.

Por otro lado, el desarrollo social ha transformado en una evidencia la existencia de desigualdades intolerables por razón del género. Como consecuencia de ello, las acciones contra la discriminación de la mujer se han convertido en un elemento prioritario de la identidad del socialismo y de todo programa de izquierdas. Así lo ha entendido el Congreso; incluso,

Este Congreso se ha transformado en una buena prueba para la voluntad y el crédito político-moral de los socialistas.

como es bien conocido, ha establecido medidas de carácter reglamentario para ir achicando esa discriminación en el seno del propio partido. Pero para que eso no quede en un gesto puramente ritual y de consumo interno se requiere, al mismo tiempo, que ese impulso se traslade a la realidad social y que, por tanto, la acción del Gobierno sea paradigmática a la hora de promocionar cuantas medidas positivas se encaminen a remover los factores de desigualdad por razón del sexo arraigados en las estructuras sociales y en los hábitos comunitarios.

Este Congreso, como he querido subrayar a través de estas páginas, ha sido, ante todo, un Congreso que, cerrado un ciclo del pensamiento de izquierdas, comienza a aventurarse hacia lo nuevo, que es también lo desconocido. Aún queda mucho que hablar sobre el porvenir de la izquierda y conviene acostumbrarse a asumir el riesgo de equivocarse —la izquierda debería, definitivamente, hacerse a la idea de que no hay otro procedimiento para progresar que el de *trial and error*—. El peligro que acecha a la izquierda en esta circunstancia es el de renunciar al esfuerzo y entregarse a la pereza intelectual en cualesquiera de sus formas, ya sea el fundamentalismo o la perversión pragmatista; y eso en la práctica significa renunciar a ser verdaderamente de izquierdas hoy. Pero, una vez situados en esta parte de la orilla, y habiendo abandonado una re-

tórica anacrónica y la formulación de objetivos imposibles, no existe coartada para no ser moralmente políticos. En concreto, en este Congreso se han fijado compromisos realizables, un horizonte de objetivos e instrumentos razonables y factibles. No ha sido, pues, una vez más, el Congreso de la mala conciencia, sino el de la conciencia posible. De ahí que la rentabilidad se haya multiplicado. En primer lugar, porque los objetivos programáticos definidos en el Congreso sitúan al PSOE ante una ocasión única, y malgastarla significaría no sólo arruinar un proyecto de izquierdas factible, sino dilapidar la oportunidad de

que la sociedad española se suba, por fin, al tren del futuro. En segundo lugar, porque, si el PSOE frustra las expectativas que se diseñan en este Congreso, convirtiendo sus resoluciones en papel mojado, se agotaría, de una manera casi irreversible, la credibilidad de la sociedad española en la acción política como instrumento de transformación progresista y de implantación paulatina de un proyecto de emancipación. Sin duda, éste ha sido un buen Congreso, pero se ha transformado, a partir de ahora, en una buena prueba para la voluntad y el crédito político-moral de los socialistas españoles.



LA PONENCIA ECONOMICA DEL 31.º CONGRESO

Julio RODRIGUEZ LOPEZ

En las resoluciones emanadas de los últimos Congresos del PSOE, tanto federales como en los realizados a nivel regional, las ponencias económicas han ido presentando una importancia creciente respecto de los Congresos celebrados en los años setenta. No en balde uno de los aspectos más debatidos en el pensamiento de la izquierda en los últimos años es el económico, que ha pasado a constituirse en un elemento clave a la hora de diferenciar las políticas llevadas a cabo por los gobiernos.

En el presente artículo se ha llevado a cabo, en primer lugar, un resumen de los trabajos que condujeron a la citada ponencia económica del 31.º Congreso Federal del PSOE. En segundo lugar, se realiza un resumen descriptivo de la citada ponencia, destacando los aspectos básicos contenidos en la misma a efectos de la política económica. Por úl-

timo, se sitúa el contenido económico de la ponencia en el contexto correspondiente a la década de los años ochenta, período caracterizado, sobre todo, por el bajo crecimiento general registrado en su primera mitad, así como por la intensificación del proceso de internacionalización y de apertura de las diferentes economías. Este proceso ha afectado sensiblemente a los mo-

***No es posible mantener
políticas
macroeconómicas de
signo opuesto a las
predominantes en el
entorno de la CEE.***

delos y esquemas de política económica seguidos, y ha puesto de manifiesto la necesidad de proceder a coordinar de forma creciente las políticas económicas de los distintos países, a efectos de conseguir determinados objetivos.

Elaboración de la ponencia

Dentro de la ponencia marco aprobada por el Comité Federal de PSOE para servir de discusión en el 31.º Congreso, el capítulo económico «Crecimiento, bienestar, solidaridad» tenía ya una extensión destacada, como lo revelaba la extensión de dicho capítulo respecto del total de la ponencia marco. Asimismo, la ponencia económica fue objeto de un número muy elevado de enmiendas: 800, respecto de un total de 2.000.

A lo largo de las sesiones de la comisión del Congreso, que procedió a discutir y redactar la ponencia económica, se incorporaron a dicho texto base más de 400 enmiendas, lo que incidió de forma destacada sobre su contenido final. Entre los nuevos temas incluidos, o aumentados, respecto del texto original de la ponencia marco, destacaron los correspondientes a Mujer y Mercado de Trabajo, Equilibrio Territorial, Política Energética, tratamiento de la política de demanda, Empresa Pública, Mercado de Valores, democratización del Crédito Cooperativo, Medio

Ambiente y Servicios Sociales. Los trabajos de elaboración de la ponencia se prolongaron hasta el máximo de tiempo disponible para dicha tarea. A pesar de los intensos debates desarrollados, la opinión de los miembros de la ponencia fue unánime acerca de la buena calidad del texto resultante.

Resumen del contenido

En el anexo a este trabajo se ha recogido un índice del contenido de la ponencia, que aparece dividida en cinco capítulos y más de treinta puntos. Estos últimos no tienen título alguno, y los enunciados que aparecen en el anexo se refieren a su contenido específico.

Los títulos de los cinco capítulos son los siguientes:

- 2.1. Nuevas condiciones de la economía.
- 2.2. Objetivos de los socialistas.
- 2.3. Los ejes de la política socioeconómica.
- 2.4. ¿Cómo conseguir los objetivos?
- 2.5. Los interlocutores de nuestra política.
- 2.6. Consideración final.

El primero de los seis apartados sitúa la ponencia en su contexto histórico, estableciendo lo que puede ser el escenario económico dominante en los próximos tres años. Por una parte, el *ingreso de España en la CEE*, en 1985, supone un nuevo marco, que condiciona de manera decisiva los objetivos finales e intermedios de la política a seguir, así como los instrumentos y la estrategia a desarrollar en los próximos años. Así, el mercado al que se van a poder dirigir los productos españoles se amplía de manera considerable pero, a su vez, se acrecienta de manera decisiva la posibilidad de satisfacer la demanda nacional española con productos procedentes del resto de la CEE, y también del resto

del mundo. Las implicaciones de esto último sobre el diseño tradicional de la política económica son obvias: las medidas de estímulo a la demanda pueden generar no sólo aumentos en la producción interna, sino que la pueden, perfectamente, desviar hacia artículos obtenidos fuera de España. Por otro lado, la política económica debe acrecentar su convergencia con la seguida, en general, en el resto de los países de la CEE, no siendo posible mantener políticas macroeconómicas de signo opuesto a las predominantes en el citado entorno.

La ponencia subraya, en el punto segundo del primer apartado, la necesidad de incorporar el *avance tecnológico* al aparato productivo español, en lo que deberán participar las diferentes instituciones y agentes sociales.

Al tratar, en el primer apartado, dos hechos estructurales tan relevantes como el ingreso español en la CEE, y el proceso de cambio tecnológico, la ponencia sitúa la estrategia económica socialista en el contexto general, que va a condicionar decisivamente la evolución de la economía española en los próximos años, prestando menos interés al marco coyuntural, o cíclico, dominante al comienzo de 1988 que, por cierto, es bien diferente al de diciembre de 1984, fecha en la que se celebró el Congreso anterior.

El apartado segundo, *Objetivos*, tiene seis puntos: superación del proceso de integración en Europa, consecución de un mayor crecimiento económico, desarrollo de una política activa de empleo, atención prioritaria al empleo juvenil, apoyo al proceso de incorporación de la mujer al mercado de trabajo y, por último, consecución de una distribución más justa de la renta y riqueza nacional. El mayor crecimiento económico se considera necesario, sobre todo porque permite una creación más intensa de nuevos puestos de trabajo, y porque libera recursos para el logro de una

La Ponencia subraya la política de obras públicas a efectos de adaptación y mayor desarrollo del aparato productivo.

sociedad más justa. La superación del proceso de integración en la CEE se identifica con la política de adaptación del aparato productivo a un contexto de economía abierta, donde la competencia externa va a ser bastante más intensa. La política económica se debe situar en un ámbito territorial muy diferente al de hace unos años, cuando el peso del resto del mundo en la economía española era bastante más reducido. Esta consideración de economía abierta no implica, sin embargo, que no existan márgenes de maniobra como para desarrollar una política redistributiva consecuente con el objetivo socialista tradicional de búsqueda de la mayor igualdad dentro de la libertad. La mejor distribución de la renta no se sitúa, necesariamente, en el plano salario-excedente, sino en el marco de la distribución personal. En todo caso, la ponencia considera que del aumento del empleo asalariado, el mantenimiento del poder adquisitivo salarial en un marco de inflación similar a la del resto de la CEE y de las políticas distributivas se derivará un reparto más justo de la renta nacional.

El apartado tercero, *Ejes de la política económica*, viene a corresponder a lo que, generalmente, se considera son los instrumentos de la política económica. Dicho apartado, que es el más extenso de la ponencia económica, tiene quince puntos, cuyos agregados más importantes son los relativos a la búsqueda de la competitivi-

La Ponencia recoge expresamente la política de demanda como un componente sustancial de la política económica de los socialistas.

dad y modernización del aparato productivo, política energética, política macroeconómica, moderación salarial e inversión, política presupuestaria y fiscal, empresas públicas, política monetaria y financiera, servicios sociales y política de viviendas.

La consecución de un aparato productivo adaptado al contexto general más competitivo implica la consecución de importantes niveles de flexibilidad en los mercados de factores productivos, esto es, trabajo y capital. Por otra parte, frente a la tradición de la izquierda de dejar de lado a lo que ahora se denomina como política de oferta, ésta se desarrolla ampliamente en el segundo punto del tercer apartado, siendo de destacar el tratamiento que se hace a la política de infraestructuras, políticas agraria e industrial, pesca y reequilibrio territorial. La política de obras públicas aparece aquí no como un conjunto de medidas de apoyo a la demanda para generar nuevos empleos, sino que se subraya su relevancia, a efectos de adaptación y mayor desarrollo del aparato productivo, así como un factor relevante de reequilibrio territorial. El desarrollo de la innovación y el tecnológico son factores decisivos en el marco de una política industrial activa. En la política energética se considera a la energía nuclear como un elemento transitorio, lo que obliga a efectuar previsiones en un horizonte sin energía nuclear, en línea con la posición mante-

nida con la mayor parte de los partidos socialistas europeos.

Junto a la política de oferta, en el punto cuarto del tercer apartado se recoge expresamente a la política de demanda como un componente sustancial del conjunto de la política económica de los socialistas: el mantenimiento de los equilibrios macroeconómicos básicos (inflación reducida, balanza de pagos equilibrada, descenso paulatino del déficit público), y el logro de un nivel adecuado de demanda se han de situar en el contexto de una estrategia cooperativa con el resto de los países de la CEE: las políticas de estímulo a la demanda precisas para conseguir un mayor crecimiento económico, sólo pueden defenderse en un marco comunitario que favorezca dicha expansión, y no cabe desarrollarlas firmemente en solitario, por los desequilibrios que podrían generar en dichas circunstancias.

La moderación salarial se justifica en un contexto de control de la inflación, y en línea con la evolución de la productividad, y siempre que la misma favorezca un aumento del empleo y de la inversión productiva empresarial. En cuanto a la política presupuestaria y fiscal, se considera que corresponde al sector público la tarea de conseguir una distribución más justa de la renta y riqueza, así como de reducción de las concentraciones de poder económico. La presencia directa del sector público en la actividad productiva aparece justificada dentro de un marco de absoluta selectividad, particularmente en lo que se refiere a sectores estratégicos, desarrollo tecnológico, sectores con fuertes necesidades inversoras. La presencia del sector público en tareas de promoción y fomento parece que debe limitarse, en lo territorial, a aquellas zonas geográficas donde exista un menor desarrollo empresarial. El programa defiende el mantenimiento de un sistema fiscal, donde predomine la progresividad, y considera, por otro lado, que el

gasto público debe reestructurarse en favor de los componentes relativos a transferencias a familias, inversiones públicas y prestaciones sociales en materias de educación y sanidad, y también hacia la justicia. Se desarrollan extensamente en la ponencia los apartados correspondientes a prestaciones sociales (ayuda a jóvenes, pensiones, lucha contra la pobreza, salud), dedicándose un punto al tema de la vivienda. En este caso, es de señalar la atención de la política de vivienda a dos objetivos, el favorecimiento del acceso a la vivienda para todos, y la contribución de la actividad en dicho subsector al crecimiento económico, siendo también de destacar la coherencia que se pretende entre los diferentes instrumentos que integran dicha política (fiscalidad, gasto público directo, fomento de las viviendas de alquiler, promoción pública).

La ponencia económica del 31.º Congreso considera a la política monetaria como una política instrumental, que sólo tiene sentido en coherencia con unos objetivos últimos de política económica y general. En este punto, la ponencia llega a un cierto detalle, defendiendo el mantenimiento del actual sector público financiero y oponiéndose a la privatización de las Cajas de Ahorros, a través de ampliaciones del capital de dichas entidades, dirigidas al público, lo que reduciría el peso de los agentes sociales en sus órganos rectores.

Los apartados cuarto y quinto establecen las *líneas generales de estrategia*: mercado y Estado, necesidad de concertación social, atención a los interlocutores, esto es, los sindicatos, la empresa, los consumidores, la economía social y los nuevos movimientos sociales. El mercado debe desarrollar un importante papel en la asignación de recursos, a la vez que al Estado corresponde el mantenimiento de los grandes equilibrios, el logro de la armonía social entre individuos y grupos, la correc-

ción de las desigualdades, la superación de los enfoques estrictamente coyunturales (la «tiranía del instante»). Se defiende la participación de los sindicatos a través del Consejo Económico y Social, su posible presencia en los fondos de inversión y su incorporación a los procesos de concertación.

En su último, y sexto, apartado, *Consideración final*, la ponencia económica considera la generación de infraestructuras, la adaptación del aparato productivo al nuevo contexto, el logro de un reparto más justo de la renta nacional, y el apoyo al crecimiento por vía interna y a través de la concertación internacional, como las piezas esenciales de la política socioeconómica de los socialistas.

La ponencia económica, en el contexto crítico de los años ochenta

Los años ochenta han sido testigos de cambios destacados en el escenario económico, lo que no ha dejado de ejercer una notable incidencia en el tratamiento de la izquierda política a los problemas económicos. El transcurso del tiempo ha puesto de manifiesto fluctuaciones no menos importantes en el conjunto general de las ideas y de las políticas económicas: un nuevo tipo de neoclasicismo sustancialmente renovado respecto del dominante al comienzo de los años treinta, parece haber-

La moderación salarial se justifica siempre que favorezca un aumento del empleo y de la inversión productiva empresarial.

se convertido en la nueva ortodoxia. El modelo de economía mixta desarrollado a lo largo de la posguerra, caracterizado por una importante presencia estatal en el proceso de asignación de recursos y, sobre todo, en la redistribución a través de las prestaciones sociales colectivas, ha sido puesto radicalmente en cuestión en los últimos años.

Se considera que el «modelo» socialdemócrata vigente hasta los años setenta ha sido «víctima de su propio éxito». No se logró el crecimiento sostenido preciso para satisfacer las expectativas crecientes generadas en la etapa previa de intenso y prolongado crecimiento. El descenso del número de trabajadores «manuales» en la industria, y la falta general de credibilidad en los remedios económicos propuesto por la izquierda para salir de la crisis, han reducido en términos electorales al socialismo democrático en los países industriales. Se ha procedido a reducir el peso del Estado en la economía, y en algún caso específico se ha procedido a limitar el papel de los propios sindicatos (1).

En conjunto, la economía de los países industriales ha pasado por un prolongado «bache» entre 1974 y 1982. A partir de este último año ha tenido lugar una recuperación muy moderada, que se ha consolidado después de 1985. Al comienzo de la crisis, los gobiernos trataron de desarrollar las políticas tradicionales de regulación de

la demanda, para recuperar las tasas de crecimiento real, pero después de 1979 cambió sustancialmente el esquema adoptado para superar la crisis en las políticas económicas.

Es de destacar, pues, en primer lugar, la homogeneidad creciente de las políticas económicas. La reducción de los desequilibrios básicos y la atención a la política de oferta o de adaptación del aparato productivo, han sido los aspectos esenciales de las políticas citadas.

En segundo lugar, las ortodoxias dominantes se han modificado sensiblemente: se ha puesto mayor énfasis en el control monetario como mecanismo antiinflacionista, se ha reducido el papel y el alcance de la política fiscal, se ha priorizado la reducción de la inflación frente al crecimiento económico, y se han reducido los grados de discrecionalidad en la actuación del sector público.

La escena de los ochenta ha estado dominada por la práctica, por parte de Estados Unidos, de una política de reactivación de demanda manifestada en un fuerte déficit público, que se ha trasladado hacia un no menos destacado déficit externo. Esta circunstancia, y la incidencia de un crecimiento prolongado en la economía norteamericana, se han traducido en una notable incertidumbre sobre el tipo de cambio de dólar, y en unos elevados tipos de interés reales, hechos todos estos que dominan de manera creciente la escena económica mundial.

En este contexto, el pensamiento económico tradicional de la izquierda está pasando por un activo proceso de transformación. La política económica defendida por los socialistas debe ser fiel a los objetivos tradicionales: la «igualdad en la libertad sigue siendo una idea fuerza del socialismo, lo que aporta una estrategia no sólo para convivir en la crisis, sino tam-

***La Ponencia económica
del 31º Congreso del
PSOE considera a la
política monetaria como
una política instrumental.***

bién para superar esta última» (2). Pero las nuevas condiciones económicas generales obligan a renovar de forma notable una buena parte del instrumental, que tampoco es irrelevante en cuanto a su contenido. Es evidente que ni la eliminación del mercado debe ser un objetivo socialista, ni tampoco el sólo juego de los procesos de mercado pueden llevar por sí mismos a una senda de crecimiento atractiva económica y socialmente (3).

El papel del Estado ha sido objeto de una profunda revisión: su papel como productor de directo de bienes y servicios se ha revisado sustancialmente, a la vez que parece acrecentarse su papel como elemento favorecedor de soluciones concertadas a los problemas.

Resulta también no menos evidente que el socialismo democrático ha permanecido anclado durante mucho tiempo en las recetas keynesianas de salida de la crisis, más propias de situaciones de caída de la demanda y de economías menos interrelacionadas, que de lo que es la escena dominante a nivel internacional en los años ochenta. La izquierda tampoco ha prestado particular atención a las políticas de oferta, y no ha tenido recetas ante los serios problemas todavía sufridos en materia de reconversión industrial.

Todo lo anterior no implica que sea imposible llevar a cabo ahora una política económica progresista. Se trata, por tanto, de desarrollar una política que responda a los problemas del momento, que aparezca como atractiva a los nuevos estratos sociales, que consiga aparecer como rigurosa, a la vez que incorpore valores positivos y de progreso, sin pasar, necesariamente, por un aumento del papel del Gobierno. La política medioambiental debe tener un peso creciente en el mensaje político socialista: se trata, también, de impedir la explotación de la naturaleza por el hombre (4). La aceleración del crecimiento que está

***El socialismo democrático
ha permanecido anclado
durante mucho tiempo en
las recetas keynesianas de
salida de la crisis.***

teniendo lugar en España desde la segunda mitad de 1985 plantea interrogantes acerca del tipo de aparato productivo que se puede generar. La internacionalización de la economía es un hecho, pero es conveniente aprovechar los todavía importantes márgenes de maniobra de que disponen los gobiernos de la nación. Los propios gobiernos de las Comunidades Autónomas disponen también de una amplia gama de posibilidades, particularmente en lo relativo a apoyo a la reforma y al aumento del aparato productivo, redistribución de la renta y, sobre todo, a la práctica de una política territorial coherente con los objetivos deseados de política económica. El hecho de que la política económica se revista de una inevitable convergencia con la política practicada por parte de los principales países competidores, no implica que resulte imposible practicar medidas coherentes con los objetivos finales, que en tiempo y situaciones diferentes debe perseguir el socialismo democrático.

El contenido de la ponencia económica emanado del 31.º Congreso es coherente con las ideas anteriores. Las nuevas situaciones, particularmente las derivadas de la internacionalización de la economía, obligan a cambiar el «arsenal» de instrumentos, mientras que los objetivos tradicionales mantienen su vigencia. La solidaridad debe pasar a desempeñar un papel más importante dentro de los valores fundamentales del socialismo democrático. La

ponencia económica citada participa del realismo que se deriva de la práctica de más de cinco años de poder por parte del PSOE en España. El realismo en cuestión es compatible con un esquema general de instrumentos y estrategias que no es neutral respecto de los objetivos perseguidos. De dicha ponencia no se deriva ni la estricta separación Estado-sociedad, ni tampoco nada que implique ampliación ex-

cesiva del papel del Estado. El acento puesto sobre el empleo juvenil, el papel concreto de la mujer en el mercado de trabajo, la atención a los problemas de medio ambiente, y el interés por el mantenimiento y mejora de los servicios públicos, pone de manifiesto lo actual del mensaje dirigido por los socialistas hacia la sociedad española en la parte económica de las resoluciones del Congreso celebrado en enero de 1988.

CRECIMIENTO, BIENESTAR Y SOLIDARIDAD

INDICE

2.1. *Las nuevas condiciones de la economía española*

- 2.1.0. Introducción.
- 2.1.1. Integración en la CEE.
- 2.1.2. Avance tecnológico.

2.2. *Los objetivos de los socialistas*

- 2.2.1. Ganar el desafío europeo.
- 2.2.2. Crecer más para crear empleo y redistribuir.
- 2.2.3. Política activa de empleo.
- 2.2.4. Afrontar el problema del empleo juvenil.
- 2.2.5. Incorporación de la mujer al mundo del trabajo.
- 2.2.6. Conseguir una distribución más justa de la renta y riqueza.

2.3. *Los ejes de la política socioeconómica*

- 2.3.1. Competitividad, flexibilidad mercados de trabajo y de capital.
- 2.3.2. Modernización del aparato productivo
 - infraestructura

- Política industrial
- Modernización de la agricultura
- Pesca
- Política regional: equilibrio territorial.

2.3.3. Política energética.

2.3.4. Política macroeconómica.

- Regulación de la demanda
- Convergencia con el resto de los países industriales
- Lucha contra la inflación
- Equilibrio balanza de pagos
- Déficit público: financiación

2.3.5. Moderación salarial e incremento de la inversión.

2.3.6. Política presupuestaria y fiscal. Papel del sector público.

2.3.7. Empresa pública.

2.3.8. Política monetaria y financiera. PYMES.

2.3.9. Política social: jóvenes.

2.3.10. Pensiones y Seguridad Social.

- 2.3.11. Lucha contra la pobreza.
Medio ambiente.
 - 2.3.12. Salud.
 - 2.3.13. Bienestar social.
 - 2.3.14. Vivienda.
 - 2.3.15. Política educativa y cultural.
Escuela pública.
- 2.4. *¿Cómo conseguir los objetivos?*
- 2.4.1. Mercado y Estado. Planificación.
 - 2.4.2. Política de solidaridad.
 - 2.4.3. Proyecto global. Diálogo social.
- 2.5. *Los interlocutores de nuestra política.*
- 2.5.1. Papel de los sindicatos.
 - 2.5.2. La empresa.
 - 2.5.3. Consumidores y usuarios.
 - 2.5.4. Economía social.
 - 2.5.5. Nuevos movimientos sociales.
- 2.6. *Consideración final.*

E D I T O R I A L

PABLO IGLESIAS

FUNDACION

PABLO

IGLESIAS

REPARTO DE

TRABAJO Y

CRISIS SOCIAL

E D I T O R I A L

PABLO IGLESIAS

El presente libro recoge las ponencias y los debates que se desarrollaron en el seminario «Reparto de trabajo e integración social de los jóvenes», organizado por la Fundación Pablo Iglesias en febrero y marzo de 1985, con la colaboración y el apoyo de la Secretaría General de Economía y Planificación y el Instituto de la Juventud del Ministerio de Cultura.

Reparto de trabajo y crisis social
Fundación Pablo Iglesias
Editorial Pablo Iglesias
367 págs. 1.600 ptas.

¿Es urgente e imprescindible intervenir en el mercado de trabajo para repartir de otra forma el tiempo que cada persona dedica a trabajar? ¿Es al menos necesario? En caso de hacerlo, ¿cómo es más conveniente, flexibilizando el mercado, disminuyendo el período de vida activa o acortando la jornada? ¿Es éste el momento apropiado o conviene aguardar la bonanza económica? ¿Cuánto más pueden esperar los jóvenes?

La respuesta a estas preguntas depende en gran parte de la siguiente alternativa: o bien se considera que la llamada crisis es un efecto directo y único de la conjuntura económica, o bien se interpreta que la situación económica actual no es sino un factor más de la profunda transformación de la estructura social que se está produciendo en los últimos años.

Este libro aporta elementos para el debate sobre cuáles pueden ser los caminos que nos lleven de un modo más justo y eficaz a la mejora de la situación laboral en España.

J. Carabaña, I. Cruz, A. de Miguel,
A. Espina, I. Fina, A. García de Blas,
L. Garrido, E. Gil Calvo,
E. Lamo de Espinosa, J.R. Lorente,
J.L. Malo, E. Punset, G. Rodríguez Cabrero,
L.A. Rojo, S.M. Ruesga, F. Sáez Fernández,
J. Sánchez Fierro, J.M. Sánchez Molinero,
L. Toharia, J.M. Zufiaur.

Pedidos:
Editorial Pablo Iglesias
C/. Monte Esquinza, 30 - 28010 Madrid
Tels.: 410 46 96 - 410 47 98



EL SOCIALISMO ESPAÑOL, EN LA SENDA DEL FEDERALISMO

Antoni CASTELLS

Aunque, ciertamente, las resoluciones del 31 Congreso referidas a política autonómica se extienden a un amplio conjunto de materias —recogidas, fundamentalmente, en los apartados 3.4 y 3.5—, por su trascendencia y por la repercusión que ha tenido en la opinión pública, el 31 Congreso del PSOE es el Congreso de la propuesta federalista.

Esta propuesta, que aparece específicamente concretada en el apartado 3.4.6., contiene unos compromisos y unas constataciones relativamente precisos:

— En primer lugar, constata que ha culminado con éxito una primera etapa del proceso autonómico, a lo largo de la cual ha tenido lugar la institucionalización de la autonomía., el despliegue de la administración autonómica y la asunción de am-

plias competencias en 17 Comunidades Autónomas.

— En segundo lugar, plantea los retos fundamentales que deben ser abordados en esta segunda etapa del proceso autonómico: profundizar el autogobierno político de las Comunidades Autónomas, favorecer su responsabilización del Estado y perfeccionar los mecanismos de solidaridad y cooperación. Todo ello desarrollando el Estado de la autonomías de

La autonomía política ha aparecido muchas veces excesivamente mediatizada, y el proceso de descentralización debe continuar.

acuerdo con las potencialidades que ofrece el marco constitucional.

— En tercer lugar, se señala que para avanzar hacia estos objetivos constituye un hilo conductor y un punto de referencia de indudable valor, la experiencia de los países donde se han desarrollado gobiernos intermedios con capacidad de autogobierno político, de entre los cuales destacan los de estructura federal.

— En cuarto lugar, se precisan los contenidos políticos que debe tener este proyecto federalista:

a) concreción de un marco claro, preciso y aceptado por todos para el ejercicio de las competencias legislativas de las Comunidades Autónomas,

b) establecimiento de fórmulas de cooperación, participación y responsabilización de las Comunidades Autónomas en las políticas del Estado,

c) concreción de un sistema legal claro de relaciones entre las administraciones locales y las administraciones autonómicas, que precise la competencia de éstas en materia de régimen local, y respete la autonomía local.

d) perfeccionamiento del modelo de hacienda autonómico, que complete los avances alcanzados, profundizando en mecanismos de corresponsabilidad fiscal y de autonomía financiera.

e) adecuación de la administración

periférica del Estado a la transformación de su estructura territorial.

— En quinto lugar, finalmente, las resoluciones del Congreso establecen como horizonte deseable una estructuración del sector público, en la que el peso de los distintos niveles de gobierno sea 50%-25%-25% para la administración central, autonómica y local, respectivamente.

Los puntos descritos en el apartado anterior ponen de relieve el alcance de la propuesta federalista aprobada en el Congreso del PSOE. Ciertamente, transcurridos prácticamente diez años desde la aprobación de la Constitución, y nueve desde la de los primeros Estatutos de Autonomía, existía la conciencia difusa, pero generalizada, de que el Estado de las autonomías había entrado en una situación sin perspectivas claras; el proceso autonómico se encontraba en una encrucijada. Por una parte, resulta indiscutible que en un breve período de tiempo se había producido un gran avance, y habían tenido lugar pasos adelante significativos: los gobiernos autonómicos, inexistentes unos años antes, absorben ahora más del 10% de los recursos públicos; se han implantado y desarrollado las administraciones autonómicas, y las instituciones de autogobierno de las Comunidades Autónomas son una realidad.

Pero también resulta innegable que el proceso no ha culminado. Es verdad que el volumen de recursos y competencias transferidos a algunas Comunidades Autónomas es muy importante. Pero también lo es que la autonomía política ha aparecido en muchas ocasiones excesivamente mediatizada, y que el proceso de descentralización debe continuar. El peso del gobierno central es, en España, todavía más elevado que en otros países: el 78%, por el 56% en los países federales, y el 62% en los unitarios. El proceso de descentralización debe, pues, proseguir, y en especial debe

potenciarse el peso de los gobiernos locales.

La capacidad de autogobierno político de los gobiernos autonómicos aparece, frecuentemente, mediatizada por la existencia de una normativa estatal muchas veces excesivamente detallista, y por un elevado grado de dependencia financiera. Debe avanzarse, pues, hacia una delimitación de los contenidos legislativos del Estado y las Comunidades Autónomas y hacia un modelo de financiación más respetuoso con su autonomía financiera.

Este elevado grado actual de dependencia financiera dificulta, además, la deseable transparencia de las relaciones fiscales. Los ciudadanos de un territorio autonómico difícilmente pueden evaluar adecuadamente los costes y beneficios que proceden de su gobierno autonómico. Es preciso, pues, avanzar hacia un sistema que incremente el peso de los ingresos tributarios de origen territorial en la hacienda autonómica.

Los canales de participación de las Comunidades Autónomas en la política del Estado son débiles, y están poco desarrollados, a pesar de que las decisiones referentes al modelo de Estado les afectan muy directamente. Ello favorece la lógica confrontación antes que la de la cooperación, y la de la inhibición antes que la de la corresponsabilización. Es, pues, aconsejable impulsar este tipo de mecanismos institucionales.

Esta es la situación en la que se encuentra, se encontraba, el proceso autonómico después de diez años. Es una situación con claroscuros, con aspectos resueltos y otros por resolver. Con avances indiscutibles y planteamientos incompletos.

Por esto se ha podido decir que nos hallamos en una encrucijada. Nos hallábamos, efectivamente, en un punto del camino en el que podíamos avanzar o

Es preciso avanzar hacia un sistema que incremente el peso de los ingresos tributarios de origen territorial en la hacienda autonómica.

retroceder, pero no quedarnos parados. Podíamos avanzar hacia un modelo de Estado que culminara los avances realizados, abordara decisivamente la descentralización del Estado y garantizara el autogobierno de las Comunidades Autónomas; pero también hacia otro en el que se impusieran el parón y el bloqueo del proceso. De ahí la importancia de salir de la encrucijada estableciendo objetivos claros.

El momento es especialmente importante, porque ambos proyectos son posibles. Es más, ambos proyectos propugnan por imponerse, porque responden a su propia lógica y hay intereses, fuerzas y factores que presionan en sentido opuesto. Y en este punto no cabe la referencia constitucional como una referencia unívoca.

La Constitución es fruto de un pacto entre propuestas contrapropuestas; es un marco abierto en el que tienen cabida distintos proyectos políticos. Tiene cabida un proyecto consecuentemente autonomista, o federalista, o un proyecto de corte unitarista, o incluso centralista. La concreción del modelo de Estado, en un sentido u otro, no depende tanto de la propia Constitución como de la voluntad y de los proyectos de las fuerzas políticas.

En esta encrucijada podíamos avanzar hacia un modelo de Estado respetuoso con la capacidad de autogobierno de los gobiernos intermedios, o bien hacia un mo-

El Partido Socialista está impulsando el proceso autonómico, convencido de que la pausa o el parón suponen el retroceso.

delo de Estado que asimilara estos gobiernos a una forma más de gobiernos locales. No hay más vías. Si examinamos la estructura política de los países que nos rodean observaremos que éstas son las dos alternativas que se nos ofrecen. La de los países federales y la de los países unitarios. Y ésta es la opción fundamental a la que habría que dar respuesta: vamos a desarrollar un Estado de las autonomías de contenidos políticos federales, o de contenidos políticos unitarios. Y al hablar de contenidos políticos hacemos referencia a aquello que es sustancial con el ejercicio del poder político: los límites y los contenidos del autogobierno.

La opción era, y es, muy importante. Y hay que valorar en toda su dimensión el hecho de que el partido del gobierno haya apostado por la primera vía. Tras un período tan intenso y acelerado como el que se ha vivido en los últimos años, las tentaciones acomodaticias y la tendencia a concederse una pausa larga y prolongada tenían que ser muy fuertes. Y esta opción hubiera podido vestirse con distintos disfraces: consolidación, asentamiento, etc. Sin embargo, el Partido Socialista ha sido capaz de vencer estas tentaciones y de establecerse un nuevo objetivo, que es el del impulso del proceso autonómico, convencido de que la pausa o el parón suponían el retroceso, y de que el retroceso hubiera comportado unos costes políticos muy elevados para todos.

En efecto, a nadie deben ocultarse los riesgos que hubiera entrañado apostar por una pervivencia renovada, más o menos disfrazada, del modelo neocentralista. En primer lugar, esta opción hubiera significado, de hecho, el fracaso de los propósitos últimos del Estado de las autonomías, puesto que hubiera significado que éste era incapaz de modernizar y racionalizar la administración, y de dar una respuesta satisfactoria a las aspiraciones de autogobierno de las nacionalidades históricas. Hay que ser conscientes de que, por muchas cosas que pudiera resolver, un Estado de las autonomías que dejara sin solucionar los problemas de integración de Euskadi y Cataluña en el Estado español sería, objetivamente, un fracaso, porque no hubiera servido para arreglar los problemas últimos para los que fue pensado. En este sentido, una inflexión centralista supondría el debilitamiento del pacto y de las instituciones constitucionales. Puede, pues, afirmarse que el desarrollo a fondo de las potencialidades constitucionales en una línea federalista es el mejor servicio que se puede prestar a la continuidad y pervivencia de la Constitución.

En segundo lugar, significaría dejar la iniciativa de la reivindicación autonómica en manos de una derecha conservadora, que hoy ocupa posiciones de gobierno en numerosas Comunidades Autónomas. En general, esta derecha no tiene un modelo de Estado que ofrecer, ni puede llevar a cabo una política consecuentemente autonomista. Mucho menos puede dar una salida satisfactoria a las aspiraciones de autogobierno de las nacionalidades históricas. Pero, basándose en razones de oportunidad, circunstancialmente puede organizarse y coordinarse con finalidades partidistas, estrictamente electorales.

Nada sería más negativo que el hecho de que el socialismo español dejara libre este campo, al caer en el mismo error. Es decir, en el error de fundamentar la política

autonómica en función de ubicaciones políticas circunstanciales, y no de las opciones estratégicas fundamentales. Este error, que podría llevar al repliegue en torno del gobierno central, como gran bastión del proyecto socialista, debe ser evitado. Es deseable que el gobierno sea consciente del peligro que entrañaría caer en esta tentación, aunque es lógico que el gobierno central tenga una cierta tendencia a realizar planteamientos centralistas. Pero, en cambio, el Partido Socialista, el socialismo, debe pensar en una perspectiva más amplia que la perspectiva estricta del gobierno central, y en un plazo más largo que el que viene marcado por los problemas del día a día.

Ahora, la propuesta federalista es un patrimonio de todos los socialistas. Es una bandera que corresponde al conjunto del socialismo español. Es cierto que la iniciativa ha partido esta vez de Cataluña; de los socialistas catalanes, que han desempeñado el papel de estímulo y propuesta que les corresponde. Pero también es cierto que se trata de un planteamiento que entronca con lo más genuino de la tradición de la izquierda española, y en especial del socialismo. Con una de las almas del socialismo: el alma federalista y descentralizadora. Es el alma que estuvo presente en la lucha contra la dictadura franquista, y que inspiró la acción política del socialismo español durante la transición, en la redacción de la Constitución y de los Estatutos. Es el alma que hizo posible la contribución decisiva del socialismo a unos planteamientos constitucionales que abrían las puertas a un modelo profundamente autonomista.

La frustración que supuso la victoria de la derecha nacionalista en las elecciones autonómicas de las grandes nacionalidades históricas, el golpe de Estado del 23-F, las dificultades de la generalización del proceso autonómico, tal vez hicieron que esta alma quedara oscurecida durante al-

El desarrollo a fondo de las potencialidades constitucionales en una línea federalista, es el mejor servicio a la Constitución.

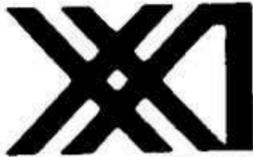
gún tiempo, en beneficio de otra alma, que también históricamente ha pugnado por asomar en el socialismo español, el alma jacobina y centralista, que asocia simplistamente modernización y progreso con mayor poder del Estado central.

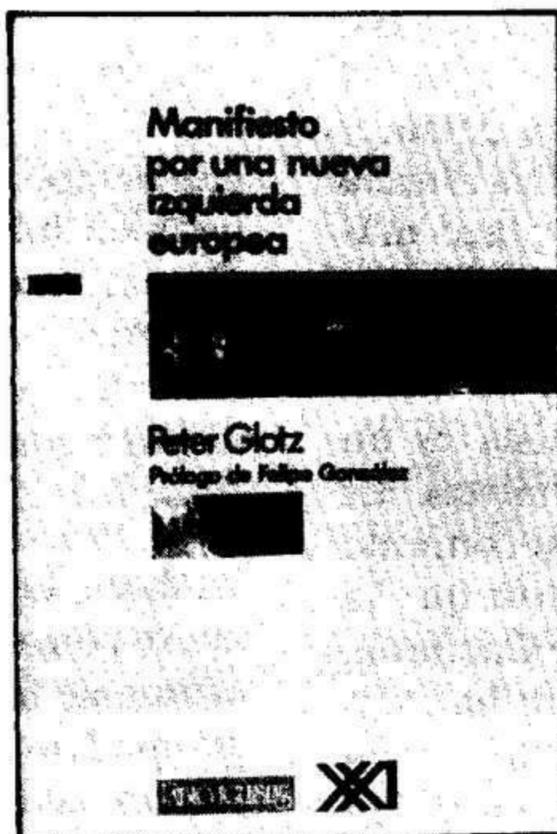
Ahora es el momento de conectar de nuevo con aquellos planteamientos auténticamente federalistas. La transformación del modelo de Estado necesita la participación activa y protagonista del socialismo español. Y el socialismo español está hoy demasiado implantado en ayuntamientos y Comunidades Autónomas, en ciudades y pueblos, en regiones ricas y regiones pobres, como para no ser decididamente fiel a una tradición federalista, sin la cual no se entendería su propia identidad.

La reacción unánimemente favorable que en el 31 Congreso ha recibido la propuesta federalista del socialismo catalán demuestra que la voz plural del socialismo español desea recuperar la bandera de la autonomía para avanzar. Los socialistas de Asturias y los del País Valenciano, los de Madrid y los de las Islas Baleares, los de Andalucía y los de Galicia, todos han visto la importancia del reto, y han decidido asumirlo. Ahora es una propuesta del socialismo español, del partido del gobierno, cuya acción política deberá estar inspirada e impregnada por las grandes opciones que este reto impone.

E D I T O R I A L

LABIO IGLESIAS


Siglo veintiuno
de España
Editores, sa



MANIFIESTO POR UNA NUEVA IZQUIERDA EUROPEA
Peter Glotz

Prólogo de Felipe González

91 págs.

540 ptas. (IVA)

«Este *Manifiesto* es un folleto publicístico que entronca bien con la vieja tradición de la agitación (de ideas) de la izquierda. No sería tan raro que con la perspectiva de algunos años descubriéramos que el pensamiento progresista, tras largos años de dogmatismo y parálisis, fue capaz de ponerse a la cabeza de la investigación y de las nuevas ideas en los años setenta, precisamente cuando se nos hacía creer que la ideología neoliberal (conservadora a secas, si hemos de ser precisos) estaba enterrando los valores de la izquierda en todo el mundo. Si así fuera, y yo creo que así es, con manifiestos como éste las ideas de progreso podrían comenzar a regresar del limbo de la investigación de vanguardia al mundo de la vida real. Y reconquistar la calle.»

FELIPE GONZALEZ

Pedidos:
Monte Esquinza, 30, 2.º dcha.
Tels. 410 46 96 y 410 47 98

Forma de pago: talón bancario
o giro postal



ACTUALIDAD

4

SOCIALISMO Y FEMINISMO: UNA RELACION ABIERTA

M.^a Dolors RENU

El gran impacto que sobre la opinión pública y las fuerzas políticas han tenido las Resoluciones del XXXI Congreso del PSOE en todo lo que hace referencia a la mujer puede sorprender por su intensidad y amplitud, pero sólo si se analiza superficialmente. Porque si se analiza con más detalle, no puede dejar de comprobarse la coincidencia de las medidas adoptadas con un feminismo difuso y generalizado que abarca, con más o menos intensidad, a todas las capas de la sociedad. Y por ello las Resoluciones aprobadas en el Congreso adquieren relevancia más allá del propio partido que las ha formulado, y nos obligan ante el conjunto de la sociedad que mira ahora con ojos expectantes cómo van a ser utilizadas.

***La liberación de la mujer
fue considerada una
cuestión sin importancia
ante los graves problemas
de la clase trabajadora.***

En la larga historia de los movimientos sociales para la liberación de los más oprimidos, los movimientos de liberación de la mujer han corrido por caminos paralelos e incluso contradictorios, en determinados momentos, a los de la clase obrera. Y ello por las mismas razones que han originado posibilidades de explotación: por la división del trabajo, que ha obligado a los hombres al trabajo de producción fuera del ámbito del hogar y a la mujer al de reproducción y sustento de los mecanismos mínimos para sobrevivir en la vida diaria. Las luchas por la liberación de los trabajadores se han basado en el esquema familiar clásico, en el que la mujer ha sido el soporte (no remunerado, evidentemente) de un trabajo de reproducción en el ámbito de lo privado, mientras el hombre ha realizado el trabajo remunerado: «el trabajo» tal y como es concebido generalmente hoy día.

Este hecho ha tenido dos consecuencias: por una parte ha convertido en, cultural y reivindicativamente, «invisible» el trabajo reproductor de la mujer; el trabajo tanto más real cuanto que no ha tenido límites de horas, ni regulación alguna, y a menudo se ha doblado con el del campo o el de la fábrica en condiciones peores que las del realizado por los hombres. Y, por otra parte, que el discurso que ha dado lugar a los grandes movimientos sociales y a los partidos de clase, al fundarse y hallar su apoyo en la estructura familiar vigente,

no ha podido considerar como propias las reivindicaciones de las mujeres. Sobre todo porque tales reivindicaciones a nivel social y público han sido originariamente protagonizadas por mujeres burguesas, quienes gracias a sus posibilidades y formación han podido hacer oír su voz. Feminismo y burguesía pueden haber aparecido así como fenómenos indisolubles, merecedores de escasa atención, si no de irritación por parte de los grandes partidos de clase y la mayoría de sus líderes más conocidos. La mujer, salvo excepciones muy personalizadas, ha estado ausente de la primera línea de la lucha social y política, aunque su trabajo y su aportación ha sido fundamental en este campo también. Y la liberalización de la mujer en tanto que objetivo «específico» ha sido considerado un tema sin importancia, un tanto molesto y ridículo, ante los graves problemas de la clase trabajadora.

Los movimientos reivindicativos de la mujer y las organizaciones feministas han pasado por distintos momentos y se han ido centrando en reivindicaciones diversas, de acuerdo con la realidad social como hemos indicado, se han expresado por caminos paralelos y a veces enfrentados a los de los grandes movimientos de clase. Pero es evidente que su suerte ha estado, desde sus inicios, estrecha y oscuramente vinculada y condicionada al devenir de las grandes conquistas de los derechos sociales y de las libertades individuales. Así, ellas tuvieron que organizarse para obtener los derechos elementales que el liberalismo reconoció exclusivamente para los varones: voto, propiedad, educación, trabajo en condiciones, etc. Todo ello con grandes dificultades y con enormes resistencias, esencialmente fundadas en las formas de organización económica, en las prácticas cotidianas, hábitos educativos y creencias religiosas que han ido conformando una cultura coherente de difícil transformación.

Los movimientos feministas se han expresado, en el ámbito de la vida colectiva, bajo formas específicas. Han sido, casi siempre, movimientos minoritarios y muy combativos, que han orientado sus reivindicaciones de una manera no violenta, pacífica, pero constante. Movimientos y reivindicaciones que no han sido temidos, sino altamente ridiculizados por los varones, sin distinción de clases, y que han encontrado en las propias mujeres importantes inercias y resistencias al cambio. Y ello porque las reivindicaciones femeninas se han enfrentado y se enfrentan con un problema de difícil solución: deben, para que sean efectivas, producir transformaciones en el ámbito de la vida cotidiana, de la reproducción y de las relaciones interpersonales; campos éstos en los que la mujer se ha realizado históricamente, que le han proporcionado su cultura histórica y que le han sido reconocidos como propios. Ámbitos cargados de afectos y vínculos que dificultan su manejo en términos de lucha y de reivindicación.

Importantes cambios sociales en Europa, a partir de la segunda guerra mundial, se originan con la instauración de regímenes democráticos y con el pacto social que representó el establecimiento del Estado del bienestar. Este proporcionó una serie de prestaciones sociales para todos los ciudadanos bajo forma de generalización de la educación, sustitución de tareas encomendadas históricamente a las mujeres a determinados servicios públicos (sanidad, cuidado de ancianos...); la introducción de mejoras técnicas y el control de la natalidad abrieron además a las mujeres nuevas posibilidades.

Los movimientos feministas resurgieron con fuerza alrededor de los años 60, y determinados políticos de la izquierda europea empezaron a hacerse eco de esta doble voz: la que venía directamente de los movimientos feministas y la voz más apagada, pero más extensa y difusa, del conjunto de

El tema de las mujeres mantuvo en los años 60 características marginales en el seno de los partidos políticos de izquierda.

mujeres que estaban viviendo profundas transformaciones en su vida y en su pensar.

Sin embargo, el tema de las mujeres mantuvo en estos años características marginales en el seno de los partidos políticos de izquierda. Ha pervivido la tradición cultural, en el seno de sus organizaciones, tendente a que los temas específicos de la mujer sean considerados temas irrelevantes y de escasa identidad, que en último caso afectan sólo y exclusivamente a las mujeres, mientras que el discurso político global y la práctica política siguen inmutables en manos de los varones, de acuerdo con la tradición. La presencia política de la mujer, individualmente, es plenamente aceptada como excepción en la medida en que no cuestiona el tradicional discurso, y respeta profundamente las prioridades y el estilo existente. En definitiva, la lucha política ha incorporado muy lentamente prioridades y preocupaciones de este 52 % de la población.

Tres razones pueden explicar la escasa presencia femenina en la militancia de los partidos políticos:

- La propia división del trabajo, sólo parcialmente solucionada, sigue haciendo responsable de los mecanismos de reproducción, administración, intendencia y educación de la familia a las mujeres. Este trabajo, que a menudo se suma al reali-

***El partido socialista ha
abierto su discurso
a nuevas necesidades
sociales, y entre ellas
a las de las mujeres.***

zado fuera del hogar, acapara buena parte de sus energías, pensamientos y horas.

- El propio discurso político, sus prioridades, criterios y hábitos, aparecen como ajenos a la cultura femenina, fraguada en el ámbito de lo privado, lo personal y lo relacional. La patente sensación de extrañeza que provoca dicha situación en la mujer no hace más que alejarla del mundo de la política.

- Y, por fin, hay que señalar la resistencia de los varones a ceder parcelas de poder que siempre han considerado como propias.

La escasez de la militancia produce necesariamente un fenómeno de «excepcionalidad» cuando alguna rara mujer accede a un cargo de responsabilidad. Y la «excepcionalidad» tiene consecuencias importantes para todos. Por una parte, genera un fenómeno de atención y focalización que hace relevante cualquier características diferencial, de forma que dicha característica se convierte en rasgo generalizable a todas las mujeres.

Por otra parte, la mujer «excepción», ubicada en un mundo unisexual, siente dificultades adicionales. Está obligada a aceptar un código que quizá, en una situación más plural, podría cuestionar.

La excepcionalidad no permite transmi-

tir la voz de todo un colectivo infrarrepresentado. No se dispone de fuerza colectiva suficiente para hacerse oír.

Y, por fin, la excepcionalidad permite seguir considerando los temas de las mujeres como temas menores, parciales y sectoriales.

Sin embargo, es urgente que este 50 % de la población halle forma de hacer oír su voz de una manera directa sin mediaciones. De otra forma, su voz va a seguir apareciendo, pero lo hará al margen de los partidos políticos clásicos, por medio de colectivos altamente motivados y válidos, pero minoritarios y radicalizados. Este hecho tampoco beneficiará al conjunto de mujeres, ni a las propias organizaciones políticas.

Nuestro país ha seguido en los últimos años, y de forma muy acelerada, los mismos procesos que han vivido los países europeos, en un contexto de transformación rápida en el seno de la sociedad española.

En efecto, se han producido cambios profundos en los últimos años:

- El cambio fundamental ha venido con la instauración de la democracia que, más allá de los aspectos estrictamente institucionales, legales y políticas, ha generado una creciente conciencia colectiva de los derechos individuales; conciencia que ha abarcado evidentemente a las mujeres. Estas, además, disponen de múltiples posibilidades de educación, control de natalidad, trabajo, etc., impensables hace algunos años.

- Hay que señalar que la fuerza de los movimientos feministas antes, durante y después de la transición democrática en nuestro país ha dejado huella. Junto a los partidos políticos clásicos, importantes colectivos de mujeres entendieron en aquél

momento que cualquier liberación de la mujer pasaba por la lucha antifranquista: llevaron a cabo una batalla en la que la especificidad de la problemática femenina estaba en primera línea. El debate sobre si era conveniente o no integrar dicha lucha en los partidos políticos ocupó muchas horas de debate y permitió distintas opciones a las mujeres. Como otros movimientos en los últimos años, el feminismo explícito ha perdido fuerza, pero su mensaje y la novedad de sus contenidos (la exaltación de lo subjetivo, la preocupación por el cuerpo y la vida cotidiana, etc.) siguen vigentes, aunque no hayan encontrado cauces de expresión organizada y eficaz.

Por otra parte, el partido socialista, acorde con los cambios sociales actuales, ha abierto su discurso a nuevas necesidades sociales. Y entre ellas a las de las mujeres. Y lo hace apoyándose en dos pilares: por una parte, en su propia ideología, de la que extrae los principios de democracia, justicia e igualdad, principios que han sido vertebradores de las grandes luchas sociales y que ahora se orientan también a la liberación de la mujer. Hay que redescubrir y utilizar de forma novedosa los principios de siempre, en función de las necesidades sociales nuevas.

Las prioridades que en este momento nos planteamos los socialistas son las siguientes:

1. Impulsar a través de la acción del Gobierno y de la acción del partido, la promoción educativa, laboral, social y política de la mujer.

2. El problema de la mujer debe dejar de ser un objetivo sectorial dentro del par-

***Hay que señalar la
resistencia de los varones
a ceder parcelas de poder
que siempre han
considerado como propias.***

tido y debe transformarse en una cuestión profundamente política, a la que los socialistas debemos prestar una especial atención. Una mayor y mejor representatividad de las mujeres implica una mejor democratización interna, la lucha por la igualdad de oportunidades y una canalización de energías colectivas hacia la vida política.

3. Hay que acabar con la excepcionalidad de la presencia de las mujeres en los ámbitos públicos y políticos. El cambio cuantitativo va a generar aquí profundas transformaciones cualitativas.

4. Hay que integrar el discurso feminista en el discurso socialista, intentando por vez primera en la historia una conjunción que enriquezca ambos planteamientos y permita articular acciones eficaces para todos.

5. Hay que orientar la acción del partido y de la sociedad hacia los colectivos de mujeres que viven una doble explotación: en tanto que mujeres y en tanto que miembros de colectivos sociales, cultural o económicamente desfavorecidos y por ello tienen dobles dificultades para ejercitar sus derechos.

Afiliación de hombres/mujeres en el PSOE

Año	Hombres %	Mujeres %
Diciembre 1981	90,60	9,40
Diciembre 1982	89,80	10,20
Diciembre 1983	89,00	11,00
Junio 1984	87,60	12,40
Junio 1985	87,50	12,50
Junio 1986	86,50	13,50
Junio 1987	84,50	15,50
Cierre Censo XXXI Cong.	83,82	16,18
Febrero 1988	83,48	16,52

PARLAMENTO ESPAÑOL: MEDIA NACIONAL DE MUJERES

Congreso

Año	Total diputados	% mujeres	Mujeres socialistas %
1977	350	6,29	8,4
1979	350	6,00	4,0
1982	350	6,29	7,4
1986	350	6,57	8,1

FUENTE: «La mujer en cifras». Instituto de la Mujer, Boletín n.º 1 «Documento sobre índices de representación de las mujeres socialistas» y Boletín n.º 4 «Mujeres socialistas documento sobre índice de representación (II)».

Secretaría de participación de la mujer. PSOE.

Senado

Año	Total senadores	% mujeres	Mujeres socialistas %
1977	248	2.42	2.0
1979	208	2.90	2.8
1982	253	4.35	5.2
1986	252	5.56	7.4

FUENTE: «La mujer en cifras». Instituto de la Mujer, Boletín n.º 1 «Documento sobre índices de representación de las mujeres socialistas» y Boletín n.º 4 «Mujeres socialistas documento sobre índice de representación (II)».

Secretaría de participación de la mujer. PSOE.

E D I T O R I A L

PABLO IGLESIAS

FUNDACION
PABLO
IGLESIAS

E D I T O R I A L
PABLO IGLESIAS

Los días 29 y 30 de noviembre de 1986 tuvo lugar en Sigüenza un debate organizado por la Fundación Pablo Iglesias sobre el tema *La izquierda y Europa*. En la reunión participaron más de cuarenta intelectuales y políticos españoles y de otros países europeos. La discusión se desarrolló sobre la base de una ponencia presentada por la Fundación Pablo Iglesias y distribuida a los participantes con un mes de antelación. El presente volumen recoge íntegramente la ponencia y el debate (cada participante revisó la transcripción de sus intervenciones), así como las contribuciones presentadas antes o después de la discusión. El Presidente del Gobierno y Secretario General del PSOE, Felipe González, tuvo un encuentro con los participantes en el debate.

J. Arango, D. Aranguren, M. Azcárate, J. Astelarra, E. Barón, J. Borja, M. Cabrera, F. Claudín, S. Clotas, J. M. Colomer, R. Debray, J. Elleinstein, M. Escudero, M. A. Fernández Ordóñez, R. Figueroa, T. Fichter, G. Fuchs, A. Gauron, K. Hansch, D. Koniecki, N. Lechner, J. Lerma, E. Lluch, J. Martínez Reverte, C. Miranda, I. Molas, J. A. Moreno, M. Muñiz, G. Napolitano, R. Obiols, M. Ortuño, L. Paramio, J. Pradera, J. R. Recalde, M. Rodríguez, M. Satrustegui, C. de la Serna, J. Solé Tura, I. Sotelo, G. Stedman Jones, J. F. Tezanos, P. Vilanova, A. Viñas, C. Virgili, C. A. Zaldívar.

LA IZQUIERDA Y EUROPA
Fundación Pablo Iglesias
Editorial Pablo Iglesias
312 págs. 1.500 ptas.

Pedidos:
EDITORIAL PABLO IGLESIAS
Monte Esquinza, 30, 2.º dcha.
28010-Madrid - Tels. 410 46 96 y 410 47 98



EL FUTURO DE CATALUÑA Y LOS CAMINOS DE LA IZQUIERDA

Pascual MARAGALL

Los trabajadores de Cataluña han sufrido un choque cultural enorme en los últimos 40 años y no solamente la represión política del franquismo. La cultura de izquierdas, la de los ateneos populares, la de Esquerra Republicana, la de «Viva Macià, muera Cambó», la del anarcosindicalismo, ha sufrido el impacto, primero de la guerra destructiva, y después de la emigración masiva, que ha sido como una inmensa transfusión de sangre en un joven fuerte pero grave.

Han cambiado las constantes, ha cambiado incluso el idioma de las masas, la psicología social. Quizá no nos damos suficiente cuenta.

El viejo Moviment Socialista de Catalunya fue el que transportó, a través de la noche de la dictadura, la llama del catalanismo popular. La Lliga, dividida y trastor-

***El sentimiento de nación
en Cataluña puede
explicar la existencia de
un movimiento
interclasista en manos de
la derecha.***

nada, no resistió el embate de la tragedia. Unió Democràtica ha sido siempre una referencia dignísima desde el centro-derecha. Pero el grueso de la resistencia se producía un poco extramuros de estas tradiciones, por medio de un movimiento obrero y universitario mayoritariamente dirigido por los comunistas catalanes y otros grupos de izquierda radical.

A partir de la segunda mitad de los 60, este movimiento buscó activamente, con la aportación significativa de los socialistas, la colaboración de sectores del catalanismo puro, ofreciéndoles un campo de acción común en las Coordinadoras y Asambleas.

La hegemonía de la izquierda en todo el proceso de transición y en las primeras elecciones democráticas fue bien evidente. El unitarismo «tarradellista», de raíz también de izquierda, permitió una consolidación de las fuerzas en presencia y una lenta y tenaz reanimación del nacionalismo y de la derecha política catalana. Y, finalmente, se produjo la configuración que básicamente todavía es actual: un predominio de la izquierda, agrupado en torno de la opción que en el ámbito peninsular parecía capaz de construir el eje de referencia masivo que la República no tuvo, y que triunfa sistemáticamente en las elecciones legislativas y en las tres contiendas electorales municipales, así como en las primeras elecciones europeas: el socialismo; y un

contrapunto nacionalista que se impone de manera creciente en las elecciones autonómicas y alineará progresivamente los votos de derecha en todas las demás, llegando incluso a confluir con un sector de izquierda cuando se trata de «castigar» al gobierno socialista (referendum OTAN y parcialmente, sólo parcialmente, incluso menos que la derecha española, en las últimas municipales).

La frontera entre los dos bloques, del 77 al 87, se desplaza lentamente, marginalmente, hacia la derecha. Una buena prueba de este desplazamiento serían las elecciones municipales en la ciudad de Barcelona: 25 concejales de izquierda en el 79 (16 + 9), 24 en el 83 (21 + 3), 23 en el 87 (21 + 2).

Sin embargo nada indica, excepto la exclusiva predisposición de algunos pensadores de izquierda a conceder a las derechas una facultad innata de ser mayoría y gobernar, que este desplazamiento sea ineluctable. Al contrario, hay signos y, en todo caso, motivos razonables para pensar que este desplazamiento tendencial puede debilitarse en el futuro; aquí deberíamos entrar en el análisis del nacionalismo catalán y su implantación político-social. Y también en el análisis correlativo de las dificultades de la izquierda catalana para hacer valer su catalanismo.

Es probable que el sentimiento de nación en Cataluña, como el sentimiento religioso en Italia, pueda explicar la existencia entre nosotros de un movimiento interclasista bastante resistente y en manos de la derecha política. Aquí es necesario prestar atención a las facturas pagadas por la izquierda a causa de su contribución fraternal en la solución de los problemas de gobernación de España, y la integración política de Cataluña, contribución que se impone por dos razones: la comprobación reiterada de que la autonomía catalana depende, siempre ha dependido, de la exis-

tencia en España de opciones políticas progresistas, y el hecho de que la base social de la izquierda tiene un componente de origen extracatalán muy importante, como producto de la transfusión de sangre inmigrada de la que hablaba al principio.

Si a esto le añadimos el hecho de que sectores minoritarios de la inmigración tienden a identificarse con la cultura no solamente de los catalanes (que eso es enormemente positivo) sino incluso de las clases dominantes catalanas, en cuanto han estabilizado su situación económica y social aquí, como sucede en todos los países que reciben inmigración, es fácil de comprender la tendencia excesiva al pánico de muchos comentaristas de izquierda que ven erróneamente esto, que es un proceso social, como un proceso político producto de errores determinados o, más a menudo, indeterminados.

Además, la izquierda es muy sensible a la idea de que los comportamientos pueden condicionarse desde el Estado. En este caso, desde la parte del Estado que se ha transferido a Cataluña y que aquí, obviamente, tiene más legitimidad cultural y social que la parte del Estado que no se ha transferido y está a 600 kms. de distancia, y que conserva los típicos *tics* de la distancia: incompreensión, falta de sensibilidad, etc.

Todo el mundo tiene presente, en este sentido, el enorme impacto de una televisión pública autonómica con relativamente pocos escrúpulos a la hora de confundir país y gobierno, gobierno y partido. Menos presente, pero igualmente importante, es la existencia de todo un sistema educativo en manos de la autonomía gobernada por la derecha. Con estas dos herramientas, aunque no haya una gran obra de gobierno, o servicios realmente mejorados —piensan algunos—, hay suficiente para decantar lentamente a las mayorías hacia la derecha. Y eso sí que sería un proceso casi estrictamente político, incluso de clientelismo político.

***La autonomía catalana
depende, siempre ha
dependido, de la existencia
en España de opciones
políticas progresistas.***

La izquierda vive estos fenómenos con cierta rabia interna, consciente como es de haber sido protagonista en el proceso largo y difícil que trajo la autonomía y la democracia, es decir, en la creación de las condiciones en las que ahora se expresa, digamos, alegremente, el predominio relativo de la derecha —cuando se expresa—.

Los comunistas viven esta situación con una tensión aún mayor por el hecho de que pagaron el precio más alto de la lucha por la democracia y ni tan siquiera tienen las posiciones políticas y sociales que los socialistas han obtenido en el Estado español y también en el interior de Cataluña.

Y los socialistas catalanes la viven con la profunda amargura que produce ver cómo sus compañeros de Valencia —por ejemplo, el alcalde Ricardo Pérez Casado— son a menudo acusados —y con cierta violencia— de catalanistas; y, no obstante, todo eso no los exonera en Cataluña de la sospecha de ser poco catalanistas. Ni parece que les haga ganar adhesiones, en este sentido, el hecho de recibir en Euskadi los terribles golpes del terrorismo, o militar en Andalucía —en general— por una moderación del anticatalanismo o en Aragón por una política de entendimiento con Cataluña que echaremos de menos los próximos cuatro años. «Eso es —piensan— una prueba de que nuestras posiciones son las únicas razonables y de que, sin nosotros, este país sería un inmenso guirigay».

El entendimiento de izquierda que debería producirse se refiere sobre todo a las suspicacias mutuas en materia de nacionalismo.

También los ataques cruzados en lo que respecta a la cuestión de la OTAN, con la derecha catalana haciendo campaña indirecta por el «NO», les confirma en esa posición vivida con un papel de mártir imprescindible y poco reconocido.

En estas condiciones, si la izquierda quiere pasar al ataque, al ataque noble de la contienda democrática para hacer valer sus razones, debe «dimensionar» —no digo solucionar o eliminar— sus discrepancias internas. Eso primero.

Y, en segundo lugar, debe ganar espacio abiertamente en los sectores de clases medias que en Cataluña decantan las balanzas hacia la izquierda y la derecha según la contienda electoral de que se trate. Y hacerlo sin enfriar la adhesión bien ganada de los trabajadores. Al contrario, animándolos a considerar la contienda autonómica como cosa propia.

Estos dos objetivos son perfectamente asumibles en un término más o menos inmediato. Porque, lógicamente, la aceptación del «dimensionamiento» interno de la izquierda, sin romper, eso sí, los grados de libertad de las diversas opciones en lo que se refiere específicamente a las posiciones diferenciadas en materias *no* relacionadas con la cuestión nacional, es decir, las posiciones estrictamente relativas al grado de izquierdismo, o las diversas «culturas» de la izquierda, es perfectamente posible.

Quiero decir que el entendimiento de izquierda que debería producirse, lo que realmente es condición para que la izquierda en su conjunto gane posiciones en Cataluña, se refiere sobre todo a las suspicacias mutuas en materia de nacionalismo o de catalanismo, porque es aquí donde la discrepancia favorece a las posiciones de derecha en su juego permanente de desarmar la oposición socialista sobre la base de transferir las denuncias de ésta hacia una supuesta o real falta de recursos y competencias de la que sería culpable el mismo socialismo, a escala española.

Y es evidente que hoy los comunistas pueden hacer el esfuerzo de separar el grano de la paja en esta cuestión y admitir que en el 90% de los casos la transferencia de culpas operada por el gobierno de «el español del año» no es legítima.

Y todavía es más evidente que los socialistas catalanes deben hacer el esfuerzo (pueden hacerlo y deben hacerlo) de minimizar los flancos que permiten esta maniobra continuada: no solamente influyendo en el gobierno español para hacerle ganar grados de sensibilidad autonómica —cosa que hay que hacer tenazmente, progresivamente, pero que tiene el límite innegable de los intereses generales que el gobierno representa—. No solamente esto: también el socialismo catalán está obligado a dar respuesta al drama íntimo que yo llamaría «el drama de la votante manresana», aquella mujer que después de no votar a Cornet —el ex alcalde socialista— hace mucho más que votarle. Le escribe una carta en la que le dice: «Tú eres mi alcalde», pero también «tu partido no puede ser mi partido porque no es un partido catalán». O la esperanza ilusionada de tantos ciudadanos de Barcelona que no solamente nos dicen «os votaremos» sino que expresan el deseo de poder votarnos también por Cataluña «si cortáis la cuerdecilla que os une con Madrid».

Porque unos y otros se manifiestan con una confianza, una proximidad y un entusiasmo que demuestra que los socialistas catalanes expresarían mejor que nadie su forma de concebir la política catalana, si los socialistas catalanes asumiesen en un mayor grado la obligación de actuar autónomamente respecto de Madrid. Es decir, si además de «ser catalanes» también «lo pareciesen» un poco más.

Y digo «actuar autónomamente», «tirar de la cuerda», más que romperla, porque la manresana y el barcelonés son conscientes, a buen seguro, de que una relación incluso estrecha con las fuerzas políticas españolas deben tenerse: 1) porque de otra forma no se expresarían con tanta franqueza; y 2) porque ven, más o menos sorprendidos, pero cada vez más claramente, los esfuerzos desesperados que CIU ha hecho y continuará haciendo para unirse a la derecha española, y específicamente a aquélla que históricamente ha estado en la base de todos los intentos de aniquilar la autonomía catalana.

Como sea que estos esfuerzos de CiU vienen obligados por su propia consolidación en Cataluña (consolidación del voto de derecha residual, afianzamiento de alcaldías, pago de las deudas de la operación PRD y avance en la fracción de votantes sensibles a la necesidad de acompañar de cerca una política española de apertura, reconversión y cambio) no hay que esperar que haya dificultades insalvables en la progresiva homologación popular del socialismo catalán como fuerza no descartable por razones de nacionalidad.

Dentro de esta perspectiva de la izquierda, está claro que el socialismo ha de representar una opción moderada, tolerante, «liberal» en el sentido etimológico, dirigida también a los pequeños empresarios y sectores de auto-ocupación y profesionales, con un componente catalanista claro y contundente, que los sentimientos

nos imponen, y que ya entienden nuestros votantes inmigrados (como se ha demostrado en la campaña municipal, aunque con timidez, a veces excesiva).

Creo también que la posición socialista respecto del Estado, del Estado en abstracto, ha de ganar grados de libertad y de escepticismo. Este es otro sentimiento profundo de los catalanes y del socialismo catalán que no debemos esconder en absoluto y que debe ayudar al «redimensionamiento» interno de la izquierda.

Esta perspectiva se aviene del todo con nuestro municipalismo teórico y práctico, e incluso con la crítica sin piedad que habría que hacer —y no se hace lo bastante— del asfixiante intervencionismo nacionalista: se intervienen las Cajas de Ahorro, los museos, las ferias, las cámaras de comercio, las agrarias, obviamente, se nacionalizan las comarcas por medio del partido para convertirlas en todo lo contrario de lo que soñábamos: en engranajes de un aparato nacional de dominio puntillista del territorio y de un reparto dirigido del dinero público; se crean cuerpos de inspección financiera local, se menosprecian los mecanismos automáticos de distribución de recursos desde el Estado con la excusa —siempre la misma, ¿hasta cuándo continuaremos cayendo en esta trampa?— de ganar competencias para Cataluña; se cierran radios y televisiones locales mientras se elogia a la sociedad civil; se

***El socialismo ha de
representar una opción
moderada, tolerante,
«liberal» en el sentido
etimológico.***

prohíben las camisetas de las escuelas para uniformar a todo el mundo con una camiseta única con el escudo de la Generalidad y una pequeña inscripción del nombre del centro; lo mismo se hace con las policías locales (siempre con una finalidad loable de simplificación, está claro, pero siempre uniformando, nunca favoreciendo la singularidad). En fin, se intenta controlar al Barça y a muchos otros clubes.

Ante esta avalancha de mensajes ordenancistas y uniformadores, la misma izquierda se siente, a veces, desarmada: nacionalizar, ¿no ha sido justamente su propia consigna?

Aquí los socialistas catalanes deben jugar fuerte su veta más libertaria y explicar claramente que igualdad no quiere decir uniformismo sino justamente diferencia: diferencia para compensar la desigualdad de oportunidades, pero también diferencia para que se expresen todas las singularidades. Cabe decir, igualdad de los individuos, no igualdad contra el individuo.

Convertir la Cámara catalana en el lugar de debate y de crítica de este inmenso juego de manos en que se está convirtiendo la política nacionalista es todo un reto para los meses venideros. Un reto que pide osadía y habilidad. Y, sobre todo, resolver con coherencia el gran problema de la

Los socialistas catalanes deben jugar su veta más libertaria y explicar que igualdad no quiere decir uniformismo.

opción continuada entre situarse al lado de una mayoría arrogante, simplemente hábil en la creación de problemas e inepta en su solución, o bien, la oposición frontal, a pesar del componente nacional evidente de algunas de las propuestas avanzadas desde la mayoría.

No hay ninguna mayoría que caiga sin una alternativa frontal. Ninguna. Y eso lo saben bien las derechas catalanas: miren, si no, su comportamiento en las recientes elecciones municipales. Solamente hace falta decir que su estrecha concepción del enfrentamiento lo ha reducido prácticamente al ataque despiadado a las personas y a la cancioncilla de derechas de siempre (impuestos, seguridad, droga), en una combinación que en algunas ocasiones buscaba subliminalmente los dos objetivos al mismo tiempo.

La izquierda no debe ir por aquí, si bien ha de hacer patente la superioridad técnica, la mayor honradez y el historial democrático y catalanista más amplio de nuestros hombres y mujeres, en relación con los centenares y centenares de cuadros del nacionalismo procedentes de «la situación».

El nacionalismo ha hecho en realidad poco más que una operación de *estampillado* «CiU» de los poderes locales de turno, los que fuesen, ofreciéndoles la patente de un catalanismo que seguramente no habían sentido nunca pero que les permitía enfrentarse con éxito —no siempre, afortunadamente— a la gente de izquierda.

Aquí hemos de ser contundentes. Aquí sí. Porque está involucrada una mixtificación moralmente dudosa. Cuando el alcalde de aquel pueblecito por CiU es un hombre que votó «NO» al Estatuto —y no por poco sino por demasiado— y sustituye a aquel otro que votó «SI», que toda la vida ha sido catalanista y que ahora se ha hartado de gobernar con la incomprensión de las fuerzas vivas del pueblo y no se presen-

ta: cuando Recasens, en Tarragona, se enfrenta con el buen amigo Gomis, que es un trabajador infatigable pero no precisamente un catalanista de toda la vida, o al menos no de la manera que pueda decirle a Recasens que «hará más por Cataluña»; cuando Pau Nuhet de Valls es quien es y ha de pasar la vergüenza de que cierren una emisora municipal que emite en catalán y para Cataluña desde quién sabe cuando y de que casi se lo lleven esposado; cuando Nuria Albó de la Garriga («Tranquilo Jordi, tranquilo») no puede ser votada porque «no es de un partido catalán»; cuando en Manresa no se puede votar al alcalde que preparaba con ilusión para el 92 el centenario de «las Bases de Manresa»; cuando Rosa Martí de Parets ha debido pasar por dos querellas antes de ganar de manera contundente; cuando Josep Vicente de Sant Feliú de Guixols, que es un enamorado de su pueblo y de la cultura catalana, ha tenido que aguantar una campaña de desprestigio personal en los buzones de los *guixolans* por parte de una opción encabezada por un candidato poco próximo al catalanismo hace ocho años; cuando, en fin, por todas partes la contienda se transforma tantas veces en combate áspero entre los que toda la vida han luchado por la democracia, la autonomía y el socialismo, y los representantes permanentes de «la situación»... entonces es moralmente dudosa, como mínimo, una campaña llevada en nombre de Cataluña. Y eso la gente lo ha visto y ha calado hondo en la conciencia de muchos ciudadanos.

Pero hay que decirlo y repetirlo tantas veces como haga falta. A ver si, de una vez, los amigos de Esquerra Republicana se dan cuenta del lado de quién han de estar, y de que un gobierno catalán que niega la inscripción en el Registro de una Fundación que lleva el nombre de Carles Pi i Sunyer y que fue constituida por un grupo de ciudadanos ilustres, entre los cuales estaban los propios hijos de aquel gran alcalde y político, no es, no puede ser con-

***La causa del catalanismo
no puede progresar sin
relaciones fraternales
y sinceras con las fuerzas
progresistas de España.***

siderado un gobierno consagrado a la causa del desarrollo del municipalismo catalán y la autonomía de Cataluña, y sí, en todo caso, de una visión muy particular y muy patrimonial de la misma.

Hemos de hacer mucho más para dejar bien clara nuestra adhesión a la causa del catalanismo, sin esconder la convicción de que esta causa no puede progresar sin relaciones fraternales y sinceras con las fuerzas progresistas de España. Hemos de hacer mucho más. Pero no debemos esconder tampoco la convicción de que con tonos oficiales, «el servicio a Cataluña» es hoy en muchos casos una invocación interesada, mezclada, como mucho, con un amor sincero a Cataluña «mezclada cuando no sustitutiva».

Hasta que no saquemos de esta convicción la fuerza para plantear una alternativa positiva y contundente, apta para justificar la negativa a alguna de las propuestas que se nos hacen y se nos harán en nombre de la patria, la izquierda no comenzará a avanzar visiblemente en el sentimiento de los ciudadanos.

Y esta política no es incompatible, en absoluto, con una política de buenas relaciones entre las instituciones catalanas. Esta política de entendimiento, de buenas relaciones, que el pueblo desea ahora más que nunca, tiene la enorme dificultad de las «LLOT», las leyes que han pretendido

***Hemos de ser conscientes
de que una política de
ambigüedad respecto del
marco estatutario
o constitucional puede
llevar a situaciones
extremas.***

ordenar partidariamente el territorio y que pueden enfrentar a los catalanes indefinidamente. Se trata, esta vez sí, de una dificultad difícil de vencer. Mucho más que cualquier combate parlamentario, por duro que sea.

Pero aquí la izquierda tendrá que saber combinar la firmeza —y mucha— con la sutilidad para discernir los intereses del conjunto en el tiempo, y no solamente a corto plazo.

Ninguna ley contraria a los intereses de los catalanes y viciada por errores legales presumiblemente graves puede ser excluida *por principio* de la lista interminable de leyes que van a parar a los tribunales —y cuando digo por principio me refiero al principio erróneo de que mientras no exista el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña no podrán ser objetadas las leyes catalanas—.

Tan sólo un análisis político muy fundamentado puede adjudicar el atributo de la no recurribilidad a las leyes malas proclamadas por un Parlamento dotado de competencias para legislar en la materia. Porque hacerlo de otra forma sería tanto como entrar en un reino que no sería el Estado de derecho. Sería otra cosa, quizás muy respetable, pero no el Estado de derecho. Creo que en este punto estamos haciendo lo que debía hacerse. Pero la tarea es larga.

Hoy Cataluña tiene todos los números para entrar con buen pie en la carrera europea hacia la supervivencia económica y la integración política que se vislumbra. Hay un grupo de sectores sociales de Europa, no solamente económicos, también culturales, urbanísticos, tecnológicos y académicos, donde es factible ganarse un espacio respetable.

Analícemos con cuidado estas posibilidades. Analícemos también con detalle nuestros problemas, que son muchos, en el campo de la Administración pública y en el terreno de las desigualdades sociales que afectan visiblemente a nuestro pueblo. Y decidamos entonces si lo que hace falta es un continuado enfrentamiento con el gobierno español, como expediente para aprovechar la obtención de adhesiones populares sencillas o si, más bien, no es preferible escoger autónomamente, desde la izquierda, los campos de enfrentamiento con el gobierno español, desarrollándolos con rigor, pero sin olvidar ni los sectores de desenvolvimiento positivo de la política catalana ni las grandes carencias que el gobierno catalán demuestra.

Hemos de ser, sobre todo, conscientes de que una política de ambigüedad respecto del marco estatutario o constitucional —que es diferente de una política de presión selectiva y tenaz en las cuestiones prioritarias— puede llevar a situaciones extremas por parte de sectores mayoritariamente juveniles que cuando oyen «amenaza a la autonomía» leen «imposibilidad total de un futuro próspero y libre». Estos sectores están hoy perplejos ante la locura destructora que el nacionalismo radical ha introducido en nuestra casa. Necesitan una explicación de algunas cosas que no entienden. Necesitan que alguien les diga que cuando Franco escribió fríamente en el Boletín Oficial «las provincias traidoras de Guipúzcoa y Vizcaya», al decretar la abolición del Estatuto Vasco, decretaba también, inexorablemente, más de medio

siglo de odios y venganzas cruzadas. Y que este añadido, administrativamente innecesario, procedía del hecho de que la Iglesia vasca estuvo de parte del nacionalismo vasco ante el bando «nacional» español —«traicionando» así las esperanzas de solidaridad de clase que nutría la derecha española del 36—. Cosas todas ellas que no sucedieron en Cataluña, donde la Iglesia sufrió las peores persecuciones del bando republicano.

Es imprescindible evitar que el clima creado desde altas instancias nos lleve, con ocasión de nuestras fiestas y «diadas» nacionales, al límite que bordea el precipicio y la espiral de la violencia —aunque yo estoy convencido de que difícilmente caeremos como pueblo en esa espiral—, pero la posibilidad, pequeña o grande, existe.

Conviene, entonces, recordarlo y exigir a todo el mundo otra vía que no sea la de la ambigüedad calculada sobre nuestro destino para movilizar nuestros sentimientos autonomistas y muy particularmente los de una juventud que encuentra trabajo con dificultades, pero fácilmente, en cambio, el camino de la crítica a los sistemas (educativos y productivos) de la sociedad adulta.

Si la izquierda sabe encontrar caminos en esta selva, y decisión para transitarlos, el futuro de Cataluña no tiene secretos y será un futuro próspero y estable. Entraremos en una de las fases creativas de nuestra historia. Todo parece estar dispuesto.

Traducción: Alberto Gómez Font.

CUADERNOS DE ALZATE

REVISTA VASCA DE LA CULTURA Y LAS IDEAS



EDITORIAL PABLO IGLESIAS
 CUADERNOS DE ALZATE
 STA. CRUZ DE MARCENADO, 31, 1.º-14 - 28014 MADRID - TEL.: 241 35 41

E D I T O R I A L

PABLO IGLESIAS



Europa sigue siendo un progreso necesario. La reciente ampliación de la Comunidad —con la adhesión de España y Portugal— ha confirmado la fuerza y el vigor del ideal europeo: creemos que nuestro entusiasmo como nuevo Estado miembro está siendo un elemento positivo para la construcción europea. Además, la integración en la Comunidad, este reencuentro económico, social y cultural con Europa, abre la posibilidad de avanzar en el esfuerzo de modernización de España, creando las condiciones para llegar a un espacio económico y social europeo común.

Todos los trabajos recogidos en este volumen ponen de manifiesto las grandes líneas de actuación que, sobre los grandes escollos de la construcción europea, han elaborado los socialistas españoles en el Parlamento Europeo, y suponen una reflexión sobre los modos y maneras de llegar a la auténtica Unidad Europea, poniendo en marcha primero y ampliando después los contenidos del Acta Unica.

Enrique Barón, Manuel Medina, Luis Planas,
Carlos Bru, Francisco Oliva,
José Álvarez de Paz, Josep Verde i Aldea,
Víctor Manuel Arbeloa,
José Miguel Bueno, Joan Colom, Juan Colino,
José Vázquez Fouz, Francisco J. Sanz Fernández,
Juan de Dios Ramírez-Heredia.

España-Europa: trabajo común
Los socialistas en el Parlamento Europeo
202 págs. 950 ptas.
Forma de pago: talón bancario
o giro postal.

Pedidos:
Editorial Pablo Iglesias
C/. Monte Esquinza, 30, 2.º dcha.
28010-Madrid
Tels.: 410 46 96 - 410 47 98



ACTUALIDAD

6

COOPERACION FRENTE A EMPOBRECIMIENTO

Stuart HOLLAND

La teoría convencional de la economía mundial guarda tanta relación con el mundo real de hoy en día como la astrología con la metafísica. Esto se debe en parte a su dependencia de modelos que conciben el comercio internacional como una actividad que tiene lugar entre diferentes empresas y países. Pero estos modelos han sido desbancados actualmente, en lo que respecta a la mayor parte del comercio mundial, por el hecho de que las mismas empresas participan en el comercio multinacional en diferentes países.

También se debe, en parte, al establecimiento del acuerdo internacional de la posguerra sobre la supremacía del dólar y la hegemonía de los Estados Unidos. Pero ese sistema se derrumbó en la década de 1970. Los modelos de integración económica que sostienen el Tratado

de Roma y la Comunidad Europea, por ejemplo, han sido superados por la internacionalización de la economía mundial a través del comercio y los pagos multinacionales, incluyendo el sistema monetario global conocido como mercado del eurodólar a la eurolibra.

***Hay una contradicción
entre la ideología de la
competencia internacional
y el modo de producción,
distribución e intercambio
multinacional.***

Internacional y multinacional

Hay una contradicción entre la ideología de la competencia internacional (dominante en destacados gobiernos e instituciones) y el modo de producción, distribución e intercambio *multinacional* que domina desde hace poco la economía mundial.

El modelo convencional de comercio internacional se ha transformado en un mundo en el que doscientas compañías multinacionales son responsables de un tercio del producto interior bruto global y dominan el comercio y los pagos internacionales. Las multinaciones controlan el 85% del comercio exterior visible de las economías estadounidense y británica, y cerca de la mitad de este comercio se produce dentro de sus propias filiales en diferentes países.

La teoría convencional del intercambio y los pagos, y los modelos ortodoxos de devaluación/depreciación o revaluación/repreciación de monedas, se ven actualmente minados por los imperativos globales de las compañías multinacionales y su necesidad de potenciar al máximo su capacidad inversora y de innovación como estrategia global de supervivencia en los mercados mundiales.

Hay, naturalmente, diferencias históricas en el modo en que se ha realizado en

cada caso la transición de la economía nacional a la multinacional. El éxito de las «maquinarias de exportación» posteriores a 1945, como las economías de Alemania Federal y de Japón, se debió en gran medida al hecho de que las potencias aliadas se apropiaron de sus activos en el exterior, lo que les obligó a modernizar sus inversiones en el interior para las exportaciones al extranjero. Después de la segunda guerra mundial, los Estados Unidos y el Reino Unido, a diferencia de Alemania Federal y de Japón, no desarrollaron un sistema efectivo de capitalismo de Estado. En las décadas de 1960 y 1970, Japón disfrutó de unas elevadas e ininterrumpidas tasas de acumulación de capital en la economía y ha mantenido dicha intervención estatal a lo largo de la década de 1980. Ello ha hecho posible compensar la revaluación de su moneda mediante series sucesivas de aumento de la productividad y de disminución del coste en las inversiones para el comercio de exportación.

Esta situación tiene varias consecuencias de gran importancia para la triada formada por los Estados Unidos, Europa y Japón:

a) El proteccionismo de los EEUU en una guerra comercial contra Japón, está predestinado al fracaso *a menos que* los EEUU adopten una estrategia industrial comparable a la que ha hecho posible que el capitalismo de Estado en Japón construya una maquinaria de exportación global, o *hasta que* la inversión directa y la producción multinacional de Japón en el extranjero hayan sustituido a la producción destinada a las exportaciones que se realiza en el mismo Japón. No es ni siquiera probable que se cumpla ninguna de las dos condiciones a corto plazo.

b) Casi la mitad de las importaciones de los EE.UU. procede de filiales de empresas de los EE.UU. en el extranjero. Así, la ampliación de las medidas proteccio-

nistas más allá de la frontera penalizaría más a las multinacionales estadounidenses que a las exportaciones japonesas.

c) Una reexpedición de la ofensiva exportadora japonesa hacia Europa se encontraría, probablemente, a su vez, con medidas proteccionistas europeas. Pero, de modo similar, las importaciones europeas también son multinacionales. Sin una estrategia industrial, Europa se enfrentará con el dilema de tener que permitir la formación de más empresas mixtas con capital japonés y la inversión indirecta como alternativa a una penetración cada vez mayor de las importaciones. Pero, desde la década de 1960, la Comunidad Europea ni siquiera ha definido un tipo de estatuto industrial común, ni mucho menos formulado una política industrial común.

d) A menos que se logre una nueva relación, dentro de la triada, estará en peligro el acuerdo político posterior a 1945 entre los Estados Unidos y Japón —el tratado de paz entre los EEUU y Japón permitió, en la práctica, que éste exportara todo lo que deseara a Occidente, siempre que renunciara a desempeñar un papel militar o hegemónico en Asia—.

Precisamente por estas razones, se necesita urgentemente una nueva agenda de trabajo global que vaya más allá del marco nacido en 1945.

Bretton Woods y lo que vino después

El sistema de Bretton Woods, que fue el que siguieron las instituciones económicas internacionales de la posguerra, no era auténticamente keynesiano. Por el contrario, representaba, tras las presiones de los intereses financieros norteamericanos, un importante compromiso basado en las propuestas originales de Keynes.

El propio modelo de Keynes para la economía internacional de la posguerra estaba

***La Comunidad Europea
ni siquiera ha definido
un tipo de estatuto
industrial común,
ni muchos menos
formulado una política
industrial común.***

limitado por su comprensible incapacidad de prever la aparición del capital multinacional a una escala importante. Lo que resulta irónico es que tanto el dólar como la libra se han debilitado y devaluado porque las economías estadounidense y británica no han mantenido exportaciones competitivas en la economía mundial. Esto se debió en gran medida a la mayor prioridad concedida a la inversión en las multinacionales de los EEUU y del Reino Unido, y a la producción en ultramar, en comparación con la promoción de las exportaciones en el interior.

Ni las soluciones proteccionistas convencionales ni la devaluación pondrán remedio a este desequilibrio estructural. Las compañías multinacionales son ahora sus propias y principales competidoras en mercados extranjeros clave. Por ejemplo, no es probable que la Ford de EEUU o la Ford del Reino Unido respondan a la devaluación bajando los precios de los coches en el extranjero, cuando esto supondría vender a precios inferiores que la Ford en Europa.

La especialización en servicios tampoco salvará a los Estados Unidos y a Gran Bretaña y su papel preponderante en el mercado monetario mundial. Japón ha venido ampliando en silencio sus instituciones financieras en el mundo, y ahora tiene dos veces el poder de los Estados Unidos en el mercado mundial de seguros. Frente a los

activos de Mitsui de 35.000 millones de dólares en las finanzas de Londres, los bancos comerciales más destacados del ayer, como Warburgs, tienen activos que suponen sólo una décima parte de esa cantidad.

Además, la actual fase de recesión de la economía mundial constituye una amenaza para cualquier acuerdo internacional ordenado que siga las líneas convencionales. De aquellos países que pertenecen a la OCDE, sólo los Estados Unidos han seguido políticas de expansión en la década de 1980. El resto de la OCDE o bien ha sufrido una deflación o rechaza la expansión. En consecuencia, si una nueva administración norteamericana tuviera que reducir el déficit del presupuesto federal (o no lograra compensar la reducción de gastos militares con el aumento de los gastos civiles), más de 100.000 millones de dólares podrían sustraerse a la demanda mundial, lo que se traduciría en una importante caída del comercio mundial.

Las exportaciones de América Latina a los Estados Unidos se verían especialmente afectadas por esa deflación de la economía americana. Así, la «ganancia» que representa la reducción de los tipos de interés de los Estados Unidos en el pago de la deuda exterior sería superada por los efectos negativos en términos de pérdidas en las exportaciones. Para un país como Brasil, que ha mantenido su volumen de

exportaciones, pero que ha reducido sus importaciones en un 50% desde 1981, el resultado sería catastrófico. Las presiones por el impago de la deuda se harían virtualmente irresistibles, en el caso de que sobreviviese un gobierno democrático. A la inversa, un paquete ortodoxo de reducciones del FMI destinado a restaurar la competitividad no lograría ciertamente recuperar las pérdidas de las exportaciones y podría ser mortal para la democracia.

Estos son sólo algunos de los motivos por los que los países de América Latina tienen razón al utilizar su deuda como un instrumento potencialmente poderoso con el que exigir nuevas condiciones para la renegociación de la deuda. Los argumentos para fijar un nuevo calendario para el pago de la deuda y limitar el pago de intereses se convierten así en políticamente potentes en este contexto.

Debe señalarse aquí que, aunque no habrá un nuevo Bretton Woods debido a las brillantes ideas de economistas profesionales, sí podría haberlo como consecuencia de una guerra comercial entre los Estados Unidos, Japón y Europa, y también como consecuencia del impago de la deuda externa en América Latina.

Desafío global

Frente a la fórmula del Fondo Monetario Internacional (FMI) de deflación, devaluación y liberalización de la economía mixta, el informe *Desafío global*, preparado por la Internacional Socialista y publicado en 1985, afirma que las instituciones regionales y mundiales deben apoyar las políticas dirigidas a la recuperación del gasto y el comercio, la reestructuración de las instituciones y de las finanzas y también a la redistribución de los recursos a escala mundial.

La actual fase de recesión de la economía mundial constituye una amenaza para cualquier acuerdo internacional ordenado que siga las líneas convencionales.

El informe *Desafío global* muestra que el tan alabado «nuevo orden económico internacional» es más un intento baldío de recrear una especie de marco estructural del tipo de Bretton Woods, que ya ha fracasado, que un esfuerzo para establecer un orden económico auténticamente nuevo.

El informe muestra también que la crisis global es más un problema de deflación del gasto y del comercio que se inscribe en la política de empobrecimiento de los demás países que un problema de protección. En términos sencillos, las importaciones de un país son las exportaciones de otro, y los límites del paquete deflacionario del FMI estriban en su supuesto de que las economías individuales pueden dar la vuelta a su balanza de pagos sin contratar exportaciones de otros países. A menos que los países de la OCDE, en particular las economías europeas, emprenden un programa de recuperación mutua, la economía mundial se hundirá aún más.

Ni la caída de los precios del petróleo ni la reducción de los tipos de interés pueden garantizar por sí solas la recuperación de la economía mundial. Es necesaria una expansión mantenida de medio a largo plazo. Esto permitiría el aumento de la productividad necesario para financiar los servicios asistenciales en una época de desempleo «tecnológico» en aumento.

La reestructuración de las finanzas debe abordar la refinanciación global de la deuda siguiendo pautas similares a las que utilizan determinados países desde hace décadas para refinanciar su deuda nacional. Esta es la estrategia que subyace en el abanico de propuestas de reforma de la deuda contenidas en el informe *Desafío global*. Entre ellas figuran: cancelar la mayor parte de la deuda de los países del África subsahariana; refinanciar una parte significativa de la deuda de los restantes países en desarrollo; prorrogar los plazos de amortización de la parte restante de la

Ni la caída de los precios del petróleo ni la reducción de los tipos de interés pueden garantizar por sí solas la recuperación de la economía mundial.

deuda; fijar los tipos de interés para que los países deudores puedan planificar y hacer inventario del nivel de sus recursos nacionales e internacionales; limitar el pago de la deuda a un porcentaje fijo de las ganancias por exportaciones, lo que serviría así de incentivo para que los países acreedores expandieran sus economías y aumentasen el comercio entre ellos.

En teoría, esa reestructuración y la fijación de un nuevo calendario de la deuda internacional podría conseguirse dentro del marco de las instituciones existentes. El desenlace ideal sería que una nueva conferencia de Bretton Woods se ocupase de estas cuestiones. Necesitamos multiplicar al menos por cinco los derechos especiales de giro, o lo equivalente a un plan Baker cada cinco años. Aunque esto pueda parecer radical, no sería más que restablecer la proporción de cuotas del FMI para el comercio mundial en la época de los propios acuerdos de Bretton Woods (1944).

Desafío global también tiene razón al afirmar que la redistribución no puede concebirse simplemente como un producto marginal del crecimiento económico, sino que es una condición necesaria para un nuevo modelo de crecimiento y desarrollo. En los países desarrollados esto equivale a que la recuperación pase por los bolsillos de los peor pagados y a proporcionar empleo de nuevo a los que están actualmente en paro. En los países en desarrollo significa invertir el modelo del

Banco Mundial y el FMI, y dar prioridad al gasto en vivienda, sanidad y servicios sociales.

La redistribución también debe proporcionar a largo plazo recursos o «déficits de desarrollo» para los países a los que el FMI exige actualmente efectuar los pagos en dos o tres años. Esos déficits de desarrollo —relacionados con criterios de subdesarrollo como la renta nacional y el empleo— pueden estar justificados a escala global por su contribución a la recuperación del gasto y el comercio mutuos entre países desarrollados y en desarrollo.

Vincular la recuperación a la reestructuración y la redistribución es crucial para garantizar que el Norte y el Sur por igual puedan salir de la crisis y la pobreza. Esto es lo que diferencia el programa de la Internacional Socialista de las políticas reaccionarias de la derecha y de la tendencia de ésta a limitarse a reaccionar ante los acontecimientos.

También hay un vínculo clave entre el desarme nuclear y el desarrollo mundial. En la actualidad la deuda mundial es de un billón de dólares, acumulada durante décadas. Pero un billón de dólares es lo que el mundo gasta anualmente en armas. Una décima parte de esa cantidad, aunque se gastase en los países desarrollados del

Norte, podría aumentar el conjunto de las exportaciones del Sur entre un 4% y un 5% anual. En cinco años se incrementarían los ingresos del Sur hasta una cuarta parte; en diez años, hasta dos tercios.

Por la misma razón, la inversión del círculo vicioso de decadencia y la promoción de un programa de recuperación basado en el gasto y en el comercio podría crear hasta siete millones de puestos de trabajo de jornada completa en los países de la OCDE en el plazo de cinco años, y entre quince y veinte millones de empleos en diez años. Con la distribución del puesto de trabajo y una jornada laboral más corta (ya sea en términos de horas, semanas, años o de una vida), los países que adopten esta política podrían eliminar en la práctica el desempleo masivo en el plazo de una década.

La iniciativa de las superpotencias en la cumbre de Reikiavik y los acontecimientos posteriores han abierto la posibilidad de un auténtico desarme nuclear y una nueva cooperación Este-Oeste. La iniciativa de *Desafío global* (frente al compromiso y la subasta de la reciente cumbre de Venecia del Grupo de los Siete países industrializados occidentales) ofrece la esperanza de una auténtica década de desarrollo.



HACIA UNA ESTRATEGIA DE LA SOCIALDEMOCRACIA EN ARGENTINA

Torcuato S. DI TELLA

En Argentina, como en los demás países latinoamericanos, en los momentos de creación y primera expansión de la ideología socialista universal las condiciones no estaban dadas para una acción autónoma de la clase obrera. De hecho, apenas si lo estaban para la burguesía capitalista.

Extrañamente, en cambio, había ya una tradición y una experiencia de movimientos populares de rebeldía, desde el Túpac Amaru a la Insurgencia mexicana de Hidalgo y Morelos y la rebelión de esclavos de Haití, incluyendo fenómenos caudillistas, algunos bastante radicales como el artiguismo, y otros más conservadores pero no por ello menos movilizadores de masas como el rosismo. En la experiencia europea fenómenos semejan-

tes, especialmente el de la Revolución Francesa, en sus aspectos más radicales, fueron siempre parte de los antecedentes tomados por el socialismo como formadores de su ideología. En cambio, las rebeliones populares y los caudillismos movilizacionistas latinoamericanos están más huérfanos de intérpretes ideológicos, han sido menos incorporados al *corpus* principal de una construcción teórica con pretensión de validez universal. No es, por

***La práctica
socialdemócrata se
consolida en Argentina
encauzada en un partido
socialista que fue
integrando las corrientes
anarquistas y sindicalistas
revolucionarias.***

cierto, que no tengan sus herederos intelectuales y sus cultores, pero en general se trata de una instrumentación más directamente política, con un fuerte contenido nacionalista. Así, por ejemplo, los insurgentes de 1810 están incorporados en el panteón mexicano, pero no son suficientemente conocidos ni tomados en serio en el resto del continente. Y lo mismo pasa con los demás episodios mencionados, que a lo sumo adquieren trascendencia localista y patriótica, sin alcanzar a ser parte de un *racconto* universalista con valor teórico e ideológico.

En la concepción de Marx y de sus primeros seguidores todos estos procesos políticos latinoamericanos eran ignorados, tergiversados o, a lo sumo, objeto de interés anticuario. Su conocimiento y elaboración científica no eran considerados parte del instrumental teórico necesario para orientar mejor las luchas por el socialismo, que en cambio sí podía sacar conclusiones útiles de una interpretación crítica de la Revolución Francesa o aún la Inglesa. Esta actitud fue adoptada en buena medida por los primeros pensadores socialistas en nuestro continente. El fenómeno se dio, lógicamente, más en aquellos países como Argentina, Uruguay, el sur del Brasil, o aun Chile, influidos por la inmigración masiva europea.

Sólo a principios de siglo comenzó a haber, en proporciones importantes, ma-

sas obreras sindicalizables con capacidad de acción colectiva propia y de enfrentamiento incluso violento con el orden establecido.

La práctica socialdemócrata se consolidó en Argentina encauzada en un partido socialista que lentamente fue integrando o marginando a las corrientes anarquistas y sindicalistas revolucionarias, y que tenía a su lado a un partido comunista muy marcado por la táctica del Frente Popular. Conociendo los eventos posteriores a la segunda guerra mundial se puede ver que ya entonces el socialismo argentino adolecía de ciertas fallas que le impedían penetrar en las partes del país menos tocadas por la inmigración europea. Un cierto dogmatismo le impedía entender —o captar— parte del electorado del partido popular de aquella época, la Unión Cívica Radical. Pero hasta el advenimiento del peronismo, el partido socialista se proyectaba como la principal expresión política de la clase obrera organizada del país, en alianza con sectores de baja clase media intelectualizada, como es típico del modelo socialdemócrata. Un partido comunista débil electoralmente —y a menudo ilegalizado— pero con bastiones sindicales sólidos completaba el panorama, aportando lo que podía llamarse un «eurocomunismo» *avant la lettre* en lo referente al uso de tácticas reformistas, aunque no en lo concerniente a su dependencia respecto a Moscú.

Las peculiares tensiones sociales existentes en Argentina durante la segunda guerra mundial —ligadas a la etapa de industrialización por la que pasaba el país, necesitado de proteccionismo para consolidar el crecimiento inducido por el conflicto bélico— produjeron una verdadera mutación en el sistema de partidos políticos. Antes de la guerra éste se parecía bastante al chileno, reconociendo ambos cercanos modelos europeos. En la izquierda, gamas de socialismo, con mayor

poder electoral en Chile, pero nada despreciables en Argentina. En el centro, el radicalismo, a ambos lados de la cordillera. En la derecha una combinación liberal-conservadora, fuerte electoralmente en Chile, aunque con ayuda de la compra de votos, y relativamente débil en Argentina donde recurría directamente al fraude, sin por eso estar ausente del panorama como fuerza capaz de competir, al menos en algunos distritos electorales de peso. En Chile el sistema sobrevivió a diversas conmociones, superando el impacto meramente temporal del ibañismo en 1952. En Argentina, en cambio, del seno del régimen militar iniciado en 1943 emergió un nuevo proyecto político, encabezado por Perón, y apoyado por una élite cívico militar de muy heterogénea composición ideológica. La gran mayoría de los intelectuales de izquierda, directa o indirectamente ligados al polo socialista del esquema anterior, se colocaron en firme oposición a lo que ellos veían como reproducción americana del fascismo europeo, con parecida capacidad de llenar las plazas de multitudes, en buena medida movilizadas contra los centros de la alta finanza y del capitalismo internacional. Entre los sindicalistas de mayor militancia ideológica también se dio un rechazo a la nueva experiencia, aunque un número considerable de antiguos jefes obreros se plegó al nuevo movimiento. Este, sin embargo, en lo principal reflejaba el acceso de nuevas masas antes no incorporadas al sistema, y dispuestas a admitir fácilmente liderazgos externos y planteamientos pragmáticos pues no tenían o no reconocían una tradición ideológica propia, de clase. Más bien, dado su carácter en gran parte migratorio del interior del país, o su anterior pasividad, estaban favorablemente predispuestas a dirigencias paternalistas y a lo que Juan B. Justo había estigmatizado como «política criolla». Eran, justamente, criollos, definiendo la palabra con cierta amplitud, incluyendo a más de un hijo de extranjeros que buscaba reafirmar su na-

Hasta el advenimiento del peronismo el partido socialista se proyectaba como la principal expresión política de la clase obrera organizada.

cionalidad contra el excesivo eurocentrismo de la izquierda clásica, en todas sus variantes, desde la socialdemócrata a la anarquista y la comunista.

¿Podría la izquierda argentina haber reaccionado diferentemente ante el reto que provenía del Secretario de Trabajo y Previsión del régimen militar? La posibilidad debe ciertamente admitirse, aunque a veces se argumenta, equivocadamente, que lo que ocurrió debía necesariamente ocurrir. Incluso está el cercano ejemplo de Chile, donde la izquierda supo reaccionar con éxito ante un rival populista semejante, el general Ibáñez, con una mezcla de alianza, negociación y oposición por parte. claro está, de diversos componentes de su conjunto político. De todos modos, y sin negar la posibilidad y quizás aun la deseabilidad de una reacción distinta, el hecho es que las cartas estaban dadas en Argentina de manera tal que era muy difícil jugar con éxito la mano que poseían los partidos y núcleos de orientación socialista. Hay que tener en cuenta que la distorsión ideológica producida por el modelo europeo a nivel intelectual generaba un «efecto de demostración» mucho más fuerte en el Río de la Plata que en el resto del continente. Por otra parte, la enorme fuerza del impacto inmigratorio extranjero a nivel de masas, no igualado en ninguna otra parte del mundo, había creado, ya no en las élites sino en niveles populares, grandes ausencias de participación. En Argentina,

durante décadas, la enorme mayoría tanto de la burguesía urbana como de la clase obrera cualificada había sido extranjera, y por lo tanto poco integrada al sistema de participación ciudadana, a pesar de las notables excepciones que se pueden señalar. Ese vacío de participación debilitó o incluso imposibilitó la emergencia de un fuerte partido burgués progresista —que Juan B. Justo ansiaba casi tanto como uno socialista—siendo su lugar reemplazado por un partido conservador estancieril, y por un populismo de clase media, ninguno de los cuales tenía suficiente raigambre en la burguesía próspera de las ciudades. El vacío dado por la condición extranjera también debilitó los vínculos orgánicos entre la clase obrera y el sistema de partidos que la podía representar en el Congreso, dando en cierto sentido pies de barro tanto al Partido Socialista como al Comunista.

El movimiento político dirigido por el general Perón demostró ser perdurable, a diferencia del integrado en torno a su émulo chileno. La diferencia no puede buscarse en un contraste entre las dotes de ambos caudillos. Más acertado es fijarse en la existencia, en Argentina, de muy importantes intereses industriales y militares que buscaban expresarse, durante la segunda guerra mundial, preparándose para afrontar un futuro que les parecía desastroso para después de la guerra. Esta convergencia industrial-militar no tuvo

equivalente en Chile, o al menos no lo tuvo con suficiente fuerza y sentimiento de crisis pendiente como para generar los fenómenos ideológicos, psicológicos y políticos que formaron la elite peronista y le dieron su peculiar capacidad de comunicación de masas.

El peronismo en el poder demostró no tener un gran respeto al sistema de libertades públicas y equilibrio de poderes. Sus ribetes autoritarios se evidenciaron desde un comienzo; en realidad, estaban ínsitos en su origen en la dictadura militar del 43. Una de sus primeras víctimas fue el propio Partido Laborista, principal órgano partidario en que se expresó el movimiento popular que lo llevó al poder, y en el que algunos antiguos jefes sindicales pensaban reproducir la experiencia británica, pero con acentos nacionales a diferencia de los extranjerizantes del partido socialista, más afín al modelo centralizado francés o alemán que al altamente federativo y amalgamador de diversas tendencias ideológicas vigente en Inglaterra. Ya antes de asumir el poder Perón disolvió el Partido Laborista, lo que suscitó reacciones muy débiles en su seno. Luego fue ajustando los controles sobre otros aspectos de la vida nacional, en particular desde la *razzia* de diarios independientes realizada en 1950, y el control de la radio y luego de la televisión, a la que la oposición no tenía acceso más que en muy contadas ocasiones.

Estos fueron años de particular descrédito del modelo socialdemócrata en Argentina, reducido al ámbito de un partido socialista convertido en aliado menor de una coalición de centroderecha que incluía también un radicalismo muy reducido electoralmente, instrumentado como vocero de intereses conservadores y de complots militares. Después de la caída del peronismo en 1955 este esquema político continuó, o incluso se agravó, pues muchos ideólogos de orientación socialdemócrata

***El peronismo en el poder
demostró no tener
un gran respeto al sistema
de libertades públicas.***

se convirtieron en perseguidores, demostrando algunos de ellos una particular dureza hacia las huestes populares «equivocadas» y una excesiva ductilidad ante el advenimiento de nuevos regímenes militares que salvaran al país de un retorno peronista.

Cambios en el clima ideológico

Avanzando los años sesenta la situación se puso, si cabe, peor. El impacto de la Revolución Cubana se hacía sentir cada vez más, a lo que se sumó el del Mayo francés de 1968. Aunque el modelo soviético también sufría una fuerte erosión gracias a un mayor conocimiento de su práctica represiva, sus antiguos partidarios se orientaban a versiones más radicalizadas, como la china, o hacia los fenómenos populares del Tercer Mundo. Esto, a pesar de que llevó a creer en mesianismos, significó un elemento positivo, una primera reacción ante la obnubilación por los modelos europeos. La conclusión no tardó en deducirse: el peronismo era la vía maestra hacia la revolución social en Argentina. La naturaleza polifacética de ese movimiento respondió a ese acercamiento, y pronto se formó un fuerte sector de ultraizquierda entre las huestes peronistas, genuinas o autoproclamadas tales. Entre la *intelligentsia* y el estudiantado la afluencia hacia el peronismo fue masiva, llevando a la violencia y al acceso compartido del poder en 1973. El peronismo, en realidad, se convertía así en una coalición amplísima, que albergaba al mismo tiempo a la extrema izquierda y la extrema derecha. Este es un fenómeno menos extraño que lo que puede parecer, sobre todo si se toman en cuenta algunas experiencias históricas propias, debidamente analizadas, claro está. Esa convivencia de extremos ya se daba en México en el siglo pasado en el entorno de Iturbide, y luego en un par de ocasiones fue vuelta a ensayar por Santa Anna. En Argentina el primer sorismo

Amplios sectores miran a la socialdemocracia europea como ejemplo de una genuina tercera posición entre el capitalismo salvaje y el totalitarismo comunista.

también evidenció esa característica al unir los restos del federalismo populista liberal de Dorrego con los más encumbrados estancieros y católicos ultramontanos. En la experiencia europea estas extrañas alianzas son menos frecuentes. Su mayor incidencia entre nosotros —y en general en el Tercer Mundo— se debe a nuestra condición periférica, asociada al desarrollo desigual y a la coexistencia en un mismo país de formaciones sociales muy disímiles, típicas en los países centrales de etapas muy distanciadas en el tiempo. Se superponen entonces estructuras sociales incongruentes, y deben convivir sus expresiones ideológicas dando lugar a alianzas y convergencias de intereses no predecibles en términos de un esquema de desarrollo más lineal, o más europeo.

La convergencia político ideológica que se dio en torno al peronismo en 1973 es uno de los casos más extremos de este tipo de alianzas. En la mezcla, por cierto, la socialdemocracia brillaba por su ausencia. Incluso la preocupación por la democracia era muy tenue, considerándose en amplios sectores de la alianza una mera superchería burguesa. Algunos favorecían soluciones autoritarias, mientras otros pensaban que la «verdadera democracia» surgiría naturalmente después de la revolución. Una gran parte de la *intelligentsia* y estudiantado del país participó en este frenesí ideológico, no peor, por cierto, que tantos otros que han afectado a la humani-

***La redescubierta
valorización de la
democracia hacia poco
atractivo el peronismo,
a pesar de su fuerte
componente obrero
y popular.***

dad en su larga historia. La realidad propinó durísimos golpes a los participantes en ese entusiasmo colectivo, primero por la eclosión de las contradicciones internas de la coalición, donde el sector de derecha se impuso, y luego por la represión del régimen militar.

La autocrítica por la que pasó la aludida generación intelectual argentina produjo al comienzo de los años ochenta una desilusión general con las recetas revolucionarias de tipo marxista, nacionalista o peronista «de bases», y se convergió hacia una revalorización de la democracia realmente existente, o sea de la basada en una economía mixta, aunque para algunos ésta sólo es una etapa transitoria hacia formas de democracia participativa más genuina.

De todos modos, no es ya como antes una creencia casi mágica en una futura democracia generada por la dictadura proletaria, sino una percepción de que se trata de una lenta construcción institucional. Ya no se cree que la dialéctica o alguna otra entelequia metafísica garantice la meta final, o la conversión de una experiencia en su contraria. A fin de cuentas, en los ambientes intelectuales hay cada vez una mayor confianza en los valores permanentes de la democracia en su variante occidental conocida. Esto, sumado a una preocupación por los cambios sociales, debería llevar a la socialdemocracia. De hecho, amplios sectores, desilusionados por las

experiencias soviéticas o chinas, o incluso por la cubana, y dejando de lado la emulación de los líderes movilizacionistas del Tercer Mundo, miran a la socialdemocracia europea como ejemplo de una genuina tercera posición entre el capitalismo salvaje de mercado y el totalitarismo comunista o sus réplicas en algunas variantes de nacionalismo revolucionario.

En este ambiente intelectual empiezan a reactivarse los partidos políticos en Argentina, a comienzos de los ochenta, basándose, claro está, en los núcleos que habían mantenido durante muchos años una larga y a veces desesperada lucha por la recuperación de la democracia. Dentro de este despertar de la actividad política partidista, se enhebran los sectores políticamente activos de la intelectualidad, que en gran medida habían pasado por los angustiosos revisionismos y reconsideraciones de sus pasadas estrategias a que hicimos antes alusión. ¿Cuál era ahora el panorama que se les presentaba?

La redescubierta valorización de la democracia hacia poco atractivo el peronismo, a pesar de su fuerte comportamiento obrero y popular. Sus alas extremas, tanto de derecha como de izquierda, aparecían como claramente enemigas de un régimen de convivencia civilizada. Pero también el peronismo clásico, el que soñaba con la primera presidencia de Perón, era visto como poco preocupado por las libertades públicas, y con un mal panorama, en lo referente a política cultural y universitaria. En cuanto a su condición de representante obrero o sindical, ésta era minimizada por el revisionismo acerca del papel de la clase obrera, sobre todo de los sindicatos, en especial si eran autoritarios y burocráticos en su funcionamiento interno. El radicalismo, en cambio, aparecía como un partido de trayectoria democrática, a pesar de su historial de vinculaciones con militares durante la lucha contra el autoritarismo de los primeros gobiernos

del general Perón, sobre todo el segundo. La llamada de algunos radicales a los cuarteles era visto como un recurso ocasional, para prevenir tendencias totalitarias en los gobiernos peronistas, pero no como parte de un modelo permanente. En cambio los acercamientos de algunos jefes peronistas con los militares eran interpretados como el resultado de una mayor convergencia en las actitudes, un intento de recrear las condiciones de la alianza entre fuerzas armadas y pueblo gestada desde la Secretaría de Trabajo y Previsión a partir de 1943. En cuanto a los partidos de izquierda, eran vistos como dinosaurios anticuados, totalmente faltos de modernización, repetidores de viejas consignas apenas renovadas.

El momento alfonsinista

La maduración de la *intelligentsia* de orientación socialista en el país coincidió con una particular apertura a nuevas estrategias por parte del sector de la Unión Cívica Radical, liderado por Raúl Alfonsín. Desde hacía años éste venía batallando por mover al radicalismo un poco hacia la izquierda, superando su profundo antiperonismo, y procurando hacerle salir de su tradicional 25% del electorado, que con algunas oscilaciones le era fiel en general. Ahora, la posible incorporación de muy amplios sectores de la izquierda *aggiornata* le abría una perspectiva muy prometedora. Efectivamente, la izquierda podía estimarse, en cuanto a fuerza electoral, en algo más de un 10% del total. En 1973, en las elecciones de Campora, los partidos definidos como de izquierda habían obtenido casi ese monto, y además había que sumarles los muy numerosos que estaban incorporados al voto camporista. Claro está que no toda la izquierda afluiría al radicalismo, pero por lo menos se podía sumar un 10% al 25% tradicional, lo que daba una base para empezar a pensar en

luchar contra un peronismo que quizás había perdido algo del 50% obtenido en la elección presidencial comparable de 1973, pero que es difícilmente estimable en menos de un 45% del total nacional. Para usar la fraseología cara a Perón, Alfonsín, para pasar la zanja del 50%, necesitaba todavía sumar a su tablón eventual del 35% algo más. Pero al menos con una base del 35% se podía estar seriamente en carrera, algo impensable con el tradicional 25%, resultado de la acostumbrada fragmentación de las fuerzas antiperonistas. Con el desarrollo de la campaña lectoral, durante 1982 y 1983, ocurrieron dos fenómenos: fue cada vez más claro a la opinión pública que Alfonsín realmente obtendría la suma de su 25% más el 10% de la izquierda renovada y, ante la existencia de este importante polo, la derecha, que en 1973 había arañado el 20% en sus infinitas fracciones, se fue acercando a la decisión de votar por Alfonsín, aun cuando no gustara de los nuevos compañeros del conocido líder radical. El resultado fue que la derecha en 1983 sólo dio a sus propios partidos el 5% del voto total, o sea que se volcó masivamente en el radicalismo, facilitándole la victoria. El peronismo perdió, desde la base de 1973, diez puntos porcentuales, o sea que se le fue no sólo la izquierda incorporada y aliada en el Frente Justicialista de 1973, sino que también perdió algunos electores tradicionales, ganados por la nueva imagen de Alfonsín, que les daba más seguridad mientras su propio partido no limpiara a fondo sus establos de Augías.

La incorporación de amplios sectores de la izquierda abría una perspectiva muy prometedora a la Unión Cívica Radical.

El radicalismo, justamente porque sabe que no infunde ningún pánico en la derecha empresarial, puede emprender un trabajo específico sobre ciertos sectores militares.

La victoria de Alfonsín ayudó a consolidar la democracia por dos razones principales. Primero, porque su partido era el de más claras convicciones democráticas. Segundo, porque daba a los militares y a la derecha más garantías de transición suave que el peronismo. Esto último es discutible, y merece algunas consideraciones cuidadosas.

Hacia finales de la dictadura se hablaba de un pacto militar-sindical, que reflejaba la posible convergencia de militares y sindicalistas burocráticos para mantener el sistema corporativo y el predominio de grupos de interés oligárquicamente controlados. Esto se decía dentro de la perspectiva, que casi todos daban por segura, de una victoria peronista en las urnas. El radicalismo, en cambio, se perfilaba como el partido de la decencia cívica, de la ética, y por lo tanto preparado para dismantelar las estructuras abusivas del corporativismo *de facto* que vivió el país por tantas décadas. En esta perspectiva, el peronismo —expresión principal del sistema burocrático— podía verse como un partido de derechas relativamente al radicalismo. Este aparecía como más izquierdista aunque no extremo, sobre todo más dispuesto a introducir cambios en el sistema de poder existente.

Esta perspectiva es a mi juicio errónea aunque refleja una parte de la realidad. Ella privilegia exageradamente los aspec-

tos puramente políticos de la estructura social argentina, dejando de lado los componentes económicos y clasistas, o sea el anclaje real de cada partido en sectores ocupacionales. Es preciso revisar alguno de los esquemas antes aludidos, empezando por el pacto o convergencia militar-sindical. A esa imagen hay que contraponer la innegable realidad de que prácticamente *todos* los golpes militares (y los internos fracasados también) realizados en el país desde 1945 inclusive han estado dirigidos contra gobiernos peronistas existentes o previsibles. Nunca los militares se preocuparon por una victoria radical; a lo sumo estaban nerviosos por la perspectiva de que un gobierno radical (el de Frondizi en 1962 o el de Illia en 1966) fuera demasiado blando y permitiera el temido retorno peronista.

Pero si esto es así, entonces, ¿es una mera ilusión el «pacto militar-sindical»? No necesariamente. Lo que ocurre es que siendo el peronismo el principal contrincante histórico de los militares —como el aprismo en Perú— le es necesario buscar pactos de convivencia con su adversario para llegar a una pacificación. Los radicales no necesitan eso porque nadie sospecha de ellos un ataque de las bases de sustentación de la derecha militar-empresaria, mientras que sí se teme ese ataque por parte de un peronismo que fácilmente se radicaliza debido a la estructura social de su apoyo. Por cierto que esa amenaza peronista afecta más al sector empresarial que al militar de la derecha, pero ambos están conectados, y a pesar de las apariencias el sector empresarial de la derecha es más importante que el militar, incluso en un país tan afectado por el militarismo como Argentina. Pues el motor que acciona a los militares es encendido, en gran medida, por los temores que cunden entre las clases dominantes respecto de lo que puede depararles un gobierno peronista.

Se argumenta, sin embargo, que el radi-

calismo realizó los juicios a los militares, que a pesar de sus limitaciones han tenido un impacto sobre las fuerzas armadas difícilmente imaginable bajo un gobierno peronista. Esto es cierto, aunque es preciso decir que lo ocurrido era también difícil de imaginar antes de la terminación de la dictadura. Los procesos a las juntas y a otros responsables de la represión y la tortura fueron más allá de lo esperable, en parte impulsados por la propia lógica de un sistema judicial y una opinión pública libres. Es posible que bajo un gobierno peronista se hubiera aplicado un indulto o amnistía. A mi juicio ello no se debe a la existencia de sectores más de derecha en el peronismo —que los hay— sino más bien al hecho de que la mayor presencia de elementos *anti-statu quo* en el peronismo lo hace peligroso, y por lo tanto para curarse en salud éste prefiere poner sordina a las acciones que pueden infundir pánico en amplias capas de la derecha militar-empresarial. El radicalismo, en cambio, justamente porque sabe que no infunde ningún pánico en la derecha empresarial, puede emprender un trabajo específico sobre ciertos sectores militares. Lo cual ha sido muy positivo, y debemos alegrarnos de que haya ocurrido, pero no debe hacernos perder la perspectiva general.

Hacia una nueva coalición

Es un hecho, de todos modos, que en el peronismo existen todavía grupos de derecha en cantidades no comparables con el radicalismo. ¿Cómo se compatibiliza esto con mi afirmación anterior de que el peronismo está colocado más a la izquierda, en general, que el radicalismo? La respuesta es obvia en términos de todo el análisis que he estado haciendo: se trata en ambos casos de coaliciones entre actores sociales, y las condiciones peculiares de Argentina, como de muchos países del Tercer Mundo, favorecen la creación de alianzas muy

Para una política socialdemócrata se precisan por lo menos dos elementos: la clase obrera sindicalmente organizada, y un equipo de intelectuales con fuerte componente técnico.

heterogéneas en el sector popular. Ocurre que, como es habitual en Argentina y en otras partes del continente, las cartas siguen mal barajadas y ello, claro está, por razones estructurales y no personales. Cuando digo «mal barajadas», abusando algo del lenguaje, me refiero a que lo están desde el punto de vista de las perspectivas de una política socialdemócrata en el país.

Efectivamente, para una política socialdemócrata se precisan por lo menos dos elementos coaligados: la clase obrera sindicalmente organizada y un equipo de intelectuales con fuerte componente técnico (tecnocrático, si se quiere; en otras palabras, fabiano). Sin esos dos componentes aliados podrá haber democracia, incluso a veces avance social, pero no proyecto socialdemócrata. Se me responderá: ¿qué importa si no hay eso que usted llama «proyecto socialdemócrata», si se consolida la democracia y además se dan algunos avances sociales, dadas las limitaciones que las condiciones económicas internacionales ponen a nuestra libertad de movimiento? ¿Acaso los mismos Mitterrand o Felipe González no han tenido que dar marcha atrás en muchas de sus conquistas de cuño socialista, llegando incluso a tener que enfrentarse a sectores de la clase obrera y del sindicalismo?

El argumento es sólido; al fin y al cabo, por algo la mayoría de la *intelligentsia*

***La continuación de un
gobierno radical da más
garantías de estabilidad
democrática y más tiempo
al peronismo para
transformarse.***

potencialmente socialdemócrata se ha volcado al alfonsinismo. Encuentran en él un lugar más respetado, una mayor libertad de acción, una mayor garantía de que se van a consolidar las instituciones de la democracia en el país, empezando por las que operan en el seno del partido. Y la consolidación de la democracia ya definitivamente se ha convertido para esa *intelligentsia* en el aspecto prioritario de toda política hacia el socialismo. Ello no basta, claro está, pero de ninguna manera hay que poner en peligro su vigencia, ni argumentar que se trata de una democracia burguesa y por lo tanto cuestionable y reemplazable por otra más genuina. Hay que ampliarla, robustecerla, darle contenido social e igualitario, pero respetando sus reglas de juego.

El peronismo, aunque notablemente renovado en sus niveles dirigentes, aún mantiene fuertes características intolerantes, que en parte son reflejo del autoritarismo típico de los estratos más humildes de la sociedad argentina, pero que también derivan de la participación de sectores intelectuales de derecha. En ciertas provincias y en varios sindicatos la renovación no ha ido aún muy a fondo. Todavía debe pasar más tiempo para que el peronismo termine de eliminar muchos elementos que son claramente nocivos a la democratización, tanto en la vida diaria como en las instituciones que controla y en el ámbito cultural. Este último es un tema

particularmente importante para la *intelligentsia*, puesto que se trata de su área de actividad. La tendencia en el sentido de una depuración, pero ésta no es automática o inevitable. Hay que generarla, peleando por ella, tanto desde dentro del peronismo como desde fuera, por parte de quienes estarían dispuestos a colaborar con un justicialismo modernizado, purificado de ciertos componentes que pueden haber sido inevitables en etapas previas del desarrollo nacional, incluso necesarios para formar la coalición triunfadora de 1943-46, pero que hoy son perjudiciales en términos de capacidad de convocatoria, e indeseables por motivos éticos e ideológicos.

Volvamos ahora a la tesis de que la socialdemocracia exige, además de una democracia consolidada, una mecánica de reforma social, sin duda limitada por los condicionantes externos e internos de la economía y por la estructura de clases, pero que debe ser, en cada momento, lo más audaz posible. Y para esto es preciso tener a la fuerza sindical incorporada directamente al esquema partidario, o indirectamente aliada. Por lo menos una porción muy importante del sindicalismo debe estar con el movimiento socialdemócrata, y el resto, aunque eventualmente se adscriba a un partido distinto, no debe estar ubicado como principal antagonista. Precisamente por esto, no me parece que el esquema alfonsinista sea el modelo adecuado para una fuerza socialdemócrata en Argentina, a pesar de las intenciones de una buena parte de la dirección radical actual. No estoy pensando ahora en críticas a medidas concretas, incluso las que el equipo económico se ha visto obligado a adoptar, de tipo excesivamente recesionista o regresivo en el aspecto distributivo. No es esa la base de mi crítica. También en España o Francia se adoptaron en determinados momentos ese tipo de políticas (y antes en otros casos semejantes). Lo que me parece más determinante es saber si en

la «casa» político-partidaria que estamos examinando están incluidos los dos elementos antes aludidos como indispensables: la *intelligentsia* y la fuerza sindical. No lo están en el radicalismo, luego ésta no es una fuerza socialdemócrata. Pero tampoco lo están en el peronismo, luego ésta tampoco lo es. ¿Adónde recurrir entonces? ¿A alguno de los grupos pequeños de la izquierda más «pura»? Estos son demasiado minoritarios, y antagónicos entre sí, como para convertirse en un plazo prudencial en principal vehículo del proyecto. Es preciso tenerlos en cuenta, y no sólo a los de explícita convicción socialdemócrata, para no desperdiciar el poder de movilización y de convocatoria y el entusiasmo juvenil que a menudo poseen, aunque muchos de ellos quedan fuera de la fórmula socialdemócrata, porque ésta necesariamente debe enfrentarse a las inmadureces y a los extremismos voluntaristas tan difundidos entre activistas de izquierda. De todos modos, hay que incorporar una parte importante de este grupo humano, lo que se facilitará si dentro de él se robustece el sector que explícitamente comparte los valores que se quieren defender.

Por el momento, la continuación de un gobierno radical da más garantías de estabilidad democrática y más tiempo al peronismo para transformarse de manera permanente, que si éste asumiera el poder en condiciones que pueden llegar a ser prematuras. Sin embargo, a la larga, el justicialismo es un órgano más adecuado para la canalización de una política socialdemócrata. No como partido único representante del proyecto, sino como componente, seguramente principal, en una nueva alianza que incluya otro sector, relativamente menor electoralmente pero no despreciable, explícitamente socialista. No estoy hablando de una mera coalición entre lo que es hoy el justicialismo (43 por ciento del voto nacional incluyendo escisiones locales) y la actual izquierda (un 7

por ciento dividido casi en partes iguales entre intransigentes, socialdemócratas, troskistas y comunistas), una parte de la cual no es útil debido a su extremismo. Lo que se precisa es que desde el justicialismo o desde un sector de esa izquierda renovada, se dé una convocatoria equivalente a la que en su momento realizó Alfonsín, que cambió la imagen y la realidad de la dirección intermedia radical que adquirió un perfil intelectual y profesional que nunca había tenido.

Para terminar, resumiendo algunos de los puntos expresados en estas páginas, creo que en el momento presente el modelo socialdemócrata no tiene hogar partidario adecuado en Argentina, aunque es legítimo para individuos con esa ideología militar en varios lugares: sea en el radicalismo, buscando sobre todo robustecer su papel de defensor de la incipiente democracia, como en el peronismo, para renovar más a fondo sus estructuras, o en los varios partidos autodefinidos de izquierda, para actualizarlos y adecuarlos a la realidad nacional. Pero en algún momento hay que dar el paso siguiente. Ese paso implicará un progresivo corrimiento partidario, que deberá incluir al justicialismo y reconocer un papel a buena parte de las estructuras de poder del actual sindicalismo, parcialmente renovados ambos, ya que es ilusorio seguir fantaseando con su desaparición.

***A la larga el justicialismo,
como componente en una
nueva alianza, es un
órgano más adecuado
para una política
socialdemócrata.***

En cuanto a los intelectuales, ellos deben tener presente que así como la socialdemocracia para arraigar en el panorama político europeo tuvo que hacer concesiones a las realidades de poder de sus respectivos países, nosotros en este continente debemos hacer adecuaciones equivalentes, pero distintas. Se hicieron al entrar en una coalición tan policlasista como el alfonsinismo, y se deberán hacer para

entenderse con un movimiento que, como el peronismo, seguirá por bastante tiempo teniendo caracteres poco atractivos para los ideólogos más exigentes. Saber apreciar el momento y el grado de estas convergencias de actividades, que por cierto deben venir de ambas partes, es la tarea principal que debe afrontar una estrategia de la socialdemocracia en Argentina.



LA IZQUIERDA ESPAÑOLA Y EL NACIONALISMO.

El caso de la transición

Andrés DE BLAS GUERRERO

Al preparar un trabajo sobre el significado del problema nacional de nuestra transición política, me fue imposible orillar el interrogante acerca del papel de la izquierda ante la cuestión. Mi primera impresión, que creo mantenible tras una consideración reposada de esa coyuntura política, es que la izquierda española —tanto en sus manifestaciones partidistas como en el grueso de las tomas de posición doctrinales académicas e intelectuales— hizo una contribución significativa a la opacidad y a la confusión en torno a este problema. En esta comunicación voy a tratar, después de una breve ilustración de este punto de partida, de plantear las causas del fenómeno e inventariar las consecuencias. No se pretende disolver la significación de la cuestión en una explicación de los errores y deformaciones de un diagnóstico apresurado y poco riguroso a cargo de la izquierda estatal, pero sí estimo conveniente proceder a despejar las brumas acumuladas en torno a un conflicto político necesitado, como pocos, de un buen sentido y de

una ponderación que no le prodigaron ciertamente buen número de políticos y académicos en los complicados años que van de la generalización de la protesta antifranquista a los inicios de la década de los ochenta.

Confusión en torno a la cuestión

Que los partidos y fuerzas políticas nacionalistas de los sesenta y los setenta defendiesen, con mayor prudencia en ocasiones, lo que hoy proclaman respecto al problema nacional de España, está dentro de la normalidad. No resulta tan difícil de entender, sin embargo, el entusiasmo filonacionalista —con relación a los nacionalismos periféricos— que los partidos de izquierda estatal demostraron en la década de los setenta. Lo cierto es que entonces, tanto el PSOE como el PCE, del mismo modo que el PSP, defendieron posiciones a este respecto inmantenibles a la vuelta de muy pocos años. El Congreso del PSOE de octubre de 1974, en su resolución sobre las nacionalidades y regiones (1), asumía, en primer lugar, una explícita y rotunda defensa del derecho de una autodeterminación que «...comporta la facultad de que cada nacionalidad pueda determinar libremente las relaciones que va a mantener con el resto de los pueblos que integran el Estado español». El alcance de este derecho para los pueblos del «Estado», la utilización del nombre de España es cuidadosamente evitada, se ve matizado por el reconocimiento —al modo leninista— de que el mismo «...se enmarca dentro del contexto de la lucha de clases y del proceso histórico de la clase trabajadora en lucha por su completa emancipación». La aceptación del principio de la autodeterminación no evita el pronunciamiento del partido a favor de una «República federal de las nacionalidades que integran el Estado español», por entender que a través de esta fórmula se protegen suficientemente las peculiaridades de las nacionalidades y los intereses de la clase trabajadora.

La resolución sobre nacionalidades del Congreso del PSOE de 1976 es un documento más extenso que el de 1974, con mayores pretensiones doctrinales y fiel, en lo sustancial, al texto anterior. Al margen de algunas modificaciones literarias —aceptación, por ejemplo, del término España— se sigue haciendo una reiterada defensa del derecho de autodeterminación cuyo reconocimiento debe ser obligado en la inminente constitución. Una fraseología marxista («la opresión que sufren las nacionalidades y regiones es una faceta más y un instrumento de la opresión que la clase dominante ejerce sobre los pueblos y los trabajadores del Estado español, y tiene su vinculación al proceso de la lucha de clases», «...La clase trabajadora debe, pues, ponerse a la cabeza de la lucha por la liberación de las nacionalidades y regiones oprimidas»), sirve de marco para la asunción de unas causas nacionalistas que se insertarían dentro de una defensa general de la autogestión de la sociedad. Descontadas algunas afirmaciones sorprendentes, por ejemplo, la lla-

mada al reconocimiento de los «estatutos de soberanía» que fueron establecidos constitucionalmente en la II República, el documento se extiende después en la consideración de algunas tesis en torno a la futura estructura federal del Estado.

El *Manifiesto-Programa* del PCE (septiembre de 1975) define algunas actitudes interesantes del comunismo español respecto a este tema. La disgresión histórica del documento permite apreciar, en primer lugar, una aceptación en profundidad de la lógica de los nacionalismos periféricos —y particularmente del nacionalismo catalán— en la comprensión de nuestra historia contemporánea. Así puede entenderse la valoración general de los nacionalismos catalán, vasco y gallego: «Inicialmente encabezados por sectores de la burguesía, más tarde intervinieron en su dirección otras clases sociales y representaron fundamentalmente una opción política democrática frente al Estado centralista burocrático». El *Manifiesto* subraya, además, «... el inalienable derecho de los pueblos a decidir libremente de sus destinos», aunque no oculta la posición comunista favorable a «... la libre unión de todos los pueblos de España en una República Federal». Las resoluciones del IX Congreso del PCE, de abril de 1978, al margen de algunas concesiones al lenguaje y la iconografía propia de los nacionalismos periféricos (por ejemplo la referencia a la «opresión histórica» de las nacionalidades), evidencia —seguramente por su fecha tardía— una moderación y un relativo buen sentido ausente en los documentos antes citados.

El Partido Socialista Popular no fue a la zaga del PSOE y el PCE en estos planteamientos. En el «Programa ideológico-político», aprobado por la Comisión Permanente del Congreso del PSP (1975) (2), este partido supera a los otros de izquierda en tacticismo político, vista su singular afirmación-negación del derecho de autodeterminación. Dice al respecto el punto 17: «Consecuentemente con el punto 6 de esta declaración, el PSP asume el principio de la autodeterminación para las nacionalidades y regiones españolas que, por razones históricas, culturales, sociales o económicas la deseen...». Pero sin esperar el eventual resultado de ese proceso de autodeterminación de las nacionalidades y regiones, o realizando una singular interpretación de ese derecho, sigue diciendo el punto 17: «... Manteniendo también la necesaria solidaridad articulada a través de los órganos comunitarios del Estado español, que tendrán como una de sus principales funciones la de coadyuvar al máximo desarrollo económico de los diferentes pueblos del Estado».

No es mi propósito hacer aquí una antología de las afirmaciones de filonacionalismo vasco, catalán o gallego, presentes en la literatura académica de los años setenta y principio de los ochenta. En descargo de los partidos españoles de izquierda y para una mejor comprensión de la coyuntura política, se hace necesario, sin embargo, reflejar algunas de aquellas afirmaciones —razonadas unas, frivo-

las e improvisadas otras— que aportan buen número de estudiosos de estos años.

Sin que el orden de referencias tenga mayor significado, y haciendo mención solamente a lo publicado fuera de España, merece la pena recordar el trabajo de un académico tan significado como S. Giner, en torno a las dimensiones históricas de la cuestión (3). El punto de partida del autor es la constatación del supuesto fracaso de una revolución ilustrada en el siglo XVIII: «La falta de una genuina revolución ilustrada en la España del siglo XVIII fue un hecho bruto que la hizo entrar en la era industrial y del gran imperialismo capitalista con un aparato estatal ineficaz, unas pautas de privilegio y desigualdades arcaicas, y con unas mentalidades hostiles a la modernidad (pág. 440). Haciéndose eco de una actitud generalizada entre el catalanismo político, el autor tiende a subrayar, no sin razón, la apropiación «castellana» del Estado como consecuencia del menor dinamismo burgués de las clases medias de Castilla, diluyéndose, sin embargo, la significación que ese Estado, avanzado el siglo XIX, habrá de tener para las burguesías periféricas. Dentro de la búsqueda de raíces profundas a un problema nacional-regional cuya agudización no se desea dejar limitada a una determinada y tardía coyuntura política, el autor no tiene inconveniente en insinuar una particular visión de la guerra civil en la que se enfatiza la significación de los nacionalismos periféricos en demérito de los más obvios factores sociales y políticos: «En gran medida el régimen de Franco halló su justificación en su capacidad de suprimir y extirpar toda forma de autonomismo o separatismo étnico minoritario» (pág. 445). Mayor alcance tiene la afirmación de que el franquismo es la oportunidad para que el gobierno y el Estado pongan en marcha —en clave opresora— una homogeneización nacional. Al lado de tan singular interpretación-negación del proceso de construcción de la nación en España con anterioridad a 1939, otras arriesgadas afirmaciones de Giner (por ejemplo, la supuesta mayoritaria voluntad federalista de vascos y catalanes) adquieren menor significación.

Otros dos respetables académicos, J. Marsal y J. Roiz, no dudan, planteando la significación del nacionalismo catalán a partir de 1979 (4), en ofrecer a una audiencia extranjera una sorprendente visión de la historia de Cataluña; la integración del principado al Estado es vista como la consecuencia de una conquista y no debe extrañar por tanto al lector norteamericano que «repetidamente, desde el siglo XV al XVIII, el conflicto se desarrollase en una guerra abierta, terminando cada vez en una derrota catalana y una erosión subsiguiente de la independencia (*sic*) catalana» (pág. 210). Tan angustioso devenir histórico, caracterizado además por la indiferencia europea («Cada vez que su independencia era amenazada, Cataluña trataba desesperadamente de encontrar aliados europeos en defensa de sus territorios y sus leyes de las pretensiones de la

Corona española», pág. 210), no podía concluir sino en la definición de un nacionalismo catalán cuyas pretensiones, dicen los autores en contradicción con lo que han sido las interpretaciones al uso de este nacionalismo, no pueden ser otras sino la consecución de un Estado independiente. Posición comprensible, sin embargo, si se da por buena la afirmación de que al margen del federalismo periférico del XIX no ha habido otro movimiento modernizante y democrático en la España moderna.

G. Shabad y R. Gunther, en un por otro lado ponderado artículo en torno a los conflictos lingüísticos en España (5), no pueden sustraerse al clima general de dramatización e idealización de nuestro problema nacional-regional. Pese al reconocimiento expreso de la tradición de autonomía de las provincias vascas dentro del Estado español, los autores —sin solución de continuidad— se verán obligados a reiterar las referencias al tradicional y secular centralismo castellano. La guerra civil de 1936 debe ser interpretada como fruto sustancial de unas tensiones nacionalistas, del mismo modo que la Constitución de 1978 se justifica fundamentalmente por el intento integrador de los nacionalismos periféricos. En el reciente estudio de R. Gunther, G. Sani y G. Shabad sobre la España posfranquista (6) se reiteran algunas de estas afirmaciones. No solamente el conflicto centro-periferia vuelve a tomar un lugar clave en el desencadenamiento de la guerra civil pese a la ausencia de serias tensiones secesionistas en 1936, sino que vascos y catalanes se convierten en los «principales objetivos» de la represión franquista. Una afirmación está llamada a alcanzar fuerte predicamento entre los propios nacionalistas, vascos especialmente, olvidadizos sin duda —como los autores de este libro— de la alineación política de vascos y catalanes en la guerra civil, de lo que fue la represión franquista en otros puntos de España y de las propias características geográficas de la guerra civil y la consiguiente represión (7). Más allá de lo inexacto de estas afirmaciones, sobresale la magnificación de la raigambre de un problema nacional-regional que distinguiría a España, en el presente y en el pasado, del resto de la Europa occidental. No están ausentes los desenfoques en otro interesante artículo de J. F. Coverdale en torno al nacionalismo vasco, aunque sean distintas las causas del despiste. Dentro del proceso de proyectar al presente sobre el pasado español, se descubre la condición histórica del País Vasco como el área más rica de España, explicándose acaso por ello la vocación centralista de Castilla con relación a las provincias vascas. El carlismo no puede ser sino la respuesta, en lugar de la causa complementaria, de la crisis foral, y la totalidad del territorio vasco —Alava incluida— debe ser la víctima del castigo franquista tras el fin de la guerra civil. Pero estos limitados desenfoques extranjeros respecto al problema, visibles también en el libro de B. Kohler y en mayor medida en el de D. S. Bell, son, sin duda, menos significativos que los generados entre la propia comunidad académica española. Y si esto puede decirse de algunos de nuestros profesores que

explícitamente abordaron la cuestión, ahí están las hemerotecas para ilustrar las opiniones de otros intelectuales y hombres públicos que, desde la izquierda en la mayoría de los casos, hicieron su peculiar aportación a la ceremonia de la confusión en torno al problema.

Las causas del fenómeno

Con el adecuado distanciamiento de aquella coyuntura, no es difícil entender las causas que explican semejantes actitudes. Contribuyó a ello, sin duda, una actitud «neoromántica» ante unos movimientos nacionalistas europeos que, en los años setenta, pudieron ser vistos por algunos como una renovación de la llama revolucionaria. Del mismo modo que de los nuevos movimientos sociales, equiparados a la suerte de ecologistas, feministas, pacifistas y anti-nucleares, de los nacionalismos sin Estado, de los nacionalismos étnicistas, de los «pueblos minorizados», se esperaba la alternativa revolucionaria que no podía protagonizar ya la socialdemocracia europea y que cuadraba mal como los sueños eurocomunistas. Por de pronto, y a falta de mejores indicios sobre la solvencia revolucionaria de los nacionalismos alimentados por una retórica tercermundista, esos nacionalismos estaban ahí. Activistas, voluntaristas, luchadores, dispuestos a la acción directa, los movimientos nacionalistas en el Ulster, en Escocia, en Bélgica, en Córcega, en Bretaña, en Quebec o en el País Vasco, eran algo vivo en un momento de atonía revolucionaria. Es cierto que el pasado filofascista, racista, conservador o reaccionario de buena parte de estos movimientos podrá ser causa de perplejidad para las nuevas vocaciones revolucionarias. Pero la súbita conversión al marxismo, la invocación a Fanon, el ejemplo argelino y el atractivo de la acción, podían ayudar a superar las reticencias ante unos nacionalismos de los pueblos dispuestos a enfrentarse al, a partir de ahora, nefasto nacionalismo de los adelantados en el proceso de construcción de las naciones.

La fácil aceptación por la izquierda del reverdecimiento de las pretensiones nacionalistas, presentadas ahora como las más eficaces instancias de transformación revolucionaria, no se producía, sin embargo, en el vacío. Sin la constante manipulación comunista de la cuestión nacional, sin el hábito instrumentalizador de las tensiones nacionalistas insinuado ya en Marx y explicitado en Lenin y Stalin, hubiera sido imposible una convergencia de las ilusiones de una nueva izquierda y unos renovados o nuevos movimientos secesionistas en Europa occidental.

De un modo más o menos vago, este proceso ideológico habría de tener su incidencia en España. El crecimiento de la primera ETA, el surgimiento posterior de grupos como el Movimiento Comunista o la Liga Comunista Revolucionaria, son fenómenos estrechamente

relacionados con aquél. No creo, sin embargo, que ésta pueda ser la explicación fundamental para entender el proceso de difuso filonacionalismo que caracteriza a buena parte de la izquierda española en los finales de los sesenta y los primeros setenta. Creo que son razones tácticas, de distinta naturaleza, las que pueden dar cuenta de esa actitud.

Si los nacionalismos radicales pudieron ser en la Europa de los sesenta una animación a un proyecto revolucionario necesitado de sustituir la traición del proletariado, los nacionalismos vascos y catalán fueron unos eficaces dinamizadores de la lucha política contra la dictadura de Franco. Entre los grupos sociales en que se vivía con mayor efervescencia la lucha contra el franquismo, las pretensiones nacionalistas habrían de encontrar un buen ambiente. Estudiantes, profesores e intelectuales tendían a acoger con simpatía lo que había de justo y de exagerado en las pretensiones de unos nacionalismos periféricos capaces de protagonizar acciones de «masas» y, muy especialmente, acciones de fuerza, contra un régimen represivo. La actitud del partido comunista, con su innegable fuerza dentro de la vida de oposición, habría de ser decisiva respecto a la asunción de unos postulados nacionalistas que, con mayor o menor entusiasmo, hubieron de asumir después el resto de las fuerzas políticas de izquierda. La opinión comunista superó siempre en su filonacionalismo periférico al resto de los partidos estatales. De acuerdo con los datos recogidos por R. Gunther, G. Sani y G. Shabad para 1979, el número de encuestados que declaraban su preferencia por el comunismo y eran partidarios de la independencia como solución de los problemas regionales alcanzaba el 11 %. Más del doble de los proindependentistas que manifestaban sus preferencias por los socialistas (el 5 %) y muy por encima de los identificados con Convergencia i Unió (6 %). Esta actitud es acorde a la de la defensa de la conveniencia de que el Gobierno negociase con ETA. Mientras en ese mismo año son partidarios de esa negociación el 31 % de los encuestados que expresan preferencias comunistas, la cifra alcanza el 21 % en el caso de los que se identifican con el socialismo o el 5 % entre los identificados con Convergencia i Unió..

Una segunda razón táctica empuja inmediatamente después a esa asunción de las pretensiones nacionalistas más radicales: la necesidad de integrar unas demandas que tan eficazmente se habían animado previamente. De este modo, la necesidad de «entrar» en determinados sectores sociales contrarios al franquismo se complementaba con el temor a dejar solos a los nacionalistas en la defensa de unas reivindicaciones que se habían estimado elementales y de pura evidencia.

Cuando hace ya algunos años me permití señalar la incongruencia de estas actitudes socialistas y comunistas, me permitía también señalar la falta de lógica de una defensa por parte de los partidos

estatales de un lenguaje y un discurso que solamente podían articularse —sin riesgo de ridículo— desde el particularismo y nunca desde la pretensión de representación global del Estado. Señalé entonces que semejantes actitudes, y en concreto la defensa incondicionada del derecho de autodeterminación, no respondían a una demanda real de la sociedad española, ni tan siquiera de sectores significativos de esa sociedad o de los eventuales votantes de la izquierda estatal. En 1975, en plena efervescencia programática, solamente el 13,2% de los españoles se manifestaba partidario de ese derecho de autodeterminación (8), alcanzando ese porcentaje al 32% de los vascos y al 19,7% de los catalanes. No siendo verosímil que ese porcentaje de vascos o catalanes diese mayoritariamente su voto al PSOE, al PCE o al PSP, parece evidente que el unánime criterio filonacionalista de la izquierda española se mantuvo contra la opinión de un electorado que solamente compartiría el criterio más sobresaliente de ese filonacionalismo, el derecho de autodeterminación, en porcentajes inferiores al 13%.

Dicho lo anterior, debe darse entrada a otros factores en la comprensión de la actitud ante el problema por parte de la izquierda española. Es cierto, de una parte, que el agudo centralismo de la dictadura obligaba a una reconsideración en profundidad de la actitud del conjunto de España ante el País Vasco y Cataluña. Aunque en lo sustancial era falsa una presunta situación de opresión nacional respecto a esas dos comunidades, aunque no era cualitativamente distinta la presión dictatorial sobre esos territorios en relación a los del resto del Estado, era evidente que las lenguas vasca y catalana habían sido objeto de persecución en los primeros años del franquismo y que se obstaculizaba una normalización lingüística que permitiese a la sociedad civil del País Vasco y Cataluña la libre utilización de las lenguas propias y la del Estado. Hablar de genocidio cultural o de genocidio a secas en relación a lo sucedido en esos dos países, como se habló en buen número de ocasiones, era pura fantasía, sin relación ninguna con los hechos. Pero la situación de «mala conciencia» con relación al País Vasco y Cataluña, mala conciencia incrementada con las sucesivas incorporaciones a la oposición de personas y segmentos sociales fuertemente comprometidos en el pasado con el régimen de Franco, obligaba a una actitud receptiva respecto a las demandas nacionalistas y regionalistas.

En esta actitud tenía sustancial significación la evolución de la situación en el País Vasco y el papel de ETA. La estrategia de acción - represión - respuesta por parte de ETA se ha saldado siempre, hasta época muy reciente, con el éxito de la organización terrorista. A ello hubo de contribuir sin duda el componente represivo, torpe siempre, brutal en muchas ocasiones, de una dictadura deslegitimada ante una sociedad crecientemente democrática. La contribución de ETA a la democratización española es una cuestión sumamente dudosa; en primer lugar, porque es discutible que la llamada

«lucha armada» fuese en sí misma una contribución al debilitamiento del franquismo; en segundo lugar, porque ETA —en tanto que organización terrorista— no adquiere real significación mas que a la muerte de Franco y con el restablecimiento de la democracia. Aunque los datos sobre los asesinatos terroristas ofrecen alguna contradicción (9), está claro que el total de atentados con muerte de enero de 1966 a diciembre de 1975, 43, presuponen una capacidad de acción terrorista muchísimo menor a la desplegada una vez aseguradas las libertades democráticas (65 asesinatos en 1978, 78 en 1979 o 96 en 1980). Pero la presumible irrelevancia primero y el grave obstáculo después que ETA ha supuesto para la democracia española, no pueden ocultar su funcionalidad para el desarrollo del nacionalismo vasco. Quien haya conocido la acción de la oposición antifranquista vasca con anterioridad a 1967, y quien se haya aproximado a ella en los años setenta, habrá sido testigo de una explosión de nacionalismo que estuvo intrínsecamente unida a la táctica guerrillera y política de ETA. Es evidente que fue esta crisis vasca, y vuelvo con ello al hilo de la argumentación anterior, la que levantó las mayores solidaridades con el nacionalismo en el resto de España, unas solidaridades forjadas a golpes de acciones terroristas y a golpes de represión de unas fuerzas policiales que muy difícilmente podían haber estado a la altura de las circunstancias.

Las consecuencias

El proceso que hasta ahora se ha descrito está abierto a muy diferentes interpretaciones. Parece evidente que una vez desencadenada la efervescencia nacionalista que rodea al proceso constituyente y tiene su punto álgido en las elecciones legislativas de 1979, era inevitable una amplia comprensión de un fenómeno que no podía verse frustrado por un brusco giro hacia el realismo. En líneas generales, parece acertada la actitud que UCD y PSOE manifestaron en esta coyuntura, tratando de encontrar el punto de equilibrio entre unas demandas nacionalistas y las necesidades de continuidad y eficacia en la vida estatal. Pero en esta difícil estrategia política era inevitable la persistencia de problemas y desenfoces generales de los años anteriores.

Por lo pronto, nunca podrá conocerse con exactitud lo que la comprensión nacionalista de la izquierda española pudo suponer de excitación y acicate a los postulados auténticamente nacionalistas. Reivindicaciones que muy pocos años antes habían sido consideradas objetivos satisfactorios para los nacionalismos vascos y catalán, quedaron rápidamente desbordadas por la dinámica de los hechos. Los estatutos de autonomía de la II República fueron al respecto ejemplos significativos. La acelerada revolución de las expectativas por parte de los nacionalismos periféricos fue una realidad. Aunque resultan arriesgadas interpretaciones demasiado tajantes

al respecto, no parece desmedido concluir que la necesidad de los partidos nacionalistas de singularizarse de los partidos estatalistas en cuanto a la política autonómica y la cuestión nacional obligó a los primeros a radicalizar y exagerar sus pretensiones como modo de garantizar su espacio político. Ante cuestiones como la lengua, el derecho de secesión, la existencia de competencias exclusivas para los futuros gobiernos autónomos, la policía, etc., los partidos nacionalistas no podían quedarse rezagados de lo dicho y proclamado por la izquierda estatal. Y en menor medida aún, podían aceptar un súbito «cambio de línea» como consecuencia de factores políticos que no tenían relación con transformaciones significativas de la opinión y la dinámica política en Euskadi y Cataluña.

Es un lugar común señalar el atrevido paso político de la UCD al generalizar el proceso autonómico al conjunto de España. Resulta evidente que en este paso se reflejaba no solamente la apuesta por un determinado modelo de organización territorial del Estado, sino el intento de disolver los problemas nacionalistas más graves en una reformulación general de la planta estatal. Tiene poco sentido plantearse ahora el acierto o el error de esa decisión. Debe subrayarse, sin embargo, que fue una decisión compartida por el resto de las fuerzas políticas significativas, el PSOE especialmente, y que contó con el apoyo generalizado de las élites políticas del país y amplios sectores de la opinión de buena parte de España. Cuestión distinta es la precipitación con que se llevó a cabo el proceso de reajuste y el peso del «efecto demostración» desatado en la redacción de los estatutos tras la aprobación de la constitución. Por de pronto habrían de surgir comunidades autónomas de difícil justificación (La Rioja, Cantabria), de discutible necesidad (Madrid) o de muy escaso apoyo popular (Castilla-León, Castilla-La Mancha o Extremadura). Al mismo tiempo, y al procederse a la redacción de los estatutos, se comprobaban los costos de la redacción de la Constitución en un clima político no suficientemente sereno por lo que hace a este problema. Como escribía García de Enterría (10), la fórmula napoleónica («*on s'engage et puis on voit*») presidió buena parte de la redacción de un título octavo de la Constitución que habría de devenir, inevitablemente, en sumamente conflictivo.

Al final es muy posible que las cosas salieran mejor de lo que había esperar en un primer momento. Como señalaba el propio García de Enterría, el texto constitucional terminaría evidenciando un inesperado contenido ordenador del sistema autonómico, ofreciendo las bases para la adopción de una lógica federal que introdujese racionalidad y orden en el proceso autonómico. La línea de reorientación marcada por el Informe de la Comisión de Expertos sobre Autonomía (11), y concretada en la LOAPA corregida y matizada por la decisión del Tribunal Constitucional, fue, pese a todo, de utilidad para el conjunto del Estado autonómico, aunque no pudo evitar tensiones y conflictos con las comunidades autónomas histó-

ricas que siempre vieron con distanciamiento el proyecto federalizable de la nueva España democrática.

Andrés de Blas
Guerrero

Conclusión

Como decía al principio, lo hasta aquí dicho explica, en el mejor de los casos, una parte de la cuestión. El fondo del problema es la dinámica interna de unos nacionalismos periféricos que en buena medida se sustrae al influjo de la izquierda estatal. Aunque no sea este el objetivo de esta comunicación, querría terminar con unas breves observaciones sobre la dinámica de esos nacionalismos y sobre las líneas de tratamiento del problema desde la perspectiva de la izquierda española.

Quien se encuentre familiarizado con los estudios generales del nacionalismo, conoce bien el desasosiego implícito al deseo de encontrar un marco teórico capaz de dar una explicación global del mismo. Los enfoques más ambiciosos al respecto, desde las teorías de la modernización al marxismo, pasando por el impacto de la comunicación, las explicaciones de la psicología social y el arsenal de las complejas explicaciones ofrecidas por los propios nacionalismos, no han conseguido —pese a su indudable eficacia en gran número de casos concretos— ese objetivo. Hoy, como ayer, el nacionalismo sigue siendo, como ideología y movimiento, un fenómeno complejo y ambivalente, capaz de construir Estados y destruirlos, susceptible de aliarse con el proceso de legitimación liberal-democrática del poder y de sabotear eficazmente ese proceso mediante el amparo de ideologías conservadoras y reaccionarias capaces a su vez de congelar en determinadas sociedades una modernización social o económica a cuyo servicio adquiere el nacionalismo su sentido en otras latitudes (12).

Al fin, junto a esta versatilidad fundamental de la ideología nacionalista, solamente permanece constante, en el caso de los nacionalismos de inspiración cultural, la lealtad a una especificidad étnico-cultural, y en todos los supuestos, su vocación por la consecución de poder político, sea en la forma de Estado o en otras formas de autogobierno de base territorial. A partir de estas premisas es posible entender el surgimiento y desarrollo de los nacionalismos periféricos españoles. Ni la especificidad cultural, en unos movimientos que surgen desde plataformas urbanas limitadamente diferenciadas del conjunto de España, ni la intensidad de unos agravios, en unos movimientos que surgen y crecen en coyunturas liberal-democráticas (segundo trecho de la Restauración, II República, Constitución de 1978), pueden equipararse a la potencialidad de los movimientos nacionalistas para ser instrumentos de presión, representación y participación de diferentes agentes sociales. Es cierto que permanece siempre, en el supuesto de nacionalismos

como el vasco, catalán o gallego, una fidelidad por la personalidad cultural diferenciada de sus pueblos. Pero esa fidelidad, sin la cual resultaría sumamente difícil mantener la identidad ideológica de esos movimientos nacionalistas, ni tiene por qué ser exclusiva a los nacionalismos (ni lo ha sido en el pasado ni lo sigue siendo hoy), ni es la razón fundamental sobre la que se justifica su existencia.

Los nacionalismos periféricos españoles, salvo impensables supuestos de opresión cultural y lingüística, sobrevivirán en tanto distintos grupos sociales vean en ellos la posibilidad de acceso a un nivel de poder político propio y una vía eficaz de presión sobre otras instancias políticas de ámbito territorial más amplio. El que las impaciencias de los nacionalismos periféricos tiendan a desbordarse en nuestra historia en coyunturas más proclives al reconocimiento de un poder regional o autonómico, tiene que ver menos con ajustes de cuentas en relación a situaciones pasadas que con las oportunidades que en estos momentos se ofrecen cara al incremento de más significativas cuotas de poder de uso exclusivo.

¿Cuál debería haber sido el tratamiento más adecuado, y cuál puede serlo hoy, de estos movimientos nacionalistas? Es evidente, en primer lugar, que era necesario el reconocimiento de una esfera de poder autónomo, tanto político como administrativo. La Constitución de 1978, en las condiciones de ambigüedad a que antes me refería, resolvió esta cuestión. Era y es discutible, sin embargo, que un aumento cuantitativo de competencias, la aceptación de ambiguas exigencias nacionalistas —la redacción amplia de la cláusula foral por ejemplo—, la asunción sin más del federalismo o la reforma del Senado, pudieran o puedan atenuar significativamente la presión nacionalista. Algunas bienintencionadas y sumamente respetables demandas en favor de la reforma de la Constitución cara a este objetivo, por ejemplo la de R. García Cotarelo (13), tienen que tener en cuenta no solamente los riesgos políticos de la operación, sino el aún mayor riesgo de su irrelevancia cara al objetivo propuesto. La meta a conseguir en este tema es que los nacionalismos periféricos decidan abandonar la actitud victimista y la siembra de frustración en sus respectivas comunidades —abandono realizado en buena medida por el nacionalismo catalán y en grado mucho menor por el nacionalismo vasco moderado— en favor de la acción en un marco político autónomo que la propia experiencia podrá ir modulando de acuerdo a las necesidades de las comunidades y del propio Estado central. Es una decisión política y no un mecanismo jurídico la que ha permitido ir solucionando el problema catalán y puede solucionar el problema vasco.

En segundo lugar, el Estado central debe aceptar, con todas sus consecuencias, la reformulación de una planta política que ya no se ajusta al sabor castellano-andaluz dominante durante siglos. El Estado central no solamente debe practicar una exquisita neutrali-

dad respecto a la influencia de los distintos grupos sociales con personalidad cultural diferenciada, sino que debe evidenciar su porosidad a una España periférica que tiene todo el derecho a disfrutar las cuotas de poder político que le corresponden, no solamente en las Comunidades Autónomas, sino en el propio Estado central. Lo que con plena razón y coherencia nació bajo signo castellano, no debe —por los mismos argumentos demográficos, económicos y culturales— seguir teniendo ese signo predominante. En este terreno se avanzó poco en la transición, pese al esfuerzo constitucional y autonómico, y puede que todavía quede mucho por hacer. Complejas circunstancias, a las que no son ajenas sin duda el oportunismo político de los propios nacionalismos periféricos, siguen haciendo del Estado algo absurdamente distanciado de algunos de los territorios paradójicamente más dinámicos y activos de España.

En tercer lugar, se hubiera requerido en la transición y se sigue requiriendo todavía que los partidos políticos estatales consiguieran una seria implantación en el conjunto de España, bien desarrollando su capacidad organizativa, bien articulando en torno a ellos fuerzas políticas nacionalistas y regionalistas interesadas también en el juego político estatal. Equivale esto a reconocer la necesidad de un funcionamiento más democrático y descentralizado de unos aparatos partidistas que tienen que aceptar seriamente, en el seno de sus organizaciones, el reparto de poder operado a un nivel general en el conjunto de la vida política. Por último, es evidente que una visión no sacralizada del problema nacional-regional español, la superación de los mitos y la sobrecarga ideológica que ha rodeado a la cuestión, deben formar el telón de fondo para una visión más optimista del problema.

La cuestión nacional-regional de España gravitó decisivamente sobre el proceso de transición. Seguramente fue mucho mejor lo que se hizo que lo que se dijo, pero ni se hicieron todas las cosas debidas ni las palabras ni las confusiones ideológicas —como casi siempre sucede en política— fueron arrastradas por el viento con la celeridad que hubiera sido deseable. Hay que pensar y desear, sin embargo, que todos los elementos negativos de aquellos años quedarán definitivamente olvidados a la sombra de un nuevo edificio estatal capaz de resolver un pleito político mucho menos antiguo de lo que algunos creen, pero de gravedad y significación innegables en el presente y en el inmediato futuro.

Notas

(1) Los textos citados a continuación, del PSOE y el PCE, están recogidos en mi artículo «El problema nacional-regional español en los programas del PSOE y el PCE», *Revista de Estudios Políticos*. Madrid, 1978.

(2) Recogido en *Por un socialismo democrático*. Tucur Ediciones, Madrid, 1977.

(3) Salvador Giner, «Nacionalismo étnico: centro y periferia en España», recogido en F. Hernández y F. Mercadé (eds.), *Estructuras sociales y cuestión nacional en España*, Barcelona, 1986. Una primera versión de este trabajo apareció en C. Abel y N. Torrents (eds.), *Spain, Conditional Democracy*. Croom Helms, Londres, 1984, libro que, en general, tiende a no defraudar las expectativas sugeridas por tan significativo título.

(4) «Catalan Nationalism and the Spanish Elections», recogido en H.R. Penniman y E. Mujal-León (eds.), *Spain at the Polls. 1977, 1978 and 1982*, Duke University Press, 1985.

(5) «Language, Nationalism and Political Conflict in Spain», *Comparative Politics*, julio, 1982.

(6) *Spain after Franco*. University of California Press, 1986.

(7) Como ilustración de lo que hay de desmedido en afirmaciones de este tipo puede servir la macabra clasificación que realiza R. Salas Larrazabal (*Pérdidas de la guerra*, Planeta, Barcelona, 1977) de las provincias españolas según el número de ejecuciones y homicidios llevados a cabo por el bando llamado nacional. A los efectos de mi argumentación, es irrelevante el criterio para contabilizar el número real de las víctimas de la represión; a este respecto puede ver el lector interesado en el tema las observaciones de A. Reig en *Ideologías e historia: sobre la represión franquista y la guerra civil* (Akal, Madrid, 1986). Lo significativo es que, aceptando la inexistencia de cualquier pretensión de manipulación geográfica de las cifras, tanto el País Vasco como Cataluña presentan una situación de clara ventaja en esa relación. Entre el número 1 de la lista, Córdoba, y el número 50, Soria, Vizcaya ocupa el puesto 41, Guipúzcoa el 42 y Alava el 47. En el caso catalán, Barcelona ocupa el puesto 6, Tarragona el 25, Lérida el 35 y Gerona el 4.

Al aproximarse, aunque sea superficialmente, al desarrollo de la guerra civil en Euskadi, se hace aún más patente el sinsentido de una singularización vasca en relación a la represión franquista. Al margen de las cifras citadas, habría que considerar, por ejemplo, el calado de esa represión en Navarra, con una irrelevante presencia del nacionalismo vasco, en comparación con la llevada a cabo en Alava o Guipúzcoa. Dejando a un lado el tema de los «pactos de Santoña», el significado del carlismo y la cuestión de los «voluntarios», creo que hay otro dato significativo a considerar: la aparente inexistencia en 1943 de presos nacionalistas vascos en las cárceles de Franco, según se desprende de la autorizada manifestación de Jesús Soraun en el libro de E. Ibarra (ed.), *Cincuenta años de nacionalismo vasco*. Ediciones Vascas, Bilbao, 1978. No se trata con todo esto de relativizar cuanto hay de bárbaro en la represión franquista de posguerra en Euskadi (sobre el particular puede verse, además del libro de E. Ibarra, los testimonios recogidos por L.M.^a y J.C. Jiménez de Aberasturi, en *La guerra en Euskadi*. Plaza y Janés, Barcelona, 1979. Más sencillamente, se trata de subrayar el dato obvio de que esa represión, del mismo modo que la represión desencadenada por el Frente Popular desde el 18 de julio, en absoluto fue más dura —si acaso lo contrario— con los vascos que con el resto de los

españoles. En todo caso estamos ante uno de esos tópicos firmemente establecidos en la literatura académica y política, y sería injusto subrayar la responsabilidad al respecto de los autores arriba citados. Quien se encuentre familiarizado con el buen número de publicaciones europeas y norteamericanas dedicadas al fenómeno nacionalista en la Europa del siglo XX, tendrá ocasión de constatar lo común de afirmaciones como las comentadas, y mucho más exageradas aún, en relación al nacionalismo vasco.

(8) S. del Campo y J.F. Tezanos, *La cuestión regional en España*. Edicusa, Madrid, 1977.

(9) Se utilizan aquí los datos, no plenamente coincidentes, facilitados por R. López Pintor, «Los condicionamientos socioeconómicos de la acción política en la transición democrática». *Revista Española de Investigaciones Sociológicas*, 15, 1981 y R. García Damborenea en su sugestivo ensayo *La encrucijada vasca*. Argos Vergara, Barcelona, 1984.

(10) E. García de Enterría, «El futuro de las autonomías territoriales», en E. García de Enterría (eds.), *España: un presente para el futuro*. IEC, Madrid, 1984, vol. II.

(11) La Comisión, presidida por García de Enterría, estaba integrada por los profesores de Derecho Administrativo J. Cosculluela, T. Ramón Fernández, S. Muñoz Machado, T. Quadra-Salcedo, M. Sánchez Morón y Fco. Sosa. El breve *Informe* fue publicado por el CEC en el mismo año de su elaboración, 1981.

(12) He intentado ofrecer una descripción de esta complejidad en mi libro *Nacionalismo e ideologías políticas contemporáneas*. Espasa Calpe, Madrid, 1984.

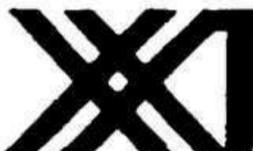
En este libro traté también de presentar el estado actual de la cuestión en cuanto al estudio del nacionalismo.

(13) Especialmente, en su muy interesante ensayo, *Resistencia y desobediencia civil*. Eudema, Madrid, 1987.

Comunicación presentada al seminario «Socialismo y Nacionalismo» que, organizado por la Fundación Pablo Iglesias, tuvo lugar en Sigüenza el 25 y 26 de marzo de 1988.

E D I T O R I A L

LABIO IGLESIAS


Siglo veintiuno
de España
Editores, sa

GERALD A.
COHEN

LA TEORIA DE
LA HISTORIA
DE KARL MARX
UNA DEFENSA

E D I T O R I A L
LABIO IGLESIAS


Siglo veintiuno
de España
Editores, sa

LA TEORIA DE LA HISTORIA DE KARL MARX
Gerald A. Cohen

405 págs.

2.000 ptas. (IVA)

La teoría de la historia de Karl Marx es un libro fundamental en la historia del pensamiento marxista y uno de los pocos textos absolutamente imprescindibles para el estudio de la obra de Marx. En primer lugar, supone una brusca ruptura con la tendencia dominante en lo que Perry Anderson llama el «marxismo occidental». Lejos de reinterpretar a Marx en términos próximos al idealismo, lejos de hacer hincapié en cuestiones de metodología o filosofía, Cohen trata de subrayar el aspecto esencialmente materialista de la obra de Marx, su creencia en el papel determinante del desarrollo de las fuerzas productivas y, subsiguientemente, del carácter de las relaciones de producción. Junto a esta vigorosa reafirmación del materialismo, su análisis se aleja de lo tradicional por desarrollarse en términos de extrema claridad, más próximos a la tradición de la filosofía analítica que a las habituales oscuridades de las posibles variantes de la dialéctica hegeliana. Y, por último, la justificación del razonamiento de Marx en términos de explicación funcional ha dado origen a una compleja y saludable polémica en las ciencias sociales y en el marxismo contemporáneo.

Pedidos:
Monte Esquinza, 30, 2.º dcha.
Tels. 410 46 96 y 410 47 96

Forma de pago: talón bancario
o giro postal



FIDELIDAD NACIONAL Y FIDELIDAD ESTATAL

José Ramón RECALDE

El campo de la fidelidad política se sitúa hoy de modo dominante por referencia a dos entidades: por la nación y por el Estado. No se trata de dos realidades homogéneas, pues el Estado es la institución del poder establecido mientras que la nación es una afirmación ideológica para la justificación del poder. De modo que, si se razona sobre la legitimidad del Estado, el objeto del razonamiento es el Estado, como poder establecido, y la posibilidad de que este poder existente sea poder legítimo; por el contrario, si se razona sobre la legitimidad de la nación, el objeto del razonamiento es la aspiración, o bien a que tal ente sea la justificación de un poder que como tal nación no tiene —pues el poder está en el Estado— pero pretende adquirir, o bien a que, por el hecho de que justifique el poder, pueda pretender fundar un Estado.

Para analizar este campo diverso en el que se plantean la legitimidad estatal y la nacional procede que distingamos distintos planos de razonamiento: el primero será el de la existencia de las comunidades nacionales; el segundo el de la pretensión de reconocimiento de las culturas nacionales; el tercero, el de la legitimidad política de la nación; y el cuarto el de la legitimidad del Estado.

La existencia de las comunidades nacionales

Sobre la existencia de las comunidades nacionales cabe formular juicios de alcance muy distinto. Unos serán aquéllos que plantean

el problema de hecho de si tales comunidades existen o no. Otros serán aquéllos que plantean el juicio de valor de si el hecho de que existan tales comunidades es algo bueno o malo.

Con respecto del primer tipo de juicios afirmaremos que las comunidades nacionales existen, pero seguidamente tendremos que analizar el alcance de esta afirmación. Por de pronto, parece bastante evidente que existen comunidades culturales y sociales que son el resultado de un desarrollo histórico. No son las voluntades de los hombres las que crean estas comunidades sino que éstas son el precipitado de actos individuales, con independencia de los objetivos de estos actos.

Pero estas comunidades culturales son imprecisas, tanto por su extensión espacial cuanto por el modo y grado en que sus miembros participan en ellas. Hay, por ejemplo, una comunidad cultural y social «occidental», entre cuyos componentes históricos están la cultura clásica greco-romana y el cristianismo y que se extiende sobre todo —pero no sólo— por Europa y América; pero hay también comunidades culturales y sociales comarcales o municipales, que nos permiten diferenciar por ejemplo la comunidad pasiega o la de Nueva York; entre un ámbito y el otro existen series de comunidades intermedias, más o menos amplias. Evidentemente no hay conflicto en imaginar cómo un individuo puede pertenecer al mismo tiempo a comunidades más o menos amplias, cuando el ámbito de éstas está pacíficamente incluido en el de aquéllas. Así, un hombre de la Turena no parece que pueda tener conflicto mayor en apreciar cómo pertenece a esa comunidad comarcal, pero además a la francesa, a la europea y a la occidental.

Más difícil es determinar la pertenencia a comunidades precisas cuando se trata, por ejemplo, de un campesino de la Turena que se ha trasladado a los 18 años al cinturón industrial de París, o bien de un químico romano que a sus veinticinco años se incorpora a una universidad de los Estados Unidos. ¿A qué comunidad cultural pertenece Kafka: a la alemana, a la bohemia o a la judía?

Si todos estos casos conflictivos los resolvemos diciendo «a la que ellos decidan» no somos coherentes con el plano en que ahora estamos pensando: el de la existencia objetiva de comunidades culturales, como precipitado histórico, por encima de la conciencia subjetiva de las mismas. A las comunidades culturales se pertenece, con independencia del acto de voluntad que consista en afirmar unas y rechazar otras, y con independencia también de la trascendencia política que queramos derivar de tal pertenencia.

Pero de la existencia de las comunidades culturales no se deriva la existencia de las comunidades nacionales. Pues lo «nacional» es una calificación que se atribuye a algunas comunidades culturales y

sociales, no por rasgos objetivos, sino por actos de voluntad política. Esto significa: a) que algunas comunidades son *seleccionadas* entre las varias a las que los hombres pertenecen, calificándolas así de nacionales; b) que esta selección se produce por *alguien*; c) que es *explicada por algo* objetivo; d) que es *para algo*. El primer elemento acentúa el carácter subjetivo de la atribución; los tres siguientes, la condición históricamente observable de la opción (1).

Lo específico de la nación no está en una condición peculiar de esa comunidad cultural sino en el hecho de que haya sido subrayada entre las varias a las que sus hombres pertenecen. Es así el resultado de un acto de voluntad.

Pero, ¿quién o quiénes nombran a las naciones como tales? Aquí vienen ya dos determinaciones: histórica una y política otra. No nos estamos refiriendo a elaboraciones intelectuales de individuos singulares sino a decisiones colectivas. Estas se producen en la época histórica en que surgen los nacionalismos, esto es, desde los revolucionarios franceses y los contrarrevolucionarios alemanes hasta hoy. Se trata, además, de movimientos populares, esto es, suponen la presencia del pueblo, como tal, en la política. Si bien el nacionalismo puede en buena parte haber sido inventado por un líder no llega a ser fenómeno político hasta que se produce la incorporación popular al movimiento.

¿En qué circunstancia social surge? Si tuviéramos que describir con unos pocos rasgos generales la circunstancia en que el nacionalismo surge, éstos habitualmente podrían ser: modernización económica y demográfica: sociedad industrial, ampliación del mercado, migración del campo a la ciudad industrial, generalización de la cultura y, como consecuencia de todo ello, ampliación de los lazos culturales, sociales y económicos de intercomunicación; ampliación del campo de participación del ciudadano en la política y en el Estado: tensiones para afirmar los derechos individuales, negación de los vínculos tradicionales y aspiraciones políticas muy determinadas por el grado de implantación de las formas de Estado moderno.

Los nacionalismos se constituyen, como movimientos políticos, para lograr algo. Desde una perspectiva cultural, una afirmación colectiva; desde una perspectiva institucional, una autonomía. Ambos son objetivos políticos, pero el primero se refiere a una política que tiene como objeto la cultura mientras que el segundo a una política que tiene por objeto la organización de las instituciones. La circunstancia histórica permitirá múltiples formas de composición de estos dos objetivos, en función de la posición de dominio o de subordinación de la colectividad nacional; de la nitidez de su presencia en un territorio; de la mayor o menor fuerza con que el poder del Estado esté previamente implantado.

Así, la afirmación colectiva que pueda hacer una comunidad gitana podrá acentuar sus pretensiones culturales (o acaso su voluntad de ser recibida en una nación más amplia), pero difícilmente tendrá la misma condición que la afirmación de la nación francesa, dentro del ámbito territorial del Estado de Francia. Entre uno y otro caso, los ejemplos de naciones en busca de autonomías culturales u organizativas en Estados unitarios o compuestos, federales o no (división de técnica constitucional), con pretensión de uninacionalidad o de plurinacionalidad (división de ideología nacional), ofrecen una panorámica abierta y dispersa.

Se puede recapitular, por lo tanto, afirmando que si bien hay comunidades culturales, las comunidades nacionales no son otra cosa sino el resultado de subrayar una comunidad sobre las otras; este acto de subrayar una comunidad y llamarla «nación» queda parcialmente determinado por el hecho de que se trata de un fenómeno colectivo y popular, que se produce por causas sociales y políticas determinadas y que tiene diverso alcance, según las posibilidades que la historia cultural y política ofrece. Pero nada de eso permitirá una concreción total. Y así tendremos que, en momentos distintos, o aun en el mismo momento, el subrayado nacional será diferente: los vascos en 1880 se sentían nacionales españoles y en 1980 se sienten mayoritariamente nacionales vascos (pero hay también una importante minoría de nacionales españoles).

Hasta ahora nos hemos detenido en la consideración de la existencia de las comunidades nacionales. Otra reflexión distinta es enjuiciar si el hecho de que existan tales comunidades nacionales se considera bueno o malo.

Fenómenos históricos de afirmación o de rechazo de la comunidad cultural a la que se pertenece se han presentado con frecuencia: la indagación cultural sobre el propio folklora, el trabajo de investigación sobre el propio idioma, las actitudes psicológicas de autoestima dentro de la propia comunidad, o en relación con otra, responden a una valoración positiva. Por el contrario, el cosmopolitismo, el desprecio de las formas tradicionales y la estima por lo foráneo responden a una valoración negativa.

Al pertenecer los hombres, al mismo tiempo, a distintas comunidades culturales, fácilmente se produce el hecho de que la valoración positiva de una de ellas acompañe a la valoración negativa de otra. Actitudes como las de aquellos «ilustrados» vascos que hacían compatible la valoración positiva de los dos ámbitos culturales a los que pertenecían, el vasco y el español, no son muy frecuentes.

Es significativo, desde este punto de vista, cómo dos elementos culturales no asimilables el uno al otro pueden ser valorados como incompatibles: así, el idioma «propio» o «nacional» será uno de los

que existen en una comunidad cultural, negándose como propio o nacional el otro (vasco y castellano en la comunidad vasca; gaélico e inglés en la irlandesa). Esta actitud puede suponer la identificación de lo tradicional con lo propio. Pero lo tradicional, ¿es más lo propio que la capacidad de transformación? El debate entre tradición y modernidad queda así abierto a dos perspectivas: una intelectual, que pone en discusión la identificación con una cultura, según se conciba ésta como comunicación con el pasado o como transformación hacia el futuro; otra ética, que pone en discusión la bondad de lo propio frente a la bondad de negar lo propio en virtud de valores superiores.

Lo que podría ser un debate cultural puede también, y suele, resultar desviado por su repercusión nacional. En efecto, una cosa es la valoración positiva o negativa de una cultura y otra distinta su consecuencia nacional. La pertenencia a una cultura tiene un carácter objetivo, frente al cual cabe decir si nos parece esto bueno o malo, pero no cabe, racionalmente, decir que no existe. Pero la nación es la afirmación política de una comunidad sobre las otras, a las que el nacional también pertenece. Por lo tanto, cuando la estima o el desprecio hacia la pertenencia a una comunidad cultural quedan trascendidas a un plano nacional estaremos llegando a la utilización política de tales estima o desprecio. No se trata tampoco de una correspondencia mecánica: que una valoración positiva conduzca al nacionalismo de esa comunidad (a subrayar como nacional esa comunidad sobre las demás) y una valoración negativa al nacionalismo alternativo (a subrayar como nacional la nacionalidad alternativa a la despreciada); baste considerar cuántos nacionalismos de carácter regeneracionista —pensemos en la crítica realizada por intelectuales como Larra o como los del 98, o en el «amamos a España porque no nos gusta», de José Antonio— pueden tener su origen en la valoración negativa de una cultura postrada.

Para afirmar el subrayado nacional y dotarle de una consistencia que lo distinga de las otras comunidades culturales se apela con mucha frecuencia a distintos expedientes ideológicos. Los que más predicamento han tenido han sido la religión, la raza, la lengua y una especie de sedimento cultural histórico que sería el Espíritu del pueblo (la etnia, como esencia nacional, no pasa de ser un término impreciso que, según la ideología que la proclame, oscila entre los tres últimos: raza, lengua y Espíritu del pueblo). Un somero repaso de nacionalismos comparados nos hace ver lo inconsistente de cualquiera de estas distinciones esenciales como fundantes de la nación. Otra cosa es que la apelación a las mismas haya servido efectivamente para que colectivos extensos primen la pertenencia a una comunidad sobre la pertenencia a otras.

Otra idea de nación, incluso anterior en el tiempo a las ideologías

antes mencionadas, puesto que procede de los revolucionarios franceses, identifica prácticamente a la comunidad nacional con el acto colectivo de voluntad de constituir la nación. Podríamos decir que despoja a la nación de cualquier justificación esencialista y, entendiendo ésta como el acto de voluntad política por el que se subraya una comunidad sobre otras, constituye a la nación, no por ningún elemento o ingrediente existente o afirmado, sino por una decisión. La nación, que siempre es un «querer», no se justifica en un «ser» sino en el mismo acto de querer.

Esta conciencia nacional como voluntad supone, en la misma medida en que se renuncia a los «ídolos» nacionales, la asunción y la construcción por los miembros de la comunidad de su propio destino político. Por eso ha ido muy frecuentemente ligada a la concepción de la política como construcción de ciudadanos y no como dominación de los súbditos. Si no hay una esencia superior a la que servir, o que identifique a unos hombres y les diferencie de otros, la autonomía nacional es antes la autonomía del ciudadano que la de ninguna entidad general.

Hay otro elemento nacionalizador fundamental: el Estado. La unidad política estatal ha sido, en muchos casos, factor fundamental, tanto para constituir una comunidad cultural y social cuanto para subrayar a esta comunidad con el calificativo de nacional. Porque han vivido juntos, bajo la regla de un Estado, los súbditos han creado entre sí lazos que les han conformado como una comunidad; pero además los factores de identificación colectiva generados han sido tan fuertes que han colocado a la comunidad de ámbito estatal por encima de otras más amplias, más limitadas o más difusas, y han llamado «nación» a tal comunidad y «nacional» al Estado. No obstante, para la ideología nacionalista que proclama esencias nacionales, el Estado no es la justificación de la nación; la justificación dominante continuará siendo la religión, la lengua, la raza o el Espíritu del pueblo. El Estado es, simplemente, el elemento político que ha permitido la organización del colectivo de ciudadanos, que habrán pasado así de la condición de patriotas estatales a patriotas nacionales, o el que ha provocado la circunstancia, el ámbito económico, demográfico y político que ha facilitado la formación de la comunidad y la atribución a la misma de la condición de comunidad nacional.

Ya es más complejo el problema cuando la ideología nacional se asienta en el acto de voluntad de la autonomía ciudadana y no en justificaciones esenciales. Pues entonces las fidelidades nacionales se solapan con frecuencia con las fidelidades a un Estado que asegure la libertad y la autonomía ciudadana; por el contrario, se produce el conflicto cuando la aspiración nacional se opone a un Estado autoritario o a una regla colonial.

La primera reivindicación nacional tiene por objeto el reconocimiento de la cultura. Si bien las culturas son conceptos objetivos, lo nacional es algo subjetivo con que subrayamos o priorizamos una cultura sobre las demás. Claro está que si pretendemos objetivar la idea de lo nacional afirmando ideologías esenciales, como se ha hecho con frecuencia —la nación como religión, raza, lengua o Espíritu del Pueblo—, la reivindicación de la cultura nacional se convierte en la pretensión de un derecho que estaría atribuido, no a los nacionales, sino a las esencias nacionales. El derecho a la cultura se convierte, en la lógica nacionalista de las esencias nacionales, en un derecho de la cultura, esto es, en el entendimiento de la Cultura como sujeto de Derecho. Las consecuencias son, por una parte, el despojamiento de los ciudadanos de su condición de únicos sujetos de Derecho, con el corolario de su sometimiento a valores que se convierten así en elementos de opresión; por otra parte, al ser de distinta naturaleza los valores «nacionales» y los otros valores culturales «no nacionales», la defensa de éstos queda forzosamente desdibujada frente a la de aquéllos.

La lucha nacional en relación con el idioma es especialmente significativa. Un idioma, como elemento de intercomunicación en una sociedad modernizada puede ser, y es, con frecuencia, pieza fundamental para salir de las relaciones de carácter tradicional. No es muestra de una esencia nacional sino una de las causas de formación de esas comunidades culturales fuertes a las que la ideología identifica con las naciones. Pero, ¿qué ocurre cuando en el mismo territorio, y entre el mismo pueblo, conviven un idioma tradicional con otro de ámbito más amplio, vehículo de intercomunicación preferente en la sociedad moderna? Es el caso del francés y el bretón, el inglés y el gaélico o el castellano y el vasco. La ideología nacionalista uniformizadora añade con frecuencia un incremento de identificación entre idioma y centralismo; el idioma de ámbito más amplio sería entonces el idioma «nacional», porque es el correspondiente a la modernización. La ideología nacionalista diferenciadora contrapone un incremento de identificación entre idioma y particularismo; el idioma de ámbito menos amplio sería entonces el idioma «nacional», porque es el tradicional. Si la argumentación es esencialista, está claro que el conflicto no tiene solución pacífica: los derechos son los del idioma y los de los hombres quedan subordinados; si, por el contrario, los idiomas son valores culturales que defender, puede hacerse compatible la protección de ambos valores culturales.

Aun abandonando las justificaciones esencialistas, el conflicto es de solución difícil cuando se juzga que uno de los dos idiomas es el nacional y el otro no. Porque, aunque objeto y no sujeto de Derecho, el idioma priorizado con el atributo de nacional se convierte por

ello en valor superior al no priorizado y, en la composición de intereses en que consiste cualquier ordenamiento jurídico, ciertos intereses quedarán subordinados a los de defensa de los valores nacionales, de modo distinto a como habría ocurrido si el valor priorizado no hubiese sido calificado como nacional.

Sin duda el caso europeo más claro, consciente y programado, de afirmación de un idioma uniformizador por encima de los tradicionales es el del francés, en la época de la Revolución Francesa y en la que le siguió. La proclamación del francés como idioma nacional supuso una priorización cultural del mismo a costa de los demás. En el mismo sentido, pero sin el mismo grado de política cultural programada, se han ido consolidando otros idiomas de los Estados nacionales. Como en el momento actual la práctica dominante es la inversa —la revalorización del idioma diferenciador y su calificación como nacional— la priorización del idioma tradicional coincide generalmente con el menos hablado, lo que introduce un factor de presión cultural sobre la población. Las leyes de normalización del idioma minoritario pueden originar puntos de fricción entre los ciudadanos afectados y, muy en particular, en aquellos colectivos a los que el desconocimiento del idioma supone un desplazamiento total o parcial de sectores específicos del mercado de trabajo: Administración Pública o Educación.

¿Cuáles son las razones que llevan a priorizar una cultura, atribuyéndola sobre las otras la condición de nacional?

En unos casos la inercia del Estado. La identificación del Estado con la nación ha conducido a la priorización de la cultura del conjunto estatal, no sólo como cultura moderna de intercomunicación —lo que supondría una justificación práctica— sino además como cultura de la nación, lo que supone una justificación ideológica.

En otros casos, la proclamación ideológica de la esencia de la nación. Si la cultura se entiende como el Espíritu del pueblo, o si el idioma es el alma de la nación, tal salto ideológico le da justificación esencial sobre las otras culturas que, frente a ella, quedan relegadas.

En el caso de culturas minorizadas o tradicionales, a veces se piensa que no es eficaz su defensa si no se la prioriza como nacional. La condición de «nacional» no responde, por tanto, sólo a una jerarquía cultural, sino a la exigencia política de que no hay garantía de desarrollo cultural si no se percibe entre el pueblo y por las autoridades, a esa cultura, en la superior condición que le da el ser entendida como nacional.

Todavía un grado más en la exigencia política se da cuando la conclusión a la que se llega por los grupos nacionalistas es la de que

una cultura no podrá ser promocionada si no se consigue la autonomía política. Ya hemos visto cómo las reivindicaciones nacionalistas van en el sentido de la lucha por la afirmación cultural y la lucha por la autonomía. Pues bien, no es raro el caso en que la lucha por la afirmación cultural no se considera posible si no le precede la lucha por la autonomía.

El riesgo correspondiente a estas luchas culturales nacionales es el de que el exclusivismo nacionalista conduzca a la degradación de las otras culturas concurrentes y desfavorecidas por el hecho de no ser identificadas.

La legitimidad nacional

La legitimidad nacional consiste en la pretensión de que la nación sea la base que explique y justifique la legitimidad del poder. Del hecho de que haya comunidades culturales y de que se priorice a una de ellas como nacional, no se deduce necesariamente que el reconocimiento y la afirmación de tal comunidad deba ser la base del poder legítimo. Pero sí es cierto que, tendencialmente, el nacionalismo ha llevado a esta conclusión.

Según la idea que se tenga de la nación, la legitimidad nacional tendrá distinto soporte argumental. Para quienes mantienen una idea esencial de nación, la legitimidad nacional del poder consiste en atribuir a esos entes esenciales el derecho a la constitución del orden político.

Si la esencia nacional no es más que la mitificación de una comunidad social y cultural, a la que se prioriza atribuyéndole la condición de nacional, el principio de legitimidad atribuido a esa esencia —sea expresado como libertad nacional, derecho de autodeterminación o de cualquier otro modo— adolece de la misma incoherencia que tiene el concepto del que deriva. La atribución de consecuencias ético-políticas tan contundentes, como la pretensión de constituirse en Estado a una y no a otra de esas comunidades, es una simple conclusión dogmática; los que se sienten subjetivamente étnico-nacionales intentan justificar su reivindicación de sujeto colectivo de la autodeterminación nacional, camuflando tal reivindicación detrás de unas pretensiones esenciales del colectivo nacional. Pero del simple hecho de pertenecer a una nación no se deriva que, sólo por eso (esto es, por derecho de nación), esté legitimada la pretensión de legitimidad política.

Naturalmente que la defensa del principio de legitimidad nacional se sostiene también en otros argumentos, pero la referencia a los esenciales tiene una trascendencia que conviene subrayar. Si la nación es la lengua, la raza, la etnia, y si está en estos conceptos

esenciales la justificación del poder, no sirve para matizarlo observar que tal esencia nacional se habrá de manifestar a través de la voluntad de los nacionales. Porque, ¿cómo se enmarca la voluntad de los nacionales? O dicho de otro modo, ¿quién es el pueblo nacional? No vamos a insistir ahora en las odiosas derivaciones que han tenido estas doctrinas cuando los racismos han dominado en el Estado. Puede recordarse, más bien, la artificiosidad con que se construyen los límites del pueblo nacional desde la esencia de la nación, concebida como un dato previo. Recordemos a Treitschke, en la disputa franco-alemana sobre Alsacia: «Nosotros, alemanes, que conocemos Alemania y Francia, sabemos lo que conviene a los alsacianos mejor que esos mismos desgraciados... queremos, contra su voluntad, devolverles su propio ser». Es la misma tesis que hoy algunos esencialistas vascos manejan para deducir que la autodeterminación de los navarros debe ejercerse, no por los navarros sólo, sino por el conjunto del pueblo vasco, a cuya realidad esencial los navarros pertenecen.

A la incoherencia de la tesis esencialista de nación (carácter dogmático del principio de legitimidad nacional derivado de ella) cabe añadir su difícil justificación. Es, en efecto, particularmente grave su incompatibilidad con los otros elementos de justificación del poder político: orden, libertades, democracia y bien común. Aunque estos aspectos serán considerados en el momento en que nos refiramos a la legitimidad estatal, desde ahora conviene dejarlos señalados. El ídolo de la nación pretende romper el marco político dado e introduce de este modo un elemento de desorden; a la busca de la libertad nacional subordina las libertades individuales; confunde la voluntad popular con la voluntad nacional y somete al reconocimiento de la nación el desarrollo del bienestar y de justicia de los individuos. Son las objeciones que ya hace décadas planteaba Lord Acton y que Kedourie ha hecho suyas (2).

Por legitimidad nacional puede ser entendido algo muy distinto, ligado al concepto de nación como sociedad de ciudadanos. Si a la idea de nación, como esencia que mitifica a una comunidad cultural, se le oponía la idea de nación como participación de los ciudadanos en la sociedad y en el Estado, la legitimidad política de la nación se convierte en la legitimidad democrática. Esta concepción ha existido desde la Revolución Francesa y es elemento básico conformador del Estado nacional como Estado de ciudadanos. En el momento actual, sin embargo, los nacionalismos poco tienen que ver con esta construcción ideológica, que más bien se ha identificado con la construcción del Estado y con la fidelidad al mismo. Incluso en aquellos casos en los que parecería existir la posibilidad de dirigir la acción política, acentuando tal idea ciudadana de la nación, como ocurre en el caso de la lucha contra las dictaduras o en los movimientos anticoloniales de emancipación, la nación como política de liberación y de protagonismo de los ciudadanos se para-

peta tras una pantalla de exaltación de las esencias nacionales. Rizando el rizo, incluso aquellas naciones que en un momento han sido proclamadas como tales por ser los países de la libertad y de la democracia —tales serían las ideologías progresistas de la nación francesa o de la construcción de la nación en los Estados Unidos— han terminado por convertir en estandarte tales valores, hasta el punto de que por el hecho de pertenecer a las mismas sus nacionalistas tienden a creerse protegidos por el diploma de la libertad y de la democracia.

La legitimidad nacional se puede sostener también, sin recurrir como argumento básico a la esencia nacional, en lo democrático: la nación no sería entonces el fundamento del poder legítimo por ningún derecho propio, sino porque los ciudadanos libremente han priorizado una comunidad social y cultural, de entre aquéllas a las que pertenecen, y han expresado su voluntad de construir su comunidad política sobre ella. Esta argumentación se sitúa en una banda imprecisa entre las dos justificaciones anteriores. Como argumento sociopolítico se sostiene en una afirmación de la nación que puede oscilar desde una concepción de la misma como acto de voluntad —los ciudadanos proclaman como nación a la comunidad que quieren proclamar— hasta una concepción esencial —la nación es una esencia manifestada en el idioma, la raza, la etnia, la voluntad del pueblo—. Pero en todo caso, como argumento institucional, la legitimación democrática la dan los ciudadanos, manifestando la voluntad general: el poder legítimo es el que los ciudadanos eligen y lo que eligen es la nación. Formulado de esta manera está claro que si los que no comparten la idea nacional son minoría, por el hecho de que no subrayen como comunidad priorizada la que la mayoría subraya, o porque no acepten que la nación sea una realidad esencial, no han de dejar de aceptar el vigor democrático del argumento de la legitimidad del poder que la mayoría formula y que la minoría habría de aceptar, precisamente por ser minoría. Aunque razonen que la idea de nación que combaten es errónea o injusta, no por ello queda desmontado el argumento de la mayoría de que se trata de la voluntad general. Sólo mostrando la unilateralidad del argumento de la voluntad general puede discutirse el carácter absoluto del principio nacional de legitimidad del poder. Pero esto nos lleva al tema de la legitimidad estatal.

La legitimidad estatal

Las razones de la legitimidad del Estado se pueden agrupar en dos polos: sus propias virtudes o la voluntad de los ciudadanos. Los conflictos de legitimidad surgirán, con respecto del primer polo, cuando se trate de señalar quién es el que determina los criterios para juzgar la bondad de un poder; con respecto del segundo polo, cuando se trate de señalar cómo se expresa la voluntad popular. Y,

en última instancia, cuando se trate de establecer cómo un criterio y otro no son incompatibles sino que se eliminan entre sí.

La legitimidad del Estado, por razón de sus virtudes, se fundamenta bien en la utilidad bien en la ética política. La conservación del orden se sostiene en la utilidad; la defensa de las libertades y derechos fundamentales del ciudadano, en la ética política. No resulta tan claro decidir si el bien común o la óptima distribución de bienes y servicios se sostienen en la primera o en la segunda.

El punto de partida, desde luego unilateral, para tratar de la legitimidad del Estado, es el orden: un poder es legítimo porque garantiza el orden. Esta es la base del argumento de Hobbes, de cínica expresión antiutópica. El Estado existe como fuerza y ello supone, antes que nada, capacidad de implantación de su poder y de su orden; lo único que le pondría en cuestión, como fuerza, sería la capacidad de subversión colectiva. Por el contrario, la negación individual del orden estatal, sin capacidad efectiva de subversión, no tendría trascendencia. Pero en esta capacidad de imponer su fuerza y su orden radica un primer criterio de legitimidad. Porque el Estado evita el desorden y la violencia privada debe ser acatada como orden legítimo. Está claro que la norma no es de carácter ético sino pragmático: si quieres la paz y el orden debes aceptar la fuerza que los impone.

El segundo criterio de legitimidad del Estado, por razón de sus virtudes, tiene una base ética: Estado legítimo es el que tiende a garantizar los derechos y libertades individuales. Este es un objetivo de justificación independiente de los demás. En concreto eso significa que, aunque hoy la defensa de las libertades sea una pieza necesaria de un orden democrático, el argumento liberal (derechos individuales) no depende del argumento democrático (voluntad general). Pero, ¿en qué se sostiene la exigencia de los derechos individuales, como condición de legitimidad, aún contra una voluntad mayoritaria en contra? O, dicho de otro modo, ¿quién decide sobre lo que son las libertades individuales y su modo básico de garantizarlas? El consenso generalizado en estos principios éticos, adquirido desde la intuición de que la dignidad humana es un bien superior a la organización política, y de que de ahí nacen los derechos individuales, reconocidos como axiomas de la justificación política. Lo que Bloch llamaba derechos naturales del «paso erguido» del hombre.

Hay todavía otro criterio de legitimidad que hace referencia a las virtudes del Estado: el del bien común u óptima distribución de bienes y servicios. No es fácil determinar si se basa en la utilidad —se trata de establecer un orden aceptable— o en la ética —se trata de establecer una justicia social—. Probablemente participe de los dos criterios, pues no hay garantía de un orden estable sin que se acep-

ten criterios de justicia, ni tampoco puede pensarse en un sistema de derechos individuales sin que supere una proclamación de libertades formales. El problema de su justificación como principio autónomo de legitimidad surge cuando, colocándose como proyecto político más allá de la mera conservación de la paz social o del marco de las libertades se razona: ¿quién, salvo la voluntad general, tiene legitimidad para programar la óptima redistribución de bienes y valores o bien común? Con lo que este principio, que se sostiene impreciso entre utilidad y justicia, tiende a perder autonomía frente al de la voluntad general. Y, sin embargo, la respuesta a la pregunta contraria a la anterior —¿es legítimo el poder de una sociedad que quiere lo malo?— no siempre es sencilla: por ejemplo, cuando una sociedad política no está mínimamente organizada o cuando se perciben graves elementos de alienación (3).

Frente a los anteriores criterios de legitimidad del Estado, todos ellos sostenidos en sus virtudes, existe, pues, el que se sostiene en la voluntad de los ciudadanos, o principio democrático. Se sostiene, de modo análogo a como ocurre con el principio liberal, en la comprensión intuitiva de la libertad y de la igualdad de los hombres pero, a diferencia de lo que ocurre con el principio liberal, que afirma el ámbito de la persona frente al Estado, el democrático traslada la autonomía individual a la colectiva: poder legítimo será el que los ciudadanos decidan.

Los límites de este principio de legitimidad son los que hemos ido mencionando: la pragmática del Estado, como fuerza en un campo de relaciones de fuerza, nos llevará a colocar la paz interna (o internacional) como exigencia necesaria de orden; la ética del individuo nos llevará a afirmar que la autonomía individual debe respetarse aun sobre la voluntad mayoritaria en contra. Estos son los límites extrínsecos al principio de la voluntad general.

En cuanto a los límites intrínsecos son igualmente los que hemos mencionado: por una parte, el falseamiento de la misma voluntad, por obra del insuficiente desarrollo político del Estado; por otra, la introducción de factores de alienación que deforman la formación de esa voluntad. Esto nos lleva a eliminar el recurso a la voluntad general, como primordial elemento de legitimidad, sino a que, aun respetando esta vía, esto es, sin negar la legitimidad de origen de la mayoría, la minoría pueda alegar una mejor legitimidad de ejercicio cuando su modelo político sea más armónico, más solidario y más justo, aunque no pueda usurpar a la mayoría el ejercicio del poder.

La conclusión sobre la legitimidad del Estado es, por tanto, que no puede apelarse unilateralmente a un criterio de legitimidad sino que hay que armonizar todos ellos. Esta optimización de las cuatro variables es siempre un acto de prudencia política. McPherson (4)

se refiere a la necesidad de crear una sociedad participativa y no posesiva y esto parece que va en favor del desarrollo del criterio de voluntad general; no niega, sin embargo, que este criterio esté alterado por el hecho de que una sociedad de clases introduce la lucha ideológica como elemento de manejo social; más aún, apela al mero instinto de conservación de la paz como elemento legitimador del orden internacional. Habermas (5) parte de la denuncia de los déficits de legitimidad del Estado moderno, ante sus dificultades para, en tiempo de crisis, proponer un orden pacífico que además sea un modelo justo de redistribución de bienes y servicios, pero busca tras un sistema de intercomunicación la base del orden social. Se trata, en uno y otro caso, de la comprensión del Estado, como fuerza, pero como fuerza legítima, en virtud de la óptima combinación de todos sus principios de legitimidad.

Nación y Estado

Frente a los criterios de legitimidad del Estado se plantea, conflictivamente, la legitimidad nacional. Ahora bien, es radicalmente distinto que los argumentos se planteen desde la perspectiva de las esencias nacionales o de las voluntades de los nacionales. En el primer caso —derechos de la nación como raza, etnia, lengua o voluntad del pueblo— estamos ante una pretensión de legitimidad que se opone, centralmente, a la justificación democrática del poder político. En el segundo caso —derechos de los nacionales o expresión nacional de la voluntad ciudadana— es una forma particular del ejercicio de la voluntad popular.

El derecho a la expresión de la voluntad nacional, o derecho de autodeterminación, puede incluso pretenderse con independencia de la concepción esencialista o no de la nación. Se entiende que una idea de nación como comunidad voluntaria de ciudadanos solamente podrá expresar su voluntad política apelando al principio democrático de la mayoría; pero puede entenderse también que los que mantienen una idea de nación, como esencia, renuncien a formular sus reivindicaciones como derechos irrenunciables de tales esencias y acepten en cambio que la expresión política de sus pretensiones sea la democracia. La autodeterminación sería en tal caso un derecho de los ciudadanos, con independencia del contenido de la idea nacional.

Ocurre, sin embargo, que los derechos de los ciudadanos nacionales no son incondicionales, sino que deben ser entendidos dentro del complejo campo de la legitimidad del Estado. Incluso cuando se pretende sustituir el marco de un Estado determinado.

No puede olvidarse, en efecto, que, como realidades políticas establecidas, las naciones no son datos previos y sí lo son, en cam-

bio, los Estados. De la misma manera que ni Hobbes, ni Locke, ni básicamente Rousseau, intentaban señalar las condiciones de legitimidad de un Estado por constituir, sino del Estado que ya estaba constituido como poder, la pretensión nacional, cuando es conflictiva con la estatal, se enfrenta a la pretensión del Estado, como fuerza y como legalidad. Si pretende presentar un campo de legitimidad que niegue el estatal tendrá que presentar un modelo que sea más viable y que garantice la paz mejor que el Estado (primer principio de legitimidad); además, que garantice mejor los derechos y libertades individuales (segundo principio de legitimidad); además, que ofrezca un mejor modelo de orden armónico, solidario e integrado (tercer principio de legitimidad); finalmente, que sea el resultado de una toma de posición de una mayoría más significativa que la mayoría democrática del Estado (cuarto principio de legitimidad).

Aún pensando que, en relación con este último aspecto, el marco de la voluntad mayoritaria nacional pudiera ser resuelto sin conflicto (6), resulta fácil, en sociedades plurales y Estados democráticos, imaginar que la autodeterminación nacional puede tener una expresión legítima —entendida como viable, pacífica, liberal, armónica y solidaria—, normalmente buscando su armonía con la más amplia legitimidad estatal y no en conflicto con ella.

El conflicto entre ideología de la nación y del Estado democrático se reduce, con frecuencia, a la apreciación valorativa de la fidelidad estatal o de la nacional. Quien acepta un campo armónico de legitimidad entre Estado y nación no por ello se libra fácilmente de considerar como propio a un elemento y como ajeno al otro, más aún si liga también un sentimiento nacionalista en cualquiera de los dos polos. Estas fidelidades excluyentes no impiden la construcción de una legitimidad compleja nacional-estatal aunque sí es cierto que suponen una traba para el funcionamiento óptimo del sistema político.

Ponencia presentada al seminario «Socialismo y Nacionalismo» que, organizado por la Fundación Pablo Iglesias, tuvo lugar en Sigüenza el 25 y 26 de marzo de 1988.

(1) La nación como creación de los nacionalismos, y la distinción entre esencias y voluntades nacionales, han sido analizadas más en detalle en RECALDE, J. R., *La construcción de las naciones*. Siglo XXI, Madrid, 1982.

(2) Kedourie, E., *Nacionalismo*, Centro de Estudios Constitucionales, Madrid, 1985.

(3) No puede negarse la práctica de liberación que supuso en algunos casos el despotismo ilustrado ni, desde la perspectiva de Estados pluralistas social y políticamente consolidados, se puede despreciar la crítica marxista a la alienación que falsea la expresión de la voluntad popular. Formulemos un problema moral concreto: ¿hasta qué cuantía es legítimo que, amparándose en la voluntad popular actual, el Estado contraiga deuda pública que haya de pagar con sus impuestos la generación futura?

(4) McPherson, C. B., *La Teoría política del individualismo posesivo*, Barcelona, Fontanella, 1970, y *La democracia liberal y su época*, Alianza Editorial, Madrid, 1982.

(5) Habermas, J., *Problemas de legitimación en el capitalismo tardío*, Amorrortu, Buenos Aires, 1973.

(6) ¿Quién se autodetermina como colectivo, en el caso de un pueblo vasco no concretado por apelación a mitos esencialistas como la etnia: las personas concretas que se autodefinen como vascos, los súbditos de los tres territorios de Euskal Herria —Navarra, más País Vasco dentro de Francia, más Euskadi—, los súbditos de Euskadi, como Comunidad Autónoma dentro del sistema constitucional-estatal español, o bien cabrían consecuencias diferentes entre los tres territorios históricos de esta última Comunidad?



EL ESPECTRO DEL NACIONALISMO

Luciano PELLICANI

I.

Parafraseando la célebre frase con la cual se inicia el *Manifiesto comunista*, se podría decir que, al menos desde hace dos siglos, ronda un espectro por Europa e incluso por todo el mundo: el espectro del nacionalismo. La izquierda ha intentado exorcizarlo, sentenciando que los partidos «proletarios no tienen patria». Pero la historia del siglo XX ha desmentido regularmente esta sentencia, más semejante a un deseo que a un hecho comprobado. No sólo el nacionalismo se ha revelado como una de las grandes fuerzas espirituales de nuestro tiempo, sino que en el seno mismo de los partidos y de los movimientos de la izquierda, aun cuando éstos se proclamaban internacionalistas, se puede vislumbrar fácilmente un fondo nacionalista, más o menos sólido, más o menos intenso, más o menos consciente, pero siempre activo. Que la izquierda es, por definición, una fuerza política internacionalista está claro. Pero la definición que ella ha dado de sí misma, ¿ha correspondido siempre a la realidad? ¿No es acaso el nacionalismo la atmósfera espiritual dentro de la cual se han formado los diferentes pueblos europeos, una atmósfera de la cual nadie, comprendida la izquierda, se ha podido escapar? Los jacobinos, según se sabe, estaban animados por una visión mesiánica, y por tanto transnacional, de la revolución; ¿no combatieron, no obstante, en una guerra nacionalista, para defender no sólo la integridad del territorio francés, sino también los derechos franceses sobre la orilla izquierda del Rin? ¿Y

qué decir de la revelación que fue 1914 para los dirigentes socialdemócratas alemanes, cuando comprobaron que la base del SPD estaba invadida por un intenso sentimiento nacionalista? Y, para dar otro ejemplo, ¿qué fue la revolución maoísta sino una violenta reacción de la humillada nación china contra el imperialismo occidental y japonés?

Estos ejemplos indican que no sólo no se puede comprender la historia política de nuestro tiempo sin tener presente el formidable poder de movilización del nacionalismo, sino que el mismo nacionalismo ha tenido al menos dos caras: una agresiva e imperialista; la otra defensiva, que reivindica, frente a una potencia extranjera, el derecho a la autodeterminación. Naturalmente la izquierda ha considerado esta cara en términos positivos. Pero lo ha hecho a menudo con cierto embarazo. Cuando ha podido, la izquierda marxista-leninista, sobre todo, ha preferido asimilar las luchas nacionales por la autodeterminación a la lucha de clase. Y éste es un modo más de exorcizar el nacionalismo, de hacerlo desaparecer del campo de percepción utilizando un recurso terminológico.

La razón del embarazo de la izquierda frente al fenómeno racionalista está clara: la izquierda ha nacido internacionalista. Sus proyectos de sociedad, cualesquiera que sean en cada momento sus contenidos específicos, han tenido una *intentio* transnacional, un horizonte al menos europeo. Una izquierda encerrada en el ámbito de los problemas de una nación particular es una contradicción en los términos, ya que uno de los elementos constitutivos de la identidad sociocultural de la izquierda es, precisamente, el internacionalismo. Por otra parte, en la medida en que la izquierda ha nacido como crítica del capitalismo no podía dejar de ser internacionalista, aunque no sea más que porque el capitalismo es, en su propia esencia, internacionalista. Aun donde la izquierda ha aceptado convivir con el capitalismo, institucionalizando el llamado «compromiso socialdemócrata», no ha perdido del todo su vocación internacionalista. De ahí, vuelvo a repetirlo, el desagrado con el que siempre ha mirado el nacionalismo. Ha visto en él un obstáculo a su proyecto de sociedad. Por lo demás, la misma idea de lucha de clases poco se concilia con el nacionalismo, lo cual indica que, por debajo de los conflictos sociales, hay una fuerza espiritual que da unidad a la sociedad, que crea vínculos de solidaridad entre los explotadores y los explotados.

Por esto se ha dicho que en nuestra época, en cierto sentido, la «religión de la nación» ha sustituido a la «religión de Dios». En resumen: el nacionalismo como encargado de la función cohesiva cumplida en el pasado por las religiones positivas, como un mito unificador, allí donde la lucha de clases tiende a alimentar en los trabajadores lo que Georges Sorel llamaba «espíritu de escisión». Por lo demás, el nacionalismo ha impuesto con el tiempo, por así

decir, sus derechos, debilitando no poco la vocación internacionalista de la izquierda. Esta, en definitiva, es la situación en que hoy nos encontramos: la izquierda ha tratado de exorcizar al espectro del nacionalismo, pero no lo ha logrado; inclusive ha terminado por ser, al menos en parte, conquistada. Muy probablemente sus ambiciones eran excesivas: quería la evaporación del sentimiento nacional, la fusión comunitaria de todos los pueblos en una única gran familia. Un deseo noble pero también irremediabilmente utópico. Quizá moderando sus aspiraciones internacionalistas la izquierda puede encontrar un punto de equilibrio entre lo ideal y la realidad. ¿Y hasta qué punto es verdad que nacionalismo e internacionalismo sean recíprocamente incompatibles?

II.

Si echamos un vistazo a la parábola histórica de la civilización europea, no podemos evitar que nos impacte la coexistencia de dos tendencias de signo opuesto: por un lado, advertimos la propensión de los pueblos individuales a cultivar sus especificidades nacionales, a aislarse, a considerarse superiores o a pretender, sin más, imponer su propia forma de vida; por otro, advertimos asimismo la propensión a considerarse parte de una gran familia cultural: Europa. La comprobación de que existía una cultura transnacional en base a la cual todos los pueblos europeos se movían, hacía ya decir a Montesquieu que *l'Europe n'est qu'une nation composée de plusieurs*. Detrás del perfil de las naciones individuales, el autor del *Esprit des lois* advertía la figura de una supernación, una gran sociedad —la sociedad europea en la cual convivían luchando los unos contra los otros, aunque a la vez trabajando juntos en la construcción de una civilización común— ingleses y alemanes, franceses y españoles, italianos y polacos.

Pues bien: esta supernación no puede percibirse si se parte de la definición que Toynbee dio de la nación: una combinación de tribalismo y de democracia. La de Toynbee es una definición bastante discutible. Ante todo porque las naciones europeas preceden en siglos el advenimiento de la democracia liberal. En segundo lugar, porque ver en la nación una tribu significa evocar la idea de una sociedad cerrada en sí misma que considera positivamente sólo su tradición cultural y rechaza todo lo que le es extraño. Es muy probable que una nación así concebida no haya existido jamás en Europa. Ni siquiera cuando España entró, después de la guerra de los treinta años, en la etapa de la «tibetización» se apartó completamente de Europa; en todo caso, tal apartamiento duró algunas generaciones y finalmente España volvió a abrirse a Europa, a considerarse parte integrante de una civilización transnacional. Las naciones europeas, en suma, han estado siempre dominadas por una doble tendencia: la tendencia a encerrarse en sí mismas y la ten-

dencia a abrirse, a dialogar entre ellas en una concorde discordia. Con ello no quiero decir que cierta cuota de exclusivismo —a veces incluso de proporciones llamativas— no haya sido un rasgo típico del nacionalismo europeo. Ni tampoco quiero decir que tal exclusivismo no haya adquirido formas muy agresivas o en todo caso muy fastidiosas. «Cada nación —apuntaba Schopenhauer— se burla de las otras, y todas tienen razón». Y cien años más tarde, Ortega y Gasset observaba que, vista desde cierta perspectiva, toda forma de nacionalismo resultaba irritante y hasta ridícula y obtusa.

Pero cada nación —y éste me parece el punto decisivo para entender la particular naturaleza del nacionalismo europeo— ha sabido cultivar el antídoto a su tribalismo. Este antídoto ha sido la conciencia —desarrollada por lo menos en el nivel de las *élites* intelectuales, políticas y económicas— de formar parte de una comunidad más amplia, de nutrirse, por así decir, de los mismos valores, de vivir en un espacio cultural común. Las *élites* europeas han cultivado siempre cierto cosmopolitismo, siempre se han sentido en la obligación de dialogar entre sí, siempre han tenido la conciencia de trabajar en una empresa común. Las ciencias, el derecho, la filosofía, las artes, se han desarrollado en un clima de cooperación a través de continuos intercambios. Tales intercambios no se han producido sólo en el plano teórico; se han realizado también en el plano práctico. Si echamos un vistazo al marco institucional en el cual viven hoy los pueblos de Europa occidental, descubrimos que presenta una homogeneidad en algunos aspectos sorprendente. El parlamento, los partidos, los sindicatos, la administración pública, el mercado, las universidades, más allá de las especificidades nacionales, parecen haber sido forjados por una única mente. Son, en realidad, el resultado de una serie de experiencias históricas comunes a todos los pueblos europeos, el resultado de una evolución larga y agitada. Sabían lo que decían aquellos emigrados checoslovacos cuando, en 1968, al dejar su país, afirmaron: «Finalmente volvemos a casa». La casa era la Europa de la libertad, de la cultura iluminista y, por qué no, del socialismo democrático: una casa construida a través de muchos conflictos, muchas tragedias, muchos experimentos no siempre exitosos. Europa, en suma, al menos a partir del Renacimiento, ha sido siempre una realidad. Europa, precisamente, como una gran familia histórica hecha de muchas naciones, orgullosas y apagadas a su identidad, pero a la vez más o menos partícipes de la misma tradición cultural, de la misma civilización.

III.

Hay otra razón por la cual la definición de Toynbee está descaminada. Como nos lo ha hecho ver Ortega y Gasset, las naciones europeas han sido ante todo y sobre todo una superación del tribalismo o, al menos, del regionalismo. Es contrario a la realidad histórica

imaginar, por dar sólo un ejemplo, que la nación española preexistiese a la constitución del Estado español. Todo lo contrario: antes de que el Estado español existiese, no tenía literalmente sentido hablar de pueblo español. Existían los castellanos, los catalanes, los vascos, que, a su vez, eran el producto de numerosos procesos de unificación de unidades más pequeñas. Las naciones no son un producto natural de la evolución histórica, sino de las construcciones político-culturales de algún modo artificiales. Han sido fabricadas en el laboratorio de la historia a través de experimentos y conflictos. Como tales, las naciones no son nunca una realidad acabada, sino algo que debe ser siempre una realidad *in fieri*, siempre inacabada, siempre por hacerse. Son, por decirlo con Ernest Renan, plebiscitos cotidianos. Dicho de otra manera, un Estado nacional es un cóctel de pueblos y de lenguas, un sistema compuesto de subsistemas que se mantienen unidos por la fuerza, por la tradición y sobre todo por un sentimiento casi místico de pertenencia. Cuando tal sentimiento de pertenencia se debilita, entonces sí reaparece el tribalismo, la tendencia de los elementos singulares a replegarse sobre sí mismos o a separarse de los otros, sin más, para vivir autárquicamente.

Así las cosas, puede decirse que el *Nation-building* y el *State-building* han sido dos grandes procesos de destrribalización o, al menos, de desregionalización. Han abierto nuevos horizontes, creado vínculos nuevos y más amplios de solidaridad. ¿Qué ha sido la formación del Estado nacional italiano sino la superación del regionalismo y la expresión de una solidaridad que trascendía el localismo?

Es interesante notar, además, que el *Nation-building* y el *State-building* no han aniquilado las especificidades regionales, sino que las han inscrito en un sistema más amplio: han demostrado que era posible crear vínculos de solidaridad en gran escala, vínculos que, partiendo de la ciudad, ascendían hacia la nación pasando por el nivel regional. Y puesto que, como ya he dicho, raramente ha disminuido cierta cuota de solidaridad transnacional, al menos en el nivel de las *élites*, sugiero representar a Europa como un sistema de cajas chinas: cada caja está contenida en una caja mayor; a su vez, cada subcultura —urbana, regional o nacional—, aun formando parte de una realidad más amplia, ha mantenido sus especificidades históricas. Si partimos de la idea durkheimiana de sociedad —la convivencia estable de individuos bajo la presión normativa de modos de pensar, de sentir y de actuar, institucionalizados— podemos decir sin duda que la sociedad europea no es un ideal —o, por lo menos, no es sólo un ideal— sino una realidad. De esta realidad, el primer elemento constitutivo es la conciencia europea. Esta se ha formado en oposición a otras entidades históricas, ajenas no tanto geográficamente como culturalmente a Europa. Como el Yo de Fichte se advierte a sí mismo al encontrarse con el no-Yo, así

Europa ha tomado conciencia de su identidad confrontándose polémicamente con las civilizaciones afroasiáticas, y de tal confrontación ha tomado conciencia de que encarna, frente al despotismo oriental, el principio de libertad. Esta conciencia ha operado como fuerza unificadora aun cuando —lo que ocurría a menudo— los pueblos europeos estaban en guerra entre sí.

En definitiva, el nacionalismo europeo ha sido siempre, o casi siempre, un nacionalismo atenuado. Con una importante y única excepción: el nacionalismo fascista y nazi que, además de ser de una agresividad fuera de lo común, ha intentado amputar los lazos que mantenían unidos a los pueblos europeos, creando un tipo de Estado basado en la negación radical y total de la tradición cultural de Occidente. No es casual que Filippo Turati haya definido el fascismo como la anti-Europa, es decir, como lo que estaba destruyendo la unidad cultural europea. Turati se sentía a la vez italiano y europeo; sentía que estaba ligado al destino del propio país pero también al de Europa; sentía que el nacionalismo fascista tendía a destruir aquella red de relaciones, de instituciones, de experiencias, de propósitos y de valores fatigosamente creada a través de los siglos y gracias a la cual el sentimiento nacional podía ser vivido en armonía con el sentimiento europeo. Por lo demás, ¿no había dicho Edward Gibbon aproximadamente que en cualquier rincón de Europa en que se encontrase un europeo no podía jamás sentirse extraño?

IV.

La imagen que he bosquejado de las relaciones entre nacionalismos europeos y unidad europea no pretende exorcizar el problema que la izquierda tiene por delante; pretende simplemente sugerir que ha habido, y continúa habiendo, un modo de cultivar el sentimiento nacional que no está en oposición con la conciencia de la unidad europea. Lamentablemente ese modo no es el predominante. Es verdad que ha desaparecido el nacionalismo agresivo, exclusivista e imperialista, que encontró en el fascismo su expresión más virulenta y peligrosa. Pero ha surgido una forma de nacionalismo implosivo, un nacionalismo animado por la convicción implícita de que la nación es una realidad autosuficiente, semejante a la mónada de Leibnitz. Pues bien: la función que la izquierda tiene por delante es reactivar su vocación europea y hacer que se vuelva dominante en todos los países la idea de que la nación, como forma de vida histórica, es ya obsoleta, privada de futuro; es una realidad que debe ascender hacia una organización transnacional de Europa. Crear los Estados Unidos de Europa —esto es lo que la izquierda debe hacer que se imponga en la conciencia popular— no significa aniquilar las especificidades nacionales y ni siquiera las regionales; significa crear, en el interior del espacio común (econó-

mico y cultural) ya existente, una confederación de unidades que aúnen voluntariamente sus reservas materiales, organizativas y humanas, para crear un sistema político supranacional.

Luciano Pellicani

La empresa —la construcción de los Estados Unidos de Europa—, aun no siendo de fácil realización, no es del todo irreal, si se tienen presentes los muchos lazos que unen a los pueblos europeos. Pero hace falta ajustar las cuentas con el nacionalismo implosivo, el cual no es sólo un obstáculo, sino también una enfermedad que ha afectado a los mismos partidos de la izquierda europea. Tales partidos deben, ante todo, volver a pensar la construcción de la democracia socialista en términos transnacionales, como una obra en la cual deben trabajar de común acuerdo, en un clima de cooperación y de confianza mutua. Este es el necesario punto de partida. De otro modo, la izquierda pierde su razón de ser, se desune y se transforma en una fuerza política sin impulso propio en cuanto está privada de un gran proyecto capaz de generar el entusiasmo y la participación popular.

Como conclusión, el nacionalismo implosivo puede ser combatido única y exclusivamente si los partidos de la Internacional Socialista se proponen como objetivo común la creación de un instrumento decisorio transnacional. En este sentido, lleva toda la razón *Leviatán* cuando escribe que el futuro de cada país europeo en particular, depende de su capacidad de federarse para situarse, unido a los otros, como un interlocutor autónomo, «capaz de atenuar los impulsos hegemónicos de los Estados Unidos, sin aceptar por ello una 'finlandización', una subordinación con respecto a la Unión Soviética. Esto exige no sólo una toma de posición exteriormente pacifista de los diferentes Estados europeos, sino también una opción europea global a favor de la autonomía en materia de seguridad colectiva para Europa occidental». De no ser así no habrá nada que pueda impedir la declinación de las naciones europeas, su degradación, por otra parte ya en estado avanzado, a entidades históricas insignificantes, en un contexto internacional caracterizado por el dominio de colosales potencias político-militares como son los Estados Unidos y la Unión Soviética.

Traducción de Mario Merlino

Comunicación presentada al seminario «Socialismo y Nacionalismo» que, organizado por la Fundación Pablo Iglesias, tuvo lugar en Sigüenza el 25 y 26 de marzo de 1988.

E D I T O R I A L

PABLO IGLESIAS



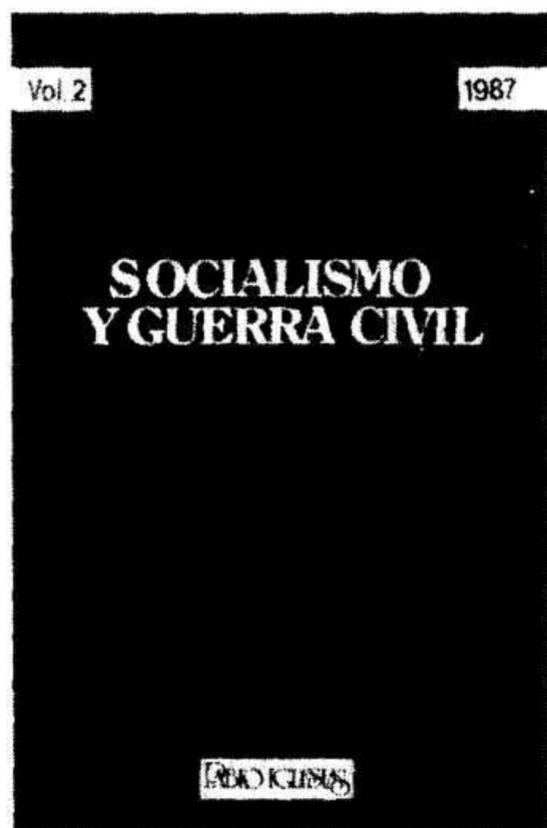
ANALES DE HISTORIA
(Vol. 1 - 1986)
EL SOCIALISMO EN ESPAÑA
Editorial Pablo Iglesias
466 págs. 1.850 ptas.

El socialismo en España Desde la fundación del PSOE hasta 1975

S. Castillo, P. Ribas, M. Ralle, M. Esteban de Vega,
A. Robles Egea, F. Castro de Isidro, M. Suárez Cortina,
L. Arranz Notario, E. Moral Sandoval, M. Pérez Ledesma,
S. Juliá, M. Bizcarrondo, M. Tuñón de Lara,
H. Heine, A. Mateos López, P. Preston, E. Díaz,
A. Martín Nájera, M. Vázquez Cea, R. Casado González

Coordinado por
Santos Juliá

Estos Anales de Historia recogerán las ponencias que se presenten cada año en el Seminario de Historia organizado, con carácter permanente, por la Fundación Pablo Iglesias. En el primer volumen, dedicado a la historia política y los debates ideológicos del socialismo español, colaboran investigadores procedentes de diversos horizontes teóricos y metodológicos y pertenecientes a varias generaciones universitarias. El resultado es un volumen que ofrece, por vez primera, una historia crítica y rigurosa del socialismo español desde los orígenes del Partido Obrero hasta el fin de la dictadura franquista.



ANALES DE HISTORIA
(Vol. 2 - 1987)
SOCIALISMO Y GUERRA CIVIL
Editorial Pablo Iglesias
395 págs. 1.700 ptas.

Socialismo y guerra civil

F. Claudín, G. Cardona, R. Salas,
F. Fernández Bastarreche, J. Casanova, A. Elorza,
G. Jackson, A. Viñas, M. Tuñón de Lara,
F. García de Cortázar, Manuel Montero, J. Tusell,
A. de Miguel, J.-C. Mainer, J. Marichal, S. Juliá,
L. Garrido, E. Ucelay da Cal, H. Graham, M. Ortuño

Coordinado por
Santos Juliá

Este segundo volumen de los Anales de Historia está dedicado monográficamente a la guerra civil y los socialistas. Que se haya podido reflexionar sobre la guerra civil con vigor histórico y en presencia de un público que en su mayoría no la conoció, es signo de que la sociedad española de hoy está lejos de los conflictos de toda índole que determinaron aquella lucha por las armas. Discutir políticamente de ellas será la mejor manera de que quede definitivamente asentada en esa serena forma de la presencia del pasado que es el recuerdo.

PEDIDOS: EDITORIAL PABLO IGLESIAS
Monte Esquinza, 30, 2.º
28010 MADRID

**FORMA
DE PAGO:**

Talón bancario
o giro postal



ANALISIS Y DEBATE

4

LA EUROPA DEL ESTE Y CENTRAL, LA IZQUIERDA EUROPEO-OCCIDENTAL Y LA CUESTION ALEMANA

Tilman FICHTER

«Los prerequisites para la reunificación (de Alemania) sólo pueden conseguirse de acuerdo con la Unión Soviética. No pueden obtenerse en Berlín oriental, contra la Unión Soviética ni tampoco sin contar con ella».

(Egon Bahr, en una conferencia dictada en la *Evangelische Akademie* de Tutzing el 15 de junio de 1963)

«Somos a la vez patriotas e internacionalistas. Porque, quiérase o no admitir, lo cierto es que la nación es una realidad que no va a desaparecer en un futuro previsible».

(Willy Brandt, el 28 de enero de 1971 en el *Bundestag* de la República Federal de Alemania).

I.

Cuarenta años después del final de la Segunda Guerra Mundial aumentan en la población de Europa oriental y en Centroeuropa las resistencias contra la política del «status quo». Pese a la invasión de Checoslovaquia por tropas de los países del Pacto de Varsovia en agosto de 1968, surgió en Polonia, a principios de la década de los años ochenta, primero el «Comité para la auto-defensa de la sociedad» (KOR) y después el movimiento sindical independiente «Solidaridad». Pese a que el 13 de diciembre fue decretada para todo el país la ley marcial, una gran parte de la población sigue negándose a obedecer y no se resigna a la engañosa paz de los cementerios. La principal oposición continúa viva en Polonia y continúa rechazando virtualmente toda colaboración con el Gobierno militar instaurado allí.

Recientemente, también en la República Democrática Alemana, una parte de la generación joven ensayó una protesta antiautoritaria contra el aparato estatal del SED (Partido Socialista Unificado de Alemania). Wolf Bierman, incómodo cantautor, había cantado hace ya once años, antes de que le fuera retirada la ciudadanía de la RDA: «y ¡desde ya!». Lo que desde entonces ha venido imperando en la RDA durante los pasados diez años es un sistema político autoritario, y de vez en cuando hubo también esa pizca de consumismo que el socialismo real consiente. El aparato funcional del SED y el Servicio de Seguridad del Estado (policía política) siguen —lo mismo ahora que antes— sin poder fiarse de la población. Para ello, la actividad de grupos autónomos como la «Iglesia de base», evangélica, la «Iniciativa independiente de los Derechos de Paz y Humanos», los diversos grupos ecologistas, así como las actividades artísticas no estatales radicales en el «Brenzlauer Berg», Leipzig, Dresden y Karl-Marx-Stadt, constituyen graves perturbaciones del orden establecido.

Unos cien defensores de los derechos humanos en la RDA fueron detenidos a finales de enero de 1988 y parte de ellos expulsados del país después de haber participado espontáneamente en una manifestación en homenaje a Rosa Luxemburgo y Karl Liebknecht, pero con eslóganes propios. Su crimen consistió en haber recordado esta frase de Rosa: «La libertad no es sino la libertad del que piensa de otro modo».

También en Praga, el país del «bravo soldado Schwejk», el pueblo sigue viviendo entre la tutela, la mentalidad consumista y la *Carta 77*. Una muchedumbre juvenil alternativa existe más allá de la organización oficial de la juventud y nuevos grupos de música *pop* y *rock* cantan en antros situados en sótanos las prohibidas canciones de Josef Simon. Frecuentemente, el propio aparato del Estado ya no acierta a saber qué versos de este autor han sido vetados por aquél y cuáles quedan todavía por prohibir. En su poesía dedicada *A las aves*

veinteañeras de la desesperanza se lee, por ejemplo: «No somos sino el asfalto para la pista de carreras de los otros». Un talante escéptico muy parecido queda también reflejado en las poesías de *Stephan Krawczyk*, cantante *agitprop* de la RDA adscrito al movimiento pacifista: «Hay tantos que pitan sus velas con un color que hiede a basura. ¡A cuántos les quebraron ya las alas para que, inertes, los vientos los empujara a la ventura! Así, pues, hay tristeza y rabia entre un creciente número de jóvenes en Berlín, Praga, Budapest, Varsovia y Riga, que también para sus pueblos exigen que, por fin, lleguen la apertura (*glasnost*) y la reestructuración (*perestroika*). Si la policía política de la RDA continúa actuando como hasta ahora, tarde o temprano tendrá que enfrentarse con una rebelión de la juventud que abarcará a todo el territorio del país. Rudi Dutschke, de Luckenwalde, manda saludos.

II.

Los partidos socialdemócratas y socialistas de Europa occidental reaccionan ante estas protestas en la Europa del Este y central con una actitud más o menos expectante y, frecuentemente, incluso apaciguadora. En las centrales de estos partidos se teme por la coexistencia duradera y la política de desarme. (La abierta simpatía de la izquierda francesa por el movimiento sindical polaco «Solidaridad» fue más bien la excepción que confirma la regla. Pero también en París hace mucho que el silencio se cierne sobre «Solidaridad», Adam Michnik y Lech Walesa). Por otro lado, especialmente el partido socialista alemán (SPD) se ha empeñado durante estos últimos años con su política dialogante en prestigiar internacionalmente a la RDA. De esta actitud nace para la socialdemocracia alemana una particular responsabilidad frente a la población de la RDA. Si acaso, la política de paz y coexistencia entre los Estados, por un lado, y la solidaridad con los movimientos que defienden los derechos ciudadanos en la Europa del Este y central, por otro, no debieran excluirse mutuamente. Ahora bien, en la vida cotidiana política, los socialdemócratas y socialistas europeo-occidentales tratan demasiado a menudo con deferencia a los aparatos de partido y Estado para no herir susceptibilidades.

III.

Un fantasma se agita por Europa occidental: la pesadilla de un nuevo «Rapallo» entre los dos Estados fragmentarios alemanes y la URSS. Contra esto previenen dos intelectuales húngaros: Ferenc Fehér y Agnes Heller. En su informe de investigación sobre el tema *Crisis en los sistemas de tipo soviético* manifiestan los siguientes temores: «El principal beneficiario de un nuevo «Rapallo» sólo podría ser la conservadora *nomenklatura* soviética que se afana por mante-

ner intacto el actual sistema de opresión sin las más mínimas reformas internas». Para ella, la eventual creación de una confederación alemana equivaldría a mi «cordón sanitario» en torno a Europa oriental. Por otra parte, una reunificación de los alemanes significaría también —en palabras de Fehér y Heller— el fin del «sistema surgido en Yalta y Potsdam consistente en la repartición del mundo entre las superpotencias en zonas de influencia consensuadas». Este estado de cosas fue señalado ya en 1979 por Horst Ehmke, miembro de la ejecutiva del SPD, cuando escribía: «La división de Alemania tiene su dialéctica europea propia al ser considerada por los pueblos vecinos como algo que coincide con sus intereses, si bien es pagada por aquellos, sobre todo por los pueblos de la Europa del Este, al alto precio de la división de Europa».

Peter Brandt y Günter Minnerup, en agosto de 1987, en las páginas de la revista *Neue Gesellschaft/Frankfurter Hefte*, han tratado de encontrar una respuesta a esos temores e interrogantes perfectamente justificados en Europa oriental: «El temor a la reunificación de Alemania no ha dejado de estar presente también en la Europa del Este, haciendo sentir durante mucho tiempo sus efectos disciplinantes. Fueron especialmente los polacos quienes —confrontados con las pretensiones germano-occidentales de recuperar los antiguos territorios alemanes del Este, formuladas en ocasiones vehementemente— tenían fundadas razones para temer un eventual revanchismo alemán. Las experiencias históricas estaban profundamente enraizadas... Sólo la vivencia de los repetidos bloqueos de cualesquiera reformas internas por la Unión Soviética, combinada con el palidecer, por razones generacionales, de los recuerdos de la guerra, así como el tono más conciliador y las ofertas constructivas de Bonn desde la nueva *Ostpolitik*, generaron en Europa oriental una mayor disposición para pensar radicalmente más allá del «status quo», si bien a veces con connotaciones nacionalistas... que, ya por esta razón, resultaban inquietantes para la izquierda occidental. Pero, ¿qué otras perspectivas le quedan a la oposición europeo-oriental mientras toda conmoción interna en Polonia, Checoslovaquia, Hungría o la RDA amenaza con provocar la intervención soviética?». Como quiere que sigue siendo una cuestión controvertida la de hasta qué punto Gorbachov tiene realmente intenciones de exportar su *perestroika* y *glasnot* a la Europa del Este y central, a la larga, eventualmente, sólo la «finlandización» de la Europa del Este y central en el marco de una confederación alemana que abarcaría a ambos bloques podría constituir la alternativa factible del *status quo*.

Ahora bien: este margen de libertad político-interno para los pueblos de la Europa del Este, sólo lo admitirá la URSS a condición de que los dos Estados alemanes o, en su caso, una confederación alemana garanticen a largo plazo los intereses de seguridad de aquélla. Sin embargo, a semejante construcción, que comprendería a ele-

mentos de ambos bloques, habría que incorporar también los intereses económicos y de política de seguridad de Estados Unidos.

Tilman Fichter

Dicho esto, ¿cuál podría ser la configuración concreta de una confederación alemana? Ambos Estados parciales alemanes deben su origen al conflicto de poder y sistemas de las potencias vencedoras que, con la división de Alemania, hicieron caso omiso del convenio de Potsdam. Los dos Estados fragmentarios quedaron investidos de la pretensión constitucional de representar cada uno la totalidad de Alemania. (Tanto en la Constitución de la República Federal como en las pertinentes sentencias del Tribunal Constitucional de la misma —sobre todo en la del 31 de julio de 1973 referente al Tratado de Bases— se mantiene el imperativo constitucional de la unidad nacional. En la RDA, la pretensión de unidad figuraba en las Constituciones de 1949 y 1968 hasta la revisión de esta última en 1974). Estas realidades políticas fueron tomadas en consideración por primera vez a comienzos de la década de los años setenta por la *Ostpolitik* social-liberal. Se trataba de mantener la cohesión de la nación dentro de la situación de división de la misma en dos Estados, así como de consolidar en la actual constelación de los poderes políticos cuanto aquéllos tienen de común. El tratado cuatripartito sobre Berlín, de 1971, documenta el carácter provisional de esta constelación, mientras que el Tratado de Bases intra-alemán, de 1972, fijaba los prerequisites para la normalización de las relaciones. Su fundamento es el mutuo reconocimiento de la autonomía de los Estados fragmentarios alemanes, si bien, reconociendo las divergentes concepciones de la República Federal y de la RDA en lo concerniente a la «cuestión nacional», definiendo los ámbitos de la cooperación política entre aquellos en el interés de la paz y del desarrollo de relaciones de buena vecindad.

Por tanto, el objetivo de una eventual Confederación Alemana tendría que ser alcanzar una máxima aproximación en todos los ámbitos de la política, teniendo en cuenta que las estructuras sociales, económicas y políticas en los dos Estados alemanes son distintas. Los órganos de la Confederación tendrían que tener una composición paritaria y todos sus miembros gozar de inmunidad en los dos Estados alemanes integrantes de aquella. Habría una sola nacionalidad alemana: la de ciudadano de la Confederación. (También cabría concebir sendas nacionalidades correspondientes a uno y otro de los dos Estados, frente a las cuales la nacionalidad confederativa gozaría de rango superior).

Ingeborg Drewitz, Herbert Ammon, Peter Brandt y Theodor Schweisfurth esbozaron, en la primavera de 1985, los posibles detalles de una Constitución de estas características. Se sobreentiende que un eventual tratado de paz se concebiría como elemento integrante de un nuevo y real orden de paz europea.

IV.

La guerra de agresión desencadenada por Hitler contra Francia es uno de los motivos, y ciertamente no el menor, de que nuestro vecino del otro lado del Rin sienta desde 1940 un trauma nacional colectivo ante la idea de una Alemania que hubiera recobrado su anterior rescisión de fuerza. Estos sentimientos, comprensibles históricamente, se contradicen con el punto de vista francés, reiterado una y otra vez, de que todo lo que «supera a Yalta» es bueno. Por ello, no es de admirar que —en su discurso pronunciado ante el parlamento alemán con motivo del aniversario del tratado que sellaba la cooperación germano-francesa— el presidente Mitterrand se lamentará, con razón, de la falta de un sistema de seguridad colectiva para Europa. Por eso, y con miras a una paz europea, la izquierda alemana y francesa deberían discutir entre sí con franqueza sus respectivas experiencias, modos de pensar e intereses nacionales tan diferentes entre sí.

Sin embargo, de la difícil relación entre alemanes y franceses, también forma parte la paradoja de que hay miembros de la clase política de París que, si bien aborrecen profundamente a la vencida Alemania nazi, glorifican, no obstante, a algunos intelectuales nacionalsocialistas. Así, por ejemplo, Martín *Heidegger*, precursor del pensamiento utópico étnico-nacionalista, aún es conmemorado por sus adeptos galos cuando en Alemania hacía ya mucho tiempo que se pensaba en voz alta sobre el discurso que pronunció el catedrático de filosofía de Friburgo en 1933 al asumir el rectorado de aquella universidad. A partir de 1945, Heidegger se convirtió en un «filósofo francés» según palabras de Christian Jambet. Fueron discípulos suyos, entre otro, Jean-Paul Sartre, Maurice Merleau-Ponty, Jean Beaufrets, Henri Birault, René Char, Jacques Derrida, Jean-Pierre Faye, Pierre Bourdieu y Michel Foucault. La influencia heideggeriana se hacía sentir tanto entre los marxistas adogmáticos en torno a Lucien Goldmann, como entre los marxistas liberal-conservadores al estilo de Joseph Rovin. Que este coqueteo con el filósofo friburgués custodio del ser no era ningún desliz casual lo prueba la popularidad de Arno Breker y Ernst Jünger alrededor de la Torre Eiffel.

V.

Cuarenta años después del final de la Segunda Guerra Mundial se va perfilando un cambio en la relación entre Estados Unidos y Europa; así, recientemente, lo ha puesto de manifiesto una vez más el llamado Informe del Pentágono preparado por expertos americanos (entre ellos Fred Ikle, secretario de Estado del Departamento de Defensa, y los ex consejeros de seguridad Kissinger y Brzezinski, así como Albert Wohlstetter). La Administración estadounidense

propugna en la actualidad abiertamente el desacoplamiento nuclear de Europa occidental. En el caso de un conflicto localizado, se pretende evitar una guerra nuclear generalizada.

Por otra parte, Gorbachov está movilizando todas las reservas de fuerza de la sociedad (soviética) poniéndolas al servicio de su «revolución desde arriba». Mantener en territorio de la RDA a 400.000 hombres del ejército rojo resulta, a medio plazo, con mucho, excesivamente costoso para la URSS. Al igual que su modelo, Lenin, Gorbachov buscará probablemente, tarde o temprano, un arreglo germano-soviético o bien entre Europa occidental y la URSS, si bien hay que suponer que está interesado sobre todo en la cooperación industrial con una «boyante Europa capitalista», en palabras de Peter Brandt y Günter Minnerup, que formulan su conclusión en estos términos: «La transformación socialista de Europa occidental sigue siendo, de un modo u otro, la tarea de las izquierdas europeo-occidentales, una tarea en que —y es lo menos que puede decirse— no podrán contar con el apoyo incondicional de los dirigentes del Kremlin, quienes, por intereses propios, tanto económicos como políticos, probablemente preferirían tener a mano regímenes capitalistas dispuestos a cooperar con ellos».

VI.

La mayoría de los alemanes se han negado rotundamente, después de 1945, a analizar y, en su caso, superar las causas del nacionalsocialismo. En cambio, cada vez más habitantes de la República Federal de Alemania se han resignado paulatinamente a la división de su país. El cínico concepto de Adenauer se resumía finalmente en esta fórmula: división en lugar de un nuevo orden social.

En cambio, el presidente del SPD, Kurt Schumacher, permanecía aferrado a la idea de elecciones legislativas directas panalemanas; pretendía de este modo —con la ayuda de la clase obrera industrial en los tradicionales baluartes socialistas de Sajonia, Turingia, Berlín y Brandenburgo— obtener la mayoría absoluta en la primera representación popular constituyente de la posguerra con el fin de imponer así una remodelación de los órdenes económico y social regidos por el capital privado. En lugar de esto, los cristiano-demócratas marginaron el pasado más reciente «oscuro» y apostaron por el prooccidentalismo, el rearme y el capitalismo.

El SPD fue materialmente barrido por esta evolución de las cosas y perdía, sucesivamente, todas las elecciones al parlamento. La mayoría de los alemanes querían olvidar Auschwitz y Stalingrado, borrar las huellas de la contienda, reconstruir sus hogares y entregarse al consumismo, como si nada hubiera pasado. Y así,

después de una nueva y grave derrota electoral del SPD en los comicios legislativos de 1957, la dirección del partido se esforzó —según escribe el sociólogo adogmático Theo Pirker— por una «integración programática» de la socialdemocracia en la «ideología dominante del Gobierno federal», y fue éste el camino que terminó conduciendo al SPD a *Bad Godesberg*, a la llamada Gran Coalición gubernamental de los años 1966 a 1969 y a la posterior aceptación del prooccidentalismo.

Desde entonces, la carga de la más reciente historia de Alemania se reparte de modo desfavorable para la población de la RDA. Según palabras de Heinrich August Winkler, los ciudadanos de la República Federal dejaron atrás la «sombra de Bismarck» y se instalaron —más allá de Bebel y Schumacher— en su ampliada provincia renana. Ahora bien, una política de paz y coexistencia que margina, como meta no realizable hoy por hoy, el principio de autodeterminación en el centro y Este europeos, corre peligro de ser determinada a la postre ya sólo por el pensamiento geopolítico-estratégico.

VII.

A partir de 1967/68 fue cristalizando en la República Federal una cultura antiautoritaria de protesta: los movimientos estudiantiles, feministas, pacifistas y de protesta contra las centrales nucleares, así como varias iniciativas ciudadanas, los grupos de ayuda al Tercer Mundo, el llamado escenario alternativo, el movimiento de los *squatters*, amén de un largo etcétera. Las vicisitudes de estos movimientos que actuaron sobre las masas, modificaron sensiblemente la cultura política en la República Federal. Pero también en la RDA surgió, a partir de 1976, una viva cultura de protesta, cuyo lema Stephan Krawczyk formularía en estos términos: «La vida es breve. / Ya no queda tiempo para abdicaciones». Este credo inspira tanto a los movimientos contestatarios del Este como a los de Occidente: reformas sociales, libertad personal y sensualidad expresiva, aquí y ahora. Ello motiva la esperanza de que el pensamiento antiautoritario en el Este y Oeste vaya a generalizarse de tal modo que las tradiciones autoritarias dejen de representar en Alemania una característica dominante de su cultura política. En tal caso, es seguro que se encontrarían también vías y cauces para revisar la cuestión alemana.

Traducción de Francisco de A. Caballero

Comunicación presentada al Seminario «Socialismo y Nacionalismo» que, organizado por la Fundación Pablo Iglesias, tuvo lugar en Sigüenza el 25 y 26 de marzo de 1988.



ENTREVISTA CON HANS-JOCHEN VOGEL

Manuel MORAL

En todas partes se habla de una crisis del socialismo, ¿se trata de una nueva expresión de moda, que también gustan de utilizar intelectuales de izquierda, o nos hallamos aquí realmente ante una evolución histórica? ¿Se ha hecho obsoleto el socialismo en la moderna sociedad de consumo y bienestar?

Existe la tesis del fin del siglo socialdemócrata. Correcto en esta tesis es que en no pocos países europeos, entre ellos también en la República Federal de Alemania, pudieron imponerse formas modernas del Estado social contra la encarnizada resistencia de los conservadores. La tesis pasa por alto, no obstante, lo que aún queda por hacer y que lo conseguido no está en absoluto definitivamente asegurado. Precisamente la actual mayoría gobernante en la

República Federal pone en peligro logros del Estado social impuestos en el transcurso de décadas. Sin una socialdemocracia fuerte el Estado social se deformaría rápidamente. La lista de los daños ya es larga. Me limitaré a indicar como ejemplo la debilitación de los sindicatos o la introducción de contratos temporales sin ninguna clase de protección contra el despido.

O tome usted por ejemplo la igualdad de oportunidades en el sector de la formación, una de las reivindicaciones más antiguas de los socialdemócratas. Ha sido sin duda una muestra de política social reaccionaria el que esta coalición (en Bonn), ya desde los primeros meses desde que entró en funciones en octubre de 1982, haya eliminado la ayuda económica a los alumnos

con la consecuencia de que desde entonces vuelve a disminuir el número de hijos de trabajadores que asisten a escuelas que preparan para continuar estudios.

Pero si miramos el mapa político de Europa, observamos que los neoconservadores y neoliberales, con contadas excepciones, llevan en todos los países la batuta. A veces podría incluso obtenerse la impresión de que los conservadores están en camino de convertirse en «una socialdemocracia mejor»; así, por ejemplo, si se escucha al secretario general de la CDU, Heiner Geissler. ¿No es así?

Usted tiene que haber entendido mal al señor Geissler. Yo comprendo su interés táctico por querer escabullirse del desconcierto conservador mediante una apertura al centro. Cuando los democristianos que gobiernan en Bonn se ven cada vez más forzados a asumir políticas socialdemócratas (por ejemplo en los campos de la cooperación internacional, de la ecología y la economía), nosotros no podemos tener nada en contra.

Sin embargo, en diametral oposición a las metas de los socialdemócratas, desde hace algunos años el Estado social se halla sometido a los ataques de la crítica, y ciertamente no sólo desde la derecha. Los neoconservadores exigen que el Estado se retire en toda la línea de importantes sectores de su responsabilidad económica y social, para volver a dejar la evolución social solamente a merced del juego de las fuerzas privadas. En el campo de los Alternativos, incluso dentro de las filas del Partido Verde, se viene exigiendo, con el concepto inspirado en la tradición anarquista de una llamada democracia de base, un desmontaje de la organización y las competencias del «Estado central». Detrás de esto se esconde la vieja utopía de una sociedad que se administra autónomamente sin la ingerencia del poder estatal. La situación en que se hallan los intereses

de los neoconservadores hace comprensible su crítica contra el Estado social. Pero los Alternativos deberían reflexionar más profundamente sobre si un Estado debilitado en sus competencias, concebido predominantemente como poder descentralizado de decisión de los respectivos sectores de la población directamente afectados, podrá seguir atendiendo a sus propias exigencias esenciales, verbigracia en los ámbitos de protección al medio ambiente, de política energética o de planificación del tráfico.

Otra expresión de moda es la del neoliberalismo. ¿Vivimos hoy «en la época neoliberal», en la que ya no son efectivas las recetas tradicionales de la socialdemocracia? Se suele leer que los nuevos tiempos de la revolución de la alta tecnología, de las sofisticadas técnicas de la comunicación y del veloz cambio social, causado por todas estas innovaciones, ha convertido en una reliquia histórica al viejo socialismo. ¿Es que el pensamiento socialdemócrata (que ya tiene tras de sí una historia centenaria), las experiencias del movimiento obrero, no tienen ya nada que decir para el futuro que se abre ante nosotros?

Al contrario. Las innovaciones tecnológicas provocan modificaciones en la organización del trabajo que, si se abandonase este proceso en manos de los intereses del capital, contaría con pocos ganadores y con muchos perdedores. El mercado es ciego ante el medio ambiente y ante los costes sociales. Sin embargo, las nuevas posibilidades técnicas deberían beneficiar a todos. Nosotros no queremos impedir el progreso técnico, sino extraer de él el mayor provecho posible para todos.

El movimiento obrero ha reconocido hoy que el proceso económico, al igual que el proceso tecnológico, necesita control no sólo desde puntos de vista sociales, sino también ecológicos. De lo contrario, avanzará rápidamente la destrucción del medio ambiente, lo cual conducirá a una reduc-

ción inaceptable de nuestra calidad de vida. A este principio lo denominó yo con el término «Principio del Estado Natural» (*Naturstaat*).

Creo que uno de los conocimientos más preocupantes obtenidos en nuestros días es que el poder técnico de los hombres ha aumentado a un ritmo al que no pueden acoplarse nuestras capacidades intelectuales para juzgar lo que estamos poniendo ahí en movimiento, y al que sobre todo no pueden acompañarse nuestras fuerzas éticas y morales para dominar dicho proceso. Casi nunca nos hemos planteado la pregunta: ¿Queremos realmente lo que ahora se hace posible? Alguien lo ha reducido a la expresiva fórmula: «No podemos ya imaginarnos lo que fabricamos». Este rezagamiento de nuestras facultades éticas, intelectuales y espirituales alberga en sí grandes peligros. Sólo diré como palabras clave: energía atómica y tecnología genética.

También asistimos a otro proceso que preocupa al socialismo democrático. Un proceso que parte precisamente de los conservadores que en otros tiempos casi habían sacralizado al Estado. Me refiero a la actitud que se va generalizando de desestatalización, de «consunción» del Estado, de lo que Peter Glotz llama «el deshuesamiento del Estado». ¿Qué fines persigue esta actitud?

Los neoconservadores en Europa occidental tienen que admitir el reproche de haber recaído en la mentalidad estatalista del capitalismo temprano. Llama la atención que en la actualidad sigan siendo válidos los argumentos que a la sazón adujo contra ellos uno de los fundadores del SPD, Ferdinand Lasalle.

La crítica de Lasalle se dirige contra un liberalismo que, según dice polémicamente agudizando, propagaba la idea del «Estado-Sereno», que quería reducir al Estado al papel de un mero guardián de las

reglas de juego en la lucha de todos contra todos. Lasalle señaló que tal idea del Estado solamente sería compaginable con las exigencias de libertad e igualdad propagadas por la propia burguesía liberal, supuesto que, conforme escribía, «todos nosotros fuésemos igual de fuertes, igual de listos, igual de cultos e igual de ricos». Y proseguía: «Pero como no lo somos ni lo podemos ser, este pensamiento es insuficiente y, por lo tanto, en sus consecuencias conduce necesariamente a una profunda inmoralidad. Pues tiene como resultado que el más fuerte, el más listo, el más rico explote al más débil y se lo meta en el bolsillo».

Existe una cierta contradicción si algunos, como por ejemplo el ministro federal de Economía Bangemann, afirman constantemente que nuestra moderna sociedad padece «demasiado Estado» y exigen que se desregule, que se flexibilicen muchas cosas, en especial en el sector social; por ejemplo, que no se permita tanto a los sindicatos (en definitiva quieren más libertad social y económica frente al Estado). Pero, por otra parte, otros, como el señor Strauss, cuyo partido, al igual que los demoliberales del FDP, forma parte de la coalición gubernamental en Bonn, exigen cada vez más Estado, es decir, más Estado policíaco, leyes más duras. ¿Existe aquí algún nexo lógico?

Entretanto se ha generalizado la idea de que también la supervaloración de las posibilidades de actuación del Estado puede inducir a engaño. Para los socialdemócratas no cabe duda y éste es también el punto de partida de nuestra actual discusión en torno a un nuevo programa de principios, de que la ecuación «lo que la sociedad no pueda conseguir a partir de sí misma lo podrá realizar el Estado» es tan errónea como la vieja ecuación liberal de que el Estado mínimo sea el garante máximo de la libertad. Para algunos de los problemas de nueva génesis, entre los que se incluyen de manera muy especial asimismo el aseguramiento del medio ambiente,

la planificación del tráfico y otros muchos son imprescindibles competencias adicionales, en muchos puntos incluso supranacionales, «central-estatales». En otros sectores pueden surgir soluciones más bien desde la propia sociedad. El Estado las puede favorecer, pero no sustituir.

El SPD en la oposición está pasando a ser también un modelo para otros partidos socialistas de Europa. Para algunos socialistas españoles que observan una actitud crítica frente a la política del PSOE, el SPD de hoy se hallaría más a la izquierda que el PSOE. ¿Cómo se explica usted este fenómeno? ¿Se ha desarrollado el SPD desde los tiempos del canciller federal Helmut Schmidt hacia la izquierda? Pero usted está considerado por muchos como un hombre del centro dentro de la socialdemocracia alemana.

Divergencias de opinión dentro del partido apenas transcurren todavía en la línea mencionada por usted, que ciertamente en otros tiempos desempeñó un papel. Seguimos reconociendo, como siempre, el gran mérito analítico de Carlos Marx y su método sociológico para iluminar hechos sociales. Pero sus conclusiones centrales de Filosofía de la Historia y de la Sociedad han sido sustituidas por la afirmación de los valores fundamentales, por el reconocimiento de diversas fundamentaciones de tales valores básicos y la definición del socialismo democrático como una tarea permanente. Esto es suscrito por la totalidad del partido.

Desde 1982, el SPD no ha evolucionado hacia la izquierda o hacia la derecha, sino hacia adelante. Se ha abierto programáticamente a las nuevas exigencias y cogniciones y discute tareas del futuro. Disponemos ahora de una plataforma sobre la que en cualquier momento podríamos volver a asumir los asuntos del gobierno.

Energía nuclear: un tema en el que los socialistas españoles en el Gobierno no en-

tienden muy bien al SPD. Hay quienes opinan que el SPD, con su consigna de «aparse de la energía nuclear», ha dado incomprendiblemente marcha atrás, adelantando en esta materia al PSOE por la izquierda. ¿Nos podría explicar usted que quiere decir eso de «aparse de la energía nuclear»? ¿Quiere el SPD paralizar todas las centrales nucleares en cuanto consiga una mayoría?

Es conocido que el SPD solamente considera aceptable, con sentido de la responsabilidad, la utilización de la fuerza atómica para la producción de energía por un período de transición y que el partido, para dar el paso a un abastecimiento seguro de energía sin la fuerza nuclear, ha desarrollado un proyecto detallado. La Comunidad Europea tendrá que seguir coexistiendo bastante tiempo con el hecho de que acerca del aprovechamiento de la energía atómica existe disparidad de opiniones. Pese a las interesantes tendencias evolutivas en nuestra dirección —así, recientemente, a raíz de un plebiscito en Italia o también en una decisión del grupo socialista en el Parlamento Europeo— nosotros, los socialdemócratas, no podemos esperar un asentimiento general a la convicción de que al final habrá un adiós general a la energía nuclear. Pero sí podemos contar con que se apoye la exigencia de que mientras sigamos manejando la energía atómica, se declaren obligatoriamente vinculantes las normas más altas de seguridad. La polémica en torno a los límites de carga y el escándalo en relación con la Transnuklear han puesto una vez más de manifiesto que el aprovechamiento de la energía atómica conlleva riesgos incalculables, no sólo por la cuestión no solucionada de la polución, sino también porque no pueden descartarse fallos humanos.

El NO a una determinada tecnología lo vinculamos nosotros a un SI al progreso técnico real y filántropo, pues tenemos plena confianza en nuestros biólogos, en

nuestros ingenieros y en nuestros especialistas. Les creemos capaces de aprovechar las enormes reservas de ahorro energético y de poder desarrollar formas alternativas de la producción de energía, si concentramos las fuerzas hacia ese objetivo. Cuando se trata de nuevas tecnologías militares, cuando están en candelero armas o sistemas cada vez más mortíferos, todo es posible. En tal caso, ningún gasto es lo suficientemente elevado, ningún plazo es demasiado corto. Desde la primera fisión del átomo conseguida en 1938, hasta que se arrojó la primera bomba atómica, tan sólo transcurrieron siete años. Nos negamos sencillamente a aceptar que la Ciencia y la Técnica solamente pueden ser capaces de tales esfuerzos en el sector militar, pero no en el civil.

Otra palabra-clave: seguridad común: ¿Qué sentido tiene para el SPD este concepto?

El desarrollo tecnológico de las armas nos ha puesto de manifiesto, en primer lugar en Alemania, que no existe una seguridad que pueda ser conseguida armándose contra un adversario. No existe una respuesta con sentido a cohetes atómicos que pueden alcanzarnos en un minuto y destruirnos totalmente. Nuestra seguridad es la seguridad del otro; existe solamente conjuntamente con él y no contra él. Por eso queremos un sistema consensuado de tratados, de acuerdos que reduzcan las amenazas, profundice la cooperación pacífica y posibilite la disputa ideológica sin el peligro de una guerra. Los acuerdos entre Gorbachov y Reagan han dado impulso a esta política.

Para el SPD, la firme inserción en la Alianza Atlántica es la condición previa para nuestra libertad y para la seguridad común, así como la garantía para la República Federal de Alemania. Pero dentro del SPD se escucha a menudo, según medios solventes, la tesis de que la OTAN ha de ser más europeí-

zada. ¿Quiere esto decir más distancia con respecto a Estados Unidos?».

Pienso en lo que Kennedy dijo ya a principios de los años sesenta, es decir que ha de ser fortalecido el pilar europeo de esta Alianza. Y pienso en que 320 millones de europeos no pueden a la larga vivir con el hecho de que las superpotencias negocien y decidan sobre su destino, sobre el destino de los europeos, sin que los europeos participen en estas negociaciones con una intensidad correlativa a su peso.

Pero también pienso que los europeos no pueden a la larga descargar sus problemas y preocupaciones ante la puerta de los norteamericanos, sino que, en correspondencia con su potencia y también con su peso económico, tendrá que tomar en sus manos, en mayor medida que hasta ahora, sus propios asuntos. La concordancia básica con los Estados Unidos no se verá afectada por ello.

¿Qué opina usted de la brigada mixta franco-germana y del Consejo de Defensa? ¿Son pasos auténticos hacia la seguridad común como la concibe el SPD, o incluso pasos hacia la «europeización de Europa» exigida por muchos políticos del SPD?

Ambas medidas tienen más bien el carácter de «modelos mentales», en los que se ponen de manifiesto las cuestiones propiamente dichas. Por ejemplo, la cuestión en qué estructura de mando deberá ser integrada la brigada mixta y qué competencias tendrá el Consejo de Defensa.

En el seno del SPD se escucha también, en relación con la llamada «Discusión en torno a Mitteleuropa», es decir la Europa del Este propiamente dicha, la exigencia de que se lance una segunda *ostpolitik*. ¿Qué características deberá tener esta segunda política hacia el Este? ¿No practica ya Kohl esa segunda *ostpolitik*?

El Canciller Federal tiene siempre dificultades para saltar con su partido a trenes que están en marcha. Nos ha atribulado que hasta el último momento hayan sido formuladas objeciones por la República Federal contra la solución doble cero en el sector de los misiles de mediano alcance. Afortunadamente, ahora hemos secundado lo que fue decidido en Washington y en Moscú. Una segunda fase de la política de distensión, como la pensamos nosotros, hubiese emprendido hace tiempo iniciativas propias en el sector de los cohetes de corto alcance o en el sector convencional. Reagan y Gorbachov se han tomado mutuamente la palabra. Nosotros no deberíamos asistir a este diálogo sólo como espectadores.

Gorbachov necesita con su política de reformas éxitos para la política interna y económica, que solamente puede conseguir si atenúa las cargas armamentistas. Y también Estados Unidos ha llegado al límite de lo financiable. Si aprovechamos ahora lo propicio del momento podríamos hacer posibles cosas que todos nosotros creíamos impensables no hace aún mucho tiempo.

En España no se abrigan recelos ni miedos a causa de la llamada «cuestión alemana». Para el ciudadano de a pie sería la cosa más natural del mundo que ambas partes de Alemania se reunificaran un día. ¿Considera usted posible la reunificación de Alemania, o la cree, por el contrario, algo peligroso?

Para nosotros no hace mucho tiempo que todavía el muro y las alambradas eran totalmente impenetrables. La política de distensión de Willy Brandt y de Helmut Schmidt, que tampoco pudieron hacer volver atrás a sus adversarios, ha puesto, entre tanto, muchas cosas en movimiento. No obstante, en territorio alemán existen dos Estados con distintos sistemas sociales. Este es el resultado de la segunda guerra mundial y esta situación no podrá modificarse en un futuro previsible. Pero hemos

de hacer más permeables las fronteras y ahondar y multiplicar los contactos humanos. Y hemos de conservar la comunidad histórica, lingüística y sentimental de las personas en ambos Estados alemanes, y de esta manera mantener los elementos que se unen en el concepto de Nación.

Condición previa para el éxito de esta política es reconocer a la RDA como Estado, tratar con ella sobre la base de la igualdad de derechos y aceptar los hechos territoriales en Europa. En vista de la vinculación de ambos Estados a distintas alianzas, de la contrapuesta disparidad de sus sistemas sociales y de la no concordancia en diversas cuestiones fundamentales, como, por ejemplo, en la cuestión de la ciudadanía, es preciso paciencia y constancia en la política de Alemania. La República Federal no puede plantear únicamente exigencias a la RDA, sino que ha de tener también en cuenta los intereses de este Estado y saber calibrar sus posibilidades de realización. Sólo así, en un toma y daca, en la compensación de los intereses, es posible progresar. Las ulteriores respuestas las da la Historia.

También es significativo en este contexto el documento, elaborado por miembros de la Comisión de Valores Fundamentales del SPD y representantes de la Academia de Ciencias Sociales en el Comité Central del SED, denominado «Disputa de las Ideologías y la Seguridad Común». Ofrece puntos de arranque para una competición pacífica de los sistemas, cuyas diferencias y contraposiciones no pueden, por supuesto, ser totalmente borradas. Progresos en todas las direcciones imaginables solamente pueden ser obtenidos por este camino.

El SPD quiere darse un nuevo Programa de Principios. Ya tenemos el «Proyecto de Irsee». ¿Por qué no sigue ya siendo actual el «Programa de Godesberg»? ¿Qué es hoy obsoleto o equivocado en él?

Después de treinta años es lógico reconocer que entonces se había visto como perspectiva práctica. Nadie quiere cambiar los valores fundamentales del socialismo democrático o arrojar por la borda el carácter del SPD como «*Volkspartei*». Pero se espera de nosotros que vayamos por delante en la solución de los grandes problemas y que tengamos la fuerza para defender soluciones que todavía no son aceptadas por amplias mayorías. Así, hemos impuesto el principio del Estado social contra una encarnizada resistencia. Ahora, en nuestro nuevo programa de principios, hemos de hacer plausible que no sólo se trata del control social, sino también del control ecológico del proceso económico y tecnológico. Que hemos de emparejar al principio del Estado social el principio —no se me ocurre otra expresión más apropiada— del «Estado Natural», es decir, que la Naturaleza ha de ser protegida en razón de sí misma como base vital para la pervivencia de la Humanidad.

Peter Glotz, en sus escritos, lucha por una nueva izquierda europea. Esta sugerencia ha hallado un eco muy positivo en el PSOE. El Partido Socialista Obrero Español quiere contribuir efectivamente a la creación de un Partido Socialista Federal Europeo, es decir, una especie de federación de los partidos socialistas y socialdemócratas de Europa. ¿Qué opina usted de esta idea y de su viabilidad?

Nosotros, los socialdemócratas somos europeos por nuestra tradición, por nuestros conocimientos y experiencias en dos guerras mundiales y las dictaduras a la sazón. Para nosotros Europa es la perspectiva para el progreso, para la seguridad y para la paz. Después de treinta años de trabajo conjunto en la obra de unificación de Europa sabemos que nuestro futuro depende de si la Comunidad consigue salir airoso de los nuevos desafíos. ¿Es Europa susceptible de modernizarse? ¿Está en condiciones de definir nuevas metas y caminos para la cooperación y para defenderlos con credibilidad, y conseguirá reconciliar los diversos intereses de las regiones? Si lo logra, Europa occidental puede pervivir en la multiplicidad de sus pueblos, regiones, culturas y lenguas.

El SPD aboga por una cooperación más estrecha entre los partidos socialistas y socialdemócratas de Europa en todas las cuestiones concretas de nuestra sociedad. Una fusión o federación de los partidos, sea de la índole que fuere, en un solo partido, la considero prematura. Mientras que las elecciones, que en los países europeos deciden sobre el poder y la formación de los gobiernos, sean celebradas y decididas a nivel nacional, los partidos de cualquier tendencia política han de reservarse un cierto margen nacional y dedicarse a asuntos nacionales.

CUADERNOS HISPANOAMERICANOS

Núm. 446/47 - Agosto-septiembre 87

Homenaje a
Pedro Laín Entralgo

con una obra teatral inédita de Laín Entralgo
y colaboraciones de

José Luis Abellán, Agustín Albarracín Teulón, Elvira
Arquiola, Emilio Balaguer, Donald W. Bleznick,
Antonio Buero Vallejo, Pilar Concejo, Rodrigo Fierro,
Luis García Ballester, Domingo García Sabell, Diego
Gracia, Elena Hernández Sandoica, Carlos Landa,
José María López Piñero, José Alberto Mainetti,
Marià Manent, Blas Matamoro, Franco Meregalli,
Fernanda Monasterio, Luis Montiel, Antonio Orozco
Acquaviva, José Luis Peset, Armando Roa, Francisco
Rodríguez Adrados, Amancio Sabugo Abril,
Heinrich Schipperges, Antonio Tovar y Mariano Yela

Un volumen de 496 páginas. P.V.P.: 1.500 pesetas.



LIBROS

EL SOCIALISMO POSIBLE

Miguel PORTA PERALES

Alec NOVE,
La economía del socialismo factible
Editorial Pablo Iglesias y
Siglo XXI
Madrid, 1987

Ludolfo Paramio, en un excelente artículo aparecido en el número 29/30 de esta revista, afirmaba que «dejar de creer en un *socialismo científico* no implica abandonar la creencia en un socialismo previsible, razonablemente *factible*». Y esta es, obviamente, la gran cuestión con la que hoy ha de lidiar el socialismo: la construcción de un socialismo factible, la construcción de un socialismo posible. Y es que el socialismo así llamado «científico», y/o las diversas elucubraciones teóricas que han tomado cuerpo (*sic*) en su nombre, sirven para muy poco, se confunden con la literatura (de hecho forman ya parte de un «género» literario, el utópico-romántico-profético. La construcción de un socialismo posible, esa es, pues, la gran apuesta —y la asignatura pendiente— que hoy se le plantea al socialismo. *La economía del socialismo factible*, de Alec Nove, es un libro que, precisamente, nos brinda unas ideas que pueden ser muy útiles para orientar a aquellas personas e instituciones (léase partidos socialistas) que se plantean el objetivo del socialismo democrático.

El propósito de Alec Nove (ruso afincado en Escocia, profesor de Economía en la Universidad de Glasgow, y una de las máximas autoridades en el tema de las sociedades de tipo soviético) queda perfectamente claro en el prefacio del libro: «mi objetivo —dice Nove— es explorar lo que podría ser un tipo de socialismo factible, realizable, que pudiera conseguirse en el curso de la vida de un niño ya concebido». Y «explorar lo que *podría ser* un tipo de socialismo factible» equivale a plantearse cuestiones como las siguientes: ¿qué puede esperarse de aquellas ideas —de aquella teoría— que Marx nos ofreció? ¿Cuál puede ser la alternativa al «socialismo científico» de que habló Marx hace más de cien años? ¿Cuál es el balance de las llamadas sociedades de «socialismo real»? ¿Podemos esperar/aprender alguna cosa de dichas sociedades? ¿Qué tipo de socialismo podría ser imaginado (y construido)? ¿Podría este socialismo funcionar con una eficacia razonable y satisfacer las necesidades de los ciudadanos? Estas son, en resumen, las cuestiones que se plantea —y nos plantea— Alec Nove.

La economía del socialismo factible es, a la vez, un trabajo crítico y programático. Crítico, porque si lo que se quiere es ofrecer ideas para un socialismo posible es de todo punto necesario separar el grano de la paja, es decir, es de todo punto necesario someter a crítica todas aquellas ideas vagas, confusas y erróneas (así como aquellas realidades, digamos, «degeneradas») que sólo sirven para despistar al navegante. Y trabajo programático, decíamos, porque Alec Nove va más allá de la crítica y nos ofrece las líneas esenciales de lo que podría ser un socialismo posible, creíble y deseable. Vayamos por partes.

En su vertiente crítica el libro de Nove critica fundamentalmente un par de cuestiones: algunos aspectos concretos de la teoría marxista y la realidad (realidades) del «socialismo real». Por lo que hace a la teoría marxista, nuestro autor pone en solfa algunas de las ideas que la vulgata marxista (es decir, aquel paleomarxismo acrítico que profesa determinada gente) ha tenido a bien (o a mal) canonizar. En efecto, Nove evidencia la poca consistencia de la economía marxista (la de Marx y Engels), a la que califica de «irrelevante», «errónea» y «engañosa»; demuestra el carácter retórico de expresiones típicamente marxistas como «superación de la división

del trabajo», «construcción del hombre nuevo», «gobierno de los trabajadores», etc.: Marx, en fin, fue un pensador de primer orden (cosa que Nove no niega), pero ocurre que «por grande que fuera también podía equivocarse alguna que otra vez». Y lo que es absolutamente ilícito es pensar con unas ideas y conceptos que ya han sido falseados por la realidad.

Frente a la quiebra de muchos de los elementos clave de la teoría marxista, ¿qué hacer? Nuestro autor es rotundo. No se trata de interpretar/reinterpretar indefinidamente los textos sagrados para «limar» sus errores e insuficiencias, sino que se trata de ir más allá de estos textos para —precisamente al modo marxista— transformarlos. De lo contrario no se estaría sino calcando el modo de hacer de los economistas neoliberales que, refugiándose en un mundo de abstracciones matemáticas y fórmulas, construyen un país que nunca existió: el del equilibrio general. Pues bien, los economistas (y teóricos) marxistas y/o socialistas, afirma Nove, no deberían refugiarse en el equivalente «socialista» de este país que ni existe ni existió. Así de claro.

Hablando de un país que nunca existió (o de un sistema social que nunca existió), Alec Nove critica duramente las sociedades de tipo soviético o de «socialis-

mo real». Después de analizar la planificación, los salarios, el papel de los sindicatos, la estructura de clases, etc., Nove llega a la conclusión de que el sistema soviético si se caracteriza por algo es por el despotismo, la ineficacia, la dominación, el despilfarro y la farsa. «La inflexibilidad, la ineficacia, la alienación humana y la naturaleza no representativa de la autoridad forman parte —dice Nove— de este conjunto tan poco atractivo». ¿Incurre nuestro autor en la conocida práctica del liquidacionismo? No es este el caso, pues Nove reconoce el carácter pionero de la URSS y las dificultades contra las que ha tenido que luchar. Pero debería ser posible, afirma Nove, «que el socialismo presentase un rostro mucho más humano y aceptable».

Si el sistema soviético no sale muy bien parado, mejor opinión le merecen a Nove algunos de los diversos «modelos de reforma» que se han ensayado. Así, el «socialismo de mercado» húngaro, pese a las incoherencias en su aplicación, es valorado de forma positiva. Otro tanto ocurre con la autogestión yugoslava que, a pesar de sus contradicciones, es un punto de referencia del que se puede aprender mucho. El modelo polaco, en cambio, es visto como una «catástrofe» que ha tenido la dudosa virtud de hacer explotar el malestar

social que se respira en las sociedades de la Europa oriental. Un modelo, el polaco, que hace confluír una política de inversiones, precios y rentas «excepcionalmente errónea que habría acabado con el mejor programa para reformar el mecanismo económico». Por lo que respecta a China, Nove repasa brevemente las reformas en curso (fortalecimiento de los mecanismos de mercado, suavización de controles agrícolas, «economía individual, etc.) del proceso de descolectivización china.

La economía del socialismo factible, ya lo hemos dicho más arriba, no se agota en la crítica, sino que propone una «reforma permanente» y un programa de «socialismo factible». ¿Cuáles son las características gemelas más destacadas de esta reforma, este programa y esta sociedad que se nos propone? Las siguientes: democracia multipartidista; predominio de la propiedad estatal, social y cooperativa, y ausencia de toda propiedad privada a gran escala de los medios de producción; planificación consciente; dirección central limitada; preferencia por la pequeña escala; libertad de elegir la naturaleza del empleo; admisión de cierto grado de desigualdad material; no abolición total de la distinción entre gobernantes y gobernados.

¿Es esto —mercado, com-

petencia, democracia «burguesa»— socialismo? Estas, obviamente, la pregunta que muchos se plantearán. A quien esto plantee se le podría responder con preguntas semejantes a las siguientes: ¿cuál es su programa? ¿Cuál es su modelo? ¿Es factible? ¿Es creíble? ¿Es deseable? Y es que es muy fácil vender revolucionarismo y criticar lo posible tildándolo de socialdemocratismo (y, entre paréntesis, lo auténticamente crítico no es criticar a la socialdemocracia *per se* por definición, sino criticar el hecho de que muchas veces no se cumplan o se rebajen en exceso las propuestas socialdemocráticas). ¿Es —repetimos— socialista la propuesta de Nove? Si no nos dejamos encantar y/o deslumbrar por el supuesto significado de determinadas palabras (¿quién, por ejemplo, puede decir qué es socialismo?) no es difícil concluir que el programa que diseña Nove reúne algunas de las características de lo que razonablemente puede llegar a ser una sociedad socialista. En efecto, y como afirma nuestro autor, el «socialismo factible» que se nos propone tiene ciertas virtudes nada despreciables: ofrece a la gente mayores posibilidades de ejercer una influencia sobre sus propias vidas y condiciones de trabajo; reduce el riesgo de desempleo y de conflicto; proporciona estímulo a la inicia-

tiva y a la innovación; garantiza cierta atención a la calidad de vida; proporciona el marco institucional para una vida tolerable y tolerante, etc.

¿Que el programa de Nove peca a veces de indefinición? ¿Que en todo caso es un «socialismo» de transición a una sociedad socialista «superior»? ¿Que no queda muy claro el modo y manera de llevar a cabo esa transición? ¿Que es un socialismo que acepta la existencia de cierto grado de desigualdad? ¿Que alguien no comprende cómo hacer compatible el mercado y cierta propiedad privada de medios de producción con el socialismo? ¿Que cómo conjugar interés personal con interés general en una sociedad en la que coexisten diversas formas de propiedad y de organización de la producción? Todas estas preguntas, y otras que se podrían plantear, quedan abiertas. Al fin y al cabo, el propio Nove declara que su trabajo está «a medio hacer», que no es «definitivo», y nos invita a la discusión. Pero nadie negará —como el propio autor afirma— que este programa «nada perfecto» y «nada óptimo» es bastante más decente que la realidad que hoy existe y que las «alternativas» que hoy se nos plantean. Alec Nove espera que sus ideas «sean criticadas»; también sería interesante que alguien intentara llevarlas a la práctica.

NOSTALGICOS Y ARREPENTIDOS

Antonio SANTESMASES

Raimon OBIOLS,
Los futuros imperfectos
Plaza y Janés,
Barcelona, 1987

Raimon Obiols, en un momento en que el «libro político» no goza de buena prensa, ha decidido publicar un conjunto de reflexiones sumamente interesantes acerca de algunos de los temas que preocupan hoy a la izquierda. La primera consideración formal que hay que realizar es que no estamos ante un conjunto de artículos, conferencias y entrevistas reunidas posteriormente en libro. Obiols ha escrito un ensayo donde va analizando problemas muy diversos (desde la transición política española hasta la crisis del socialismo europeo, pasando por la decadencia de las estructuras estatales y la magnitud de la revolución informática, con la pretensión de inscribir, en esta época de ebullición de las informaciones y congelación de las estructuras, un proyecto en la historia.

Antes de comentar los análisis de Obiols digamos algo de su pretensión y de la caracterización de la época en que nos ha tocado vivir. Obiols abomina de la riqueza «cientificista» que creía influir en aquello que aún no está escrito, de construir un futuro concreto entre los muchos futuros posibles. Obiols abomina de la riqueza «cientifista» que creía conocer a la perfección las leyes de la historia y que pensaba estar en posesión de un saber que permitía prever con exactitud las eta-

pas y el fin del progreso histórico. El mecanicismo y el determinismo han sido a menudo buenos compañeros del dogmatismo y del totalitarismo y, por ello, hace bien Obiols en poner en cuestión a los «intérpretes privilegiados» que creían tener en su mano la llave que nos conduciría inexorablemente al paraíso en la tierra (al futuro perfecto).

Esta crítica a los peores vicios del denominado «socialismo científico» va acompañada de una puesta en duda del «socialismo utópico», de la imposición doctrinaria de futuros abstractos. Establece aquí Obiols una analogía con el urbanismo y la arquitectura modernos para señalar que no se trata de construir la «ciudad alternativa» sino de revitalizar la ciudad tradicional, de transformar la realidad «desde dentro» estableciendo nuevas prioridades. La perspectiva socialista estaría así no en creer que vamos a ocupar un nuevo suelo en el que vamos a poder establecer reglas diferentes sino en acontecer programas simples y valientes, en articular operaciones realistas y reorganizaciones concretas que sirvan para mejorar.

Si únicamente contáramos con esta crítica al «socialismo científico» y al «socialismo utópico» se podría pensar que el libro de Obiols es un canto al

reformismo. El autor apuesta claramente por un proyecto reformador pero no cae en el error de considerar que toda política, por el hecho de denominarse a sí misma socialista o por abominar del cientifismo y del utopismo, sea sin más reformista. ¿Se puede ser reformista en un mundo donde los desequilibrios internacionales, las tensiones entre los bloques militares, la carrera de armamentos, el paro estructural en los países avanzados y la deuda externa en el Tercer Mundo aparecen como realidades congeladas, como situaciones dramáticamente irresueltas, sin posibilidad de modificación? Esta interrogante que aparece en el libro de Obiols, al caracterizar nuestro momento actual, da idea de que no estamos ante el consabido ensayo que ironiza acerca de todo contenido utópico hasta el punto de quitar todo significado a una tradición de solidaridad con los oprimidos. Obiols no está entre aquellos que abandonan «arrepentidos» (pág. 59) su arsenal de sueños para dar muestras del más perfecto realismo, que en muchas ocasiones encubre el cinismo más insoportable.

El reformismo que Obiols defiende no quiere ser conformista pero tampoco está dispuesto a sucumbir a la nostalgia. El precio por mantener la honestidad no debe ser la reducción de la

política a una actividad testimonial y minoritaria que habla voluptuosamente de los males que nos rodean, sin esperanza de poder transformar la realidad. Frente al «cinismo» y la «lamentación» Obiols apuesta por la necesidad de una política ambiciosa que desprecia los carrerismos y las poltronas y apunta más alto. El talante que debe animar la acción política debe huir tanto del «hedonismo individualista esceptico» como del «sectarismo intolerante» al que ha conducido a menudo una «superpoliticización obsesiva». Una actitud «estoico-epicúrea» que sepa auspiciar un vitalismo apasionado y consciente puede ser la mejor fórmula para aunar la acción solidaria con la sabiduría irónica.

La crítica al «testimonialismo», al «negativismo», a las posiciones puramente «resistenciales» es tan frecuente, en la obra que comentamos, como la puesta en duda de la «política espectáculo» en la que la «imagen» sustituye a la confrontación de ideas. Obiols quiere articular lo que en el lenguaje de Engels denominaríamos la «revolución de la mayoría» sin sucumbir a la política artificial, empaquetada, a la política en manos del marketing.

Los partidos políticos «materiales, tecnocráticos, ligeros» al someter las ideas a tratamiento, acaban por

infantilizar al electorado. Obiols cree que la respuesta no está en la reivindicación de partidos «unificados-centralizados» que se constituyen como partidos de clase, repudian la sociedad existente y configuran una «contrasociedad».

Como irá observando el lector, el razonamiento del autor es negador de dos modelos existentes y auspiciador de un proyecto alternativo. Ni cinismo ni lamentación, ni arrepentimiento ni nostalgia, ni tecnocracia ni contrasociedad, ni gestión acomodaticia ni resistencia testimonial. El razonamiento es, desde mi punto de vista, mucho más interesante cuando niega los vicios de los dos modelos que cuando propone un proyecto alternativo.

Muchos podríamos estar de acuerdo en la necesidad de superar el dogmatismo anacrónico sin caer por ello en el pragmatismo competitivo. La pregunta es, ¿qué entendemos por arcaísmo dogmático?; ¿a qué nos referimos cuando hablamos de gobernabilidad pasiva? El lector puede sentirse interesado en ahondar en la conexión entre estos vicios y las realidades de nuestro tiempo. Obiols en su libro va analizando algunas de estas realidades al referirse a la situación actual del socialismo europeo y al modelo español de transición política. Antes de adentrarnos

en estos temas conviene dejar claro el «modelo alternativo» que el autor propone. Para Obiols hay que articular un proyecto mayoritario que sea capaz de vencer las resistencias de las estructuras congeladas y las inercias de la evolución histórica.

La primera pregunta que podríamos hacernos obviamente es: ¿se puede aspirar a alcanzar la mayoría electoral sin sucumbir al marketing político? El estudio del mercado electoral para establecer el mensaje más eficaz y poder así promover el producto más adecuado amenaza con sustituir toda confrontación de ideas por un proceso de elección entre imágenes con las que se identifica el electorado. El electorado está destinado a otorgar periódicamente la legitimidad democrática para gobernar, legitimidad que los políticos deben saber conquistar «cultivando su imagen». Alcanzada esa mayoría se trata de gobernar de acuerdo con las fuerzas reales y gestionar el Estado respetando los intereses dominantes. ¿Se puede escapar a la «política de imagen» y a la «gestión acomodaticia»?

Cuando Obiols analiza la transición política española quiere huir de la «izquierda sufridora» que masoquistamente hincha a los adversarios y plantea que todo se ha desarrollado

de acuerdo con los cálculos y los intereses de los sectores dominantes. El riesgo del «masoquismo» no debe sin embargo ocultar otro riesgo posible: el de irse amoldando pasivamente reduciendo las ambiciones y dejando las cosas como están. El estilo de Obiols es, sin embargo, demasiado «cauto», demasiado «elegante», demasiado «educado», cuando tiene que aplicar su «crítica teórica» a las «realidades prácticas» de nuestro país.

Es cierto que Obiols señala algunos riesgos (el aislamiento orgulloso defensivo) y propone algunos cambios en la acción de gobierno (mientras en una primera etapa se hizo lo que todo gobierno debería haber hecho, procede ahora realizar lo que ningún otro gobierno podría hacer) pero el conjunto del análisis es claramente insuficiente. Desde silencios clamorosos en la evolución del socialismo español (marxismo, OTAN) hasta delicuescentes defensas de la actual política económica, el hecho es que la abundancia del análisis teórico se torna escasez cuando hay que aplicarlo prácticamente.

El análisis de la actual situación de la izquierda europea considero que es mucho más interesante. Obiols se refiere básicamente a la ofensiva conservadora en Gran Bretaña, al pensamiento de O. Palme y

a la evolución del socialismo francés. Esta triple experiencia le sirve a Obiols para, en una de las ideas más sugerentes del libro, plantear la posibilidad de que el ciclo conservador esté llegando a su fin y se produzca un relanzamiento de la izquierda europea. El problema con el que nos encontramos es la definición de izquierda europea de la que se parte. Obiols entiende por izquierda la izquierda de gobierno, la que incorpora mayorías sociales para gobernar, la que no sólo niega el sistema sino que gestiona el presente para construir el futuro. Una izquierda emancipatoria no puede, según Obiols, renunciar a ejercer el poder y definirse como pura resistencia, por miedo a ser transformada por el sistema que pretendía transformar. La crítica a una izquierda «condenada» a ser eternamente oposición y la defensa de una izquierda con voluntad de gobierno es explícita y clara por parte del autor.

La cuestión es si podemos despachar el asunto con tanta rapidez. Al hablar de la actual izquierda europea, Obiols peca de esquemático. Bien está la «voluntad de gobierno» y el deseo de transformar el sistema. Pero, ¿se puede afirmar que con el «compromiso keynesiano» la izquierda «había ganado»? (pág. 90) ¿Había vencido o había sido integrada en el sistema

capitalista? Las conquistas innegables del Estado del bienestar no pueden, desde mi punto de vista, definir sin más al socialismo como movimiento emancipatorio. El crecimiento económico y la solidaridad social en manos de buenos funcionarios y de técnicos competentes, con sindicatos fuertes y con empresarios boyantes, son realidades que pueden ser apoyadas por distintas ideologías políticas (liberales, socialcristianas, socialdemócratas). ¿Se reduce a ese modelo de Estado el proyecto socialista?

Pienso que si distinguimos el ideal socialista tanto del socialismo real como de la socialdemocracia de posguerra, la respuesta forzosamente ha de ser negativa. La ofensiva conservadora favorece al individualismo empresarial competitivo, defensora del mercado desregulado y postuladora de la «libertad de elegir» no puede hacernos olvidar la crítica «libertaria» al Estado del bienestar. El Estado del bienestar ha sido puesto en duda tanto por los teóricos marxistas que han insistido en la actual división internacional del trabajo como por los movimientos sociales que han puesto en duda su rigidez burocrática y su funcionamiento escasamente democrático. La fuerza de la ofensiva conservadora no puede hacernos defender como socialista un Estado legiti-

mador del capitalismo avanzado.

Si discrepamos de la tajante descalificación que realiza Obiols de la labor resistencial (por minoritaria y testimonial que ésta sea) de la riqueza no gubernamental, debemos, no obstante, subrayar el interés que tiene su estudio de la evolución del socialismo francés y de las dificultades del laborismo británico. En relación al caso británico Obiols señala la constitución de «una sociedad de dos tercios» que plantea la división de la sociedad actual entre un grupo dirigente; un grupo de trabajadores estables, profesionales, clases medias urbanas; y por último un sector (un tercio) de parados, trabajadores manuales, disminuidos, ancianos y jóvenes en paro. ¿Cómo articular la relación entre los sectores profesionales y los trabajadores en paro, entre las clases medias urbanas y los marginados, entre los trabajadores estables y los trabajadores precarios? Obiols, consciente de la ofensiva conservadora y de sus efectos sobre los sectores intermedios (sobre el segundo tercio), rechaza la posibilidad de una izquierda que tuviera por misión representar únicamente al tercio de los excluidos y estuviera por ello condenada a desarrollar un papel resistencialista, subalterno, sin perspectiva de gobierno. La izquierda,

justamente por apostar por una cultura de gobierno, debe concitar el apoyo de una parte significativa de los otros dos tercios de la sociedad. Tras los efectos de la década conservadora (paro masivo, trabajo negro, desregulación, carrera de armamentos...) las posibilidades de incorporar mayorías sociales a un proyecto de progreso son mayores si la riqueza sabe aprender la «lección francesa» y comprender que el keynesismo nacional es sumamente difícil. Si el fracaso laborista pone de manifiesto la dificultad de articular un proyecto mayoritario (dada la división de intereses y perspectivas entre «excluidos» e «integrados en los sectores intermedios») el fiasco del socialismo francés exige reafirmar que el dato esencial pasa hoy por una internacionalización de la vida económica.

Ya nos hemos referido en estas páginas de *Leviatán* (al comentar la obra de Manuel Azcárate) a la necesidad de lograr la unidad política de la izquierda europea para hacer frente a problemas esenciales: paro, revolución tecnológica, desequilibrios internacionales, desarrollo cualitativo, etc. Obiols insiste en esta perspectiva matizando que esta pérdida de la capacidad de manobra de los Estados nacionales, dada la internacionalización de la vida económica, no puede ocultar la

necesidad de construir esa nueva unidad sobre bases federalistas.

El lector habrá observado que mis críticas a algunos de los aspectos de este libro de Obiols (a su excesiva condescendencia con la gestión gubernamental del PSOE y a su destemplada contundencia con la izquierda resistencial) responden al hecho de que coincido mucho más con su crítica a los «arrepentidos» que con su caricatura de los «nostálgicos». El esfuerzo por delimitar un camino propio conduce a menudo a esquematizar los ajenos. El intento loable de Obiols por diseñar una silueta distinta que, sin ser presa de «viejos dogmatis-

mos», le impida sucumbir a la eficiencia electoralista y la gobernabilidad pragmática se salda con una reiterada insistencia en el papel gubernamental de la izquierda. ¿No se da por supuesto lo que hay que demostrar? ¿Se puede realmente inscribir un proyecto en la historia mediante la gestión gubernamental? Raimon Obiols, que a finales de los setenta nos ilustró con múltiples textos gramscianos acerca del bloque social de progreso y de la necesidad de articular un proyecto de hegemonía anticapitalista, vuelve en este libro su mirada a Olof Palme. Efectivamente, Palme puede ser un buen ejemplo de un político no propenso a la política de imagen ni pro-

clive a la gestión acomodaticia, un político por lo demás claramente reformador dentro de los límites del capitalismo avanzado. Esta referencia a Palme es probablemente el momento más concreto de todo el modelo alternativo de Obiols.

Ahora bien, España no es Suecia. En nuestro país el sueño de la neutralidad activa se evaporó un día aciago. A partir de entonces para muchos sectores de la izquierda social, no gubernamental, la cultura de gobierno acaba siempre siendo acomodaticia con los intereses dominantes. Para todos estos sectores ha sido tal el grado de «arrepentimiento» que la «nostalgia» es inevitable.

**E.P. THOMPSON
DE NUEVO**

Miguel PORTA PERALES

E.P. THOMPSON
Nuestras libertades y nuestras vidas
Crítica
Barcelona, 1987

En los últimos tiempos, y por motivos obvios (aceleración de la carrera de armamentos, guerra de las galaxias, auge de los movimientos pacifistas, conversaciones sobre paz y desarme, etc.), las reflexiones sobre la cuestión de la paz y la defensa han experimentado un auge considerable. Políticos, economistas, sociólogos, filósofos y una larga nómina de especialistas varios (polemólogos, irenólogos, estrategas, etc.) nos han brindado reflexiones, análisis, estudios, investigaciones y conjeturas sobre el

complejo militar industrial, la creciente militarización del mundo, el exterminio nuclear, la posibilidad de una tercera guerra mundial, la teoría de la disuasión, las alternativas de paz y defensa, etc. Y toda esta avalancha de papel ha dado lugar a la aparición de una nueva disciplina que los más atrevidos (y temerarios) denominan «ciencia de la paz», y los más prudentes «investigación sobre la paz».

E.P. Thompson, el conocido historiador de la clase obrera británica, se ha con-

vertido en una de las cabezas visibles del movimiento por la paz (miembro del CND o Convención Europea para el Desarme Nuclear, y fundador de END o Campaña por el Desarme Nuclear Europeo) y de la investigación por la paz. La labor publicista de Thompson por lo que se refiere al militarismo, armamentismo e investigación por la paz es ya bastante conocida

En *Nuestras libertades y nuestras vidas* —volumen formado por un conjunto de artículos escritos hace un par de años —Thompson reflexiona sobre aquellos temas habituales en él (el *exterminismo*, la carrera de armamentos, la disuasión, las alternativas pacifistas, etc.). No sería ocioso, pues, que recordemos brevemente las ideas de Thompson al respecto. Ello nos permitirá ver la novedad (o no novedad) del libro que ahora nos presenta *Crítica*. Vayamos al grano.

Para Thompson es un grave error atribuir la carrera armamentista y la guerra fría (o «friísima», como dice el británico) a la voluntad perversa del imperialismo. Para nuestro autor, por el contrario, no se puede recurrir exclusivamente a categorías como «lobby armamentista», «interés militar» o «imperialismo», sino que la explicación de la carrera armamentista, en ambos bloques, hay que bus-

carla en una compleja disposición de fuerzas económicas, políticas, ideológicas e institucionales que se apoyan las unas en las otras por mor de la defensa de intereses mutuos (sometimiento y control de Estados clientes, legitimación de cualquier tipo de aventura, supresión de los disidentes, mantenimiento y regulación continua de los aparatos de poder, obtención de disciplina social y cohesión para poder resistir los embates del «otro», etc.). Pero, y ahí reside una de las características esenciales del proceso según Thompson, la carrera armamentista llega a un punto en que se convierte en auto-generadora de nuevos instrumentos de destrucción a causa del movimiento inercial que adquiere. En las propias palabras de Thompson: llega un momento en que «la guerra fría se ocupa de sí misma», cosa que se traduce en la existencia de un «exterminismo» enfrentado a otro (EEUU *versus* URSS), lo que hace que no se trate ya de una «cuestión de clase, sino de especie».

La teoría de la disuasión también es criticada duramente por el británico. En efecto, para Thompson la disuasión es una teoría carente de sentido que no busca el equilibrio que pregonaba, sino que se ha transformado en la excusa para buscar ventajas en la carrera armamentista, al tiempo que fomenta en el otro

bloque las armas de réplica que en teoría debía disuadir. La disuasión, afirma Thompson, se ha convertido en «adicción» (continua aceleración de la investigación y del desarrollo armamentístico), adicción que además de convertirse en una apología del poder da lugar a nuevas armas que, en el fondo, tienen un significado simbólico, ya que con las armas nucleares existentes se supera en mucho el *overkill* (capacidad de destruir varias veces la vida en el planeta).

Una de las ideas más conocidas (y de más éxito) de nuestro autor es la del «exterminismo». El exterminismo —última etapa de nuestra civilización, según Thompson— no es concebido como un proceso criminal conscientemente buscado por los altos dirigentes de ambos bloques, sino que el exterminismo designa «los rasgos característicos de una sociedad que se expresan, en diferentes grados, en su economía, su forma de gobierno y su ideología, rasgos cuya dirección conlleva como resultado el exterminio de multitudes». El exterminismo, por supuesto, es isomórfico (en ambos bloques cristalizan idénticas formas de pensamiento y acción). Lo preocupante del exterminismo, para Thompson, es que no es susceptible de superación dialéctica: un exterminismo se enfren-

ta a otro, «resolviéndose» la contradicción mediante el exterminio recíproco.

La alternativa está, para Thompson, en el surgimiento de un potente movimiento por la paz (autónomo y no alineado) que tenga como objetivo la defensa de la civilización y la ecosfera. Dicho movimiento ha de combatir por la abolición de las estructuras ideológicas y de seguridad propias de la guerra fría al tiempo que ha de reivindicar una «tercera vía» autónoma e independiente de las superpotencias que tenga como norte el libre intercambio y evaluación de la información, la reunificación cultural de Europa, la reintroducción de las mediaciones políticas y diplomáticas, la intervención efectiva contra el exterminismo y la regeneración del internacionalismo (comprometer a los ciudadanos de ambos bloques en la lucha por la paz).

¿Existe alguna diferencia entre estas ideas esbozadas por Thompson en anteriores trabajos y las que ahora nos presenta en *Nuestras libertades y nuestras vidas*?
Respuesta: prácticamente ninguna. A lo sumo se trata de simples diferencias de matiz. Verbigracia: el exterminismo (término «feo y excesivamente retórico», como reconoce el propio Thompson) no es abando-

nado («sigo pensando que la civilización está cerca de la etapa final», afirma el británico); el equilibrio y la disuasión continúan siendo unas falsas diosas a las que ambas potencias «rinden culto»; las alternativas siguen siendo las mismas (desnuclearización, y desarme, zonas de paz, deshielo, internacionalismo pacifista, etc.); y, por supuesto, la paz es la cosa más importante («todos los problemas con que hemos de enfrentarnos resultan menores ante la defensa de nuestras libertades y de nuestras vidas», concluye Thompson).

El trabajo de Thompson tiene, en mi opinión, aciertos y desaciertos. Nadie puede negar que el británico introduce el dedo en la llaga cuando critica el desenfreno de la carrera armamentista, cuando advierte de los peligros posibles que nos acechan, cuando desenmascara los intereses de la URSS y de los EEUU, cuando habla del secuestro de la política en manos del militarismo, cuando reclama una política de paz y cooperación para Europa y para el mundo, etc.

Ahora bien, los aciertos conviven con, digámoslo así, desaciertos: la obsesión por el apocalipsis y el holocausto nuclear; el miedo al milenio; el moralismo religioso que vertebra muchas de las reflexiones del britá-

nico (profetismo, patetismo, búsqueda de un «más allá», perfidia americana, etc.); el preconizar un desarme (unilateral) que puede conducir a la «finlandización» o «vichización» de Europa (por mucho que Thompson crea que la URSS no tiene «apetito alguno de guerras de conquista o expansión»), el descalificar expansión»), el descalificar apresuradamente la discusión, el proponer una inefable y no definida sociedad «antiestatista y libertaria» inspirada por una «conciencia ecológica»; y sobre todo, el subordinar a la sola cuestión de la paz cualquier otra reivindicación o problema.

Sería absurdo e injusto negar el valor de algunas de las reflexiones aportadas por el pacifismo, pero no habría que olvidar que el pacifismo — contrariamente a lo que piensan ciertos pacifistas de humor visceral— no se encuentra por encima del bien y del mal y que (junto a los aspectos positivos) el pacifismo es portador de una serie de peligros latentes que conviene sacar a colación y discutir. Y es que hay demasiada consciencia autosatísfecha (y no lo decimos por el británico, que conste) instalada en las filas pacifistas que cree que se ha alineado con las fuerzas del bien, del progreso, de la historia y un montón de cosas más.

UNA QUERRELLA CONTRA LA INFAMIA

Arnoldo LIBERMAN

Félix GRANDE,

La calumnia (De cómo a Luis Rosales, por defender a Federico García Lorca, lo persiguieron hasta la muerte)

Mondadori,
Madrid, 1987

La historia de la Guerra Civil, la dolorosa historia de España, esa historia cansada hasta el hastío, es antes que nada la historia de un resentimiento. En un país de simétricas muertes significativas y de adhesión frenética a lo irracional, la sensatez, el ademán justiciero, la piedad, la palabra ordenadora y reordenadora, el amor mismo, han sido muchas veces auténticas transgresiones y, como sucede en estas crispadas antinomias, bebida humanísima de primera necesidad. Todo, desde la historia a la conciencia, va de movimientos binarios y en el ir y venir de esa dialéctica muchas veces oprobiosa se forma un mundo abierto donde todo es posible. En esa posibilidad, en ese espacio de muerte y desolación pero a la vez de expectativa esperanzada, debemos ubicar el último libro de Félix Grande, *La calumnia*. La palabra al servicio del hombre (y no quisiera que se vea en esto ningún énfasis prescindible), la peregrinación de un legítimo derecho, la llama siempre perdurable de la piel desgarrada, el instrumento siempre vivo y sorprendente del compromiso prójimo, todo es, en este libro de Félix Grande, lealtad a su propia y estremecida verdad, es decir a su memoria de hombre de bien, a su terca esperanza contra toda desesperanza. Sabemos que Félix Grande es un poeta

inexorable: que sabe que su palabra es su única posibilidad, su única arma, su único testimonio, y que sólo en ella y desde ella existe la alternativa de reconciliarnos con nuestro propio espejo, es decir, con el misterio de estar en la tierra. Y si, como decía Foucault, «el cuerpo es la superficie de inscripción de los sucesos», a Félix Grande el cuerpo le duele. Porque es él, su cuerpo, es decir el mapa de sus vicisitudes y frenesíes, su vía regia de acceso a la realidad, el discurso siempre ambivalente del deseo. Pero en ese camino, Grande sabe que pensar es sólo pensar intermitencias y que somos permanentemente interferidos por aquello que no es pensamiento. La historia es, en este sentido, una interferencia diaria que nos empuja a espacios previamente insospechados y que conculca nuestra mínima posibilidad de ser realmente libres. La literatura —esa confusa deidad tan entrañable— es pues emergente de nuestras opciones y deber de nuestra conciencia. Es ella la que no permite hablar de uno mismo sin hablar del amigo y que no consiente hablar del amigo sin mirarse a uno mismo.

En esa demanda siempre dual, Grande ha cedido (es decir, ha entregado su rabia y su corazón) a las exigencias de la historia, porque en esa entrega se jugaban las vicisitudes de su investi-

miento de la palabra y su pacto con la tierra. *La calumnia* es eso: una reparación ética donde la palabra recorre serena y a la vez vertiginosamente una leyenda de terror congelado, para que ese frío mortuorio no nos haga abominar de la justicia, de la pequeña justicia a la que debemos y que queremos aspirar. Félix Grande nos empuja (su prosa plena de ardor y temblor así nos impregna) a recobrar una visión más justa y ajustada de la historia sin que ello diagnostique la muerte de la imaginación. Una ética fundacional, digo, cabalgando en las entretelas de una demasiado arbitraria interpretación política, hace que el libro de Grande nos emocione con la sugestión y la turbación de su presencia lúcida y arrojada. Seguramente muchos saben ya de qué se trata.

La historia subyacente de España —es decir, la historia escrita por los rumores, la crónica maniqueísta de los hechos y el resentimiento que crea el dolor absurdo— ha diagnosticado que el poeta Luis Rosales estuvo malamente comprometido en el apresamiento y fusilamiento de su amigo Federico García Lorca. La leyenda de esa muerte que tanto duele en el costado ha servido de drenaje a los enfrentamientos más encarnizados y a las deformaciones más intencionadas. Y pese a que los historiadores han

reproducido casi con fidelidad de espejo los terribles hechos de Granada, la leyenda, que es el espejo pervertido de aquella realidad, ha logrado subsistir por encima de la honestidad de los testimonios y de la pulcritud de los investigadores. La secuela de aquellos momentos es aún hoy irresponsablemente utilizada para seguir dictando la división de España en iluminados y traidores, en rojos y reaccionarios, en aquiescentes y dogmáticos, en malhadados y perversos, según la óptica que en cada caso sea utilizada por el maniqueo de turno. Para muchos (por desgracia, aún para muchos), la verdad histórica es la puta barata a la que se puede someter a la humillación del inquisidor sin la menor ráfaga de culpabilidad. La calumnia no es más que el instrumento de dicho inquisidor. Lo dice Félix Grande con la sencillez de una ética (¿han observado ustedes que toda ética es sencilla?): «Esta defensa del poeta Luis Rosales no tiene, pues, ningún sentido oculto. Aquí no hay más que lo que hay: un escritor que se ha sentado a escribir unas páginas para defender a un hombre maltratado por la calumnia». La literatura como deber de nuestra conciencia, decía antes. El compromiso de un poeta ante el dolor de un maestro, de un poeta nacido en el empeño republicano frente a un poeta nacional vitupeado por

la ignominia. Félix Grande, con el riesgo inevitable de todo grito justiciero, ha salido a ese todavía dolorido campo de batalla que es España, para hacernos saber que cuando se trata de denunciar una arbitrariedad (histórica o no) no hay otra arma que la palabra para que ese grito sea fecundo. Y lo hace con la modestia, con el temblor y con la misericordia de un español que mira a los ojos de su hermano antes de mirar el carné de cualquier partido. La calumnia no es hija de la pasión sino de la perversidad. Grande nos demuestra minuciosamente, lúcida-mente, fervorosamente, implacablemente, que cuando un cuerpo calumnia sólo defeca sobre la dignidad de la vida y que toda palabra dirigida a luchar contra «esa peste» es hija de la fraternidad. La palabra de Félix Grande es hija de la fraternidad aunque por momentos —y eso la hace más visceral y conmovedora— es hija del escepticismo. Grande no cree en los frutos de su testimonio, pero quiere creer en el grito de su propia conciencia. Grita, no para cambiar el mundo, sino para salvar la palabra. Luis Rosales ya ha sufrido bastante los insultos de los mediocres. Durante décadas la historia ha parido todos los maniqueísmos y difamado por doquier la sensatez de los hombres. Rosales ha sido una víctima más de la corrupción de la palabra, del

repeluzno de los esquematismos, de la inmundicia de las verdades absolutas. Félix Grande ha gritado desde este horrorizado libro contra la corrupción, los esquematismos y la inmundicia. Y ha gritado con la autenticidad y la sabiduría «de aquel tazón de loza, grande, lleno de leche con café, donde nadaban algunos pedazos de pan frito» que su madre preparaba en aquellas mañanas de domingo de su campesina infancia. Porque sólo desde el amor (hermosísima palabra que hay que pronunciar en voz baja y mirando hacia atrás por si nos siguen) se puede parir —el verbo no es enfático— este testimonio im-

presionante de un poeta que ha renunciado a las simplificaciones ideológicas e históricas en nombre del derecho a estar dignamente puesto sobre la tierra. Alguna vez Félix Grande denominó a una columna periodística suya *La canción de la tierra* (recordando, claro, a Gustav Mahler. Libros como *La calumnia* nos ayudan a seguir cantando como lo quería Miguel: encima de los fusiles y en medio de las batallas. Este no es sólo el libro de una reparación histórica inexorablemente necesaria sino un libro de amor escrito encima del desconcierto y en medio de nuestra humanísima vulnerabilidad. Ojalá España sepa oír

estos gritos preñados de precisión histórica, estos estremecimientos que inducen a la reflexión profunda y al juicio fraterno. Porque no es sólo Luis Rosales sino España misma quien es diariamente calumniada por los que hacen de la memoria social un vértigo tóxico y una estafa moral. Grande nos induce, con un sobresalto imprescindible que sacude nuestra desidia, a hacer de la historia no sólo la historia de nuestros sueños y el implacable testimonio de nuestro desamparo, sino el más civilizado de todos los bienes: una querrela testaruda y lúcida contra la infamia.



Leviatán

Revista de hechos e ideas

NUMERO 23/24 (Primavera/Verano 1986)

José M.^a Mohedano: *La izquierda y las elecciones generales.* **Enrique Gomáriz:** *El PSOE y la crisis de la derecha.* **Jesús Eguiguren:** *Euskadi: unos resultados sin precedente.* **M.A. Fernández-Ordóñez:** *La política económica del gobierno socialista.* **José M.^a Zufiaur:** *Un discurso sindical europeo.* **J. Rodríguez de la Borbolla:** *Andalucía: aportación a un debate.* **Giancarlo Pasquini:** *América Latina: la democracia difícil.* **Sergio Sporer:** *Evolución sociopolítica en el Cono Sur.* **C. Bru y F. Aldecoa:** *Spinnelli: 60 años de lucha por Europa.* **Altiero Spinielli:** *La crisis de la CEE y sus alternativas.* **Angel Viñas:** *La defensa de Europa occidental.* **Nicos Mouzelis:** *Continuidad y cambio en la política griega.* **P. Glotz, T. Fichter y A. Gorz:** *La mayor libertad posible.* **Norberto Bobbio:** *Reformismo, socialismo e igualdad.* **Massimo L. Salvadori:** *El reformismo como gramática de la izquierda.* **Norbert Lechner:** *La democratización en la cultura posmoderna.* **Antonio G. Santesmases:** *Enrique Tierno: una luz en el túnel.* **Juan Marichal:** *Reflexión sobre la guerra civil.* Entrevista con **Alec Nove.**

NUMERO 25 (Otoño 1986)

Nicolás Redondo: *Modernidad y progreso social.* **Judith Astelarra:** *Movimientos sociales y política.* **Carlos Dávila:** *Energía nuclear: un dilema europeo.* **Immanuel Wallerstein:** *EE.UU. y la crisis mundial.* **A. Gunder Frank:** *La recuperación Reagan.* **Ferenc Feher:** *La estrategia soviética.* **DOCUMENTO:** *Un proyecto socialista para Europa.* **M.A. Quintanilla y R. Vargas-Machuca:** *Socialista después de marxista.* **Josep M. Colomer:** *Valores de izquierda ante la modernización.* **J.J. Brunner:** *Los intelectuales y la democracia.* **J. González Bedoya:** *Centenario de Luis Araquistain.*

NUMERO 26 (Invierno 1986)

J. Solé Tura: *Una lectura autonomista y federal del modelo de Estado constitucional.* **J. Benedicto Millán y M. Requena:** *Las terceras elecciones al Parlamento Vasco.* **C. Martínez Ten:** *La participación política de la mujer en España.* **Angel Viñas:** *Apertura exterior y modernización democrática.* **Edelberto Torres-Rivas:** *Centroamérica: guerra, transición y democracia.* **José Miguel Insulza:** *Centroamérica y el mito de la seguridad.* **Raimon Obiols:** *Tres ejes de reflexión para una política progresista.* **André Gorz:** *El socialismo de mañana.* **A. Ruiz Miguel:** *Filosofía de la paz: algunos problemas éticos.* **Josep Picó:** *País Valenciano: sociología de la sociología.* Entrevista con **Claude Levi-Strauss.**

NUMERO 27 (Primavera 1987)

José M.ª Benegas: *El socialismo vasco: balance y perspectivas.* **E. Martín Toval:** *La crisis de la derecha.* **R. García Cotarelo:** *Las desdichas de las derechas españolas.* **Enrique Barón:** *Los retos de Europa.* **J. Verde i Aldea:** *La Europa de los ciudadanos.* **Michel Mathieu:** *Francia: la difícil cohabitación.* **Enrique Balmaseda:** *La televisión pública.* **Massimo L. Salvadori:** *El ocaso del proyecto comunista.* **Jacques Julliard:** *La izquierda y el poder.* **Felip Lorda:** *Actualidad de Spinoza.* Entrevista con **Karl O. Apel.**

NUMERO 28 (Verano 1987)

Felipe González: *Por una nueva izquierda europea.* **José Ramón Montero:** *Diez años de elecciones en España.* **Fernando Morán:** *Las elecciones al Parlamento Europeo.* **Robin Munro:** *China: ¿contradicciones constructivas?* **J. García Yruela:** *Los canales autonómicos de televisión.* **Ludolfo Paramio:** *La izquierda ante el fin de siglo.* **Fernando Claudín:** *Los intelectuales y la historia.* **Ferenc Feher:** *El paradigma de la redención.* **Vicent Garcés:** *La crisis de la izquierda.* **Reyes Mate:** *El destino político del catolicismo liberal.* **Miguel Porta:** *Los movimientos sociales.*

NUMERO 29/30 (Otoño/Invierno 1987)

Felipe González: *La Europa que queremos.* **José Félix Tezanos:** *El sindicalismo ante la sociedad industrial avanzada.* **José M.ª Zufiaur:** *El sindicalismo en el siglo XXI.* **Alvaro Espina:** *El mercado de trabajo en los años 90.* **Inés Alberdi, Isabel Alberdi:** *La participación política de las mujeres.* **Ludolfo Paramio:** *Tras el diluvio: un ensayo de posmarxismo.* **Reyes Mate:** *Democracia, moral y poder en el debate socialista.* **Peter Glotz:** *Gramsci y la izquierda europea.* **Adam Schaff:** *La crisis de la civilización industrial.* **Claus Offe:** *Razón y política: el poder de las instituciones.*

Suscripción anual: 1.400 ptas.
Forma de pago: Talón bancario o giro postal.

Redacción y Administración:
C/. Monte Esquinza, 30. 28010 Madrid.

LOS DEBATES DE *Jávea*

ALFONSO GUERRA
S.GINER·R.G. COTARELO
R.DORADO·J.F. TEZANOS
J.A. YAÑEZ·J.M. BENEGAS
M. ESCUDERO·M. CASTELLS

NUEVOS HORIZONTES TEORICOS
PARA EL SOCIALISMO

JAVEA II

ALFONSO
GUERRA
A. DE BLAS·V. ZAPATERO
M. ESCUDERO·J.F. TEZANOS
R.G. COTARELO
E. MENENDEZ·F. LAPORTA

EL FUTURO
DEL SOCIALISMO

EDITORIAL S

EDITORIAL SISTEMA

ALFONSO GUERRA
A.SCHAFF·R.G.COTARELO
J.GALTUNG·G.THERBORN
M.ESCUDERO·S.HOLLAND
J.M.BENEGAS·J.F.TEZANOS

EL NUEVO COMPROMISO EUROPEO

JAVEA III

EDITORIAL SISTEMA

EDITORIAL SISTEMA

Editorial Sistema, c/ Fuencarral, 127-1.º TEL. 448 73 19 - 28010 MADRID



Leviatán

Revista de hechos e ideas

C/. Monte Esquinza, 30
28010-MADRID

TARIFA 4 NUMEROS:

España	1.400 ptas.
*Europa	2.100 ptas.
*América	3.100 ptas. (\$20.00)

* Por correo aéreo.

Nombre _____

Dirección _____

Ciudad _____ D. P. _____

Provincia _____

Suscripción a LEVIATAN números

FORMA DE PAGO: Adjunto talón.

Giro postal n.º

Nombre _____

Dirección _____

Ciudad _____ D. P. _____

Provincia _____

Suscripción a LEVIATAN números

Adjunto talón.

FORMA DE PAGO:

Giro postal n.º



Leviatán

Revista de hechos e ideas

C/. Monte Esquinza, 30
28010-MADRID

TARIFA 4 NUMEROS:

España	1.400 ptas.
*Europa	2.100 ptas.
*América	3.100 ptas. (\$20.00)

* Por correo aéreo.



Precio de este ejemplar: 400 Ptas.